Mapas formativos y repertorios cívicos

Competencias cívicas y participación juvenil en la Ciudad de México



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO


INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Consejera presidenta: Patricia Avendaño Durán

Personas consejeras electorales: Erika Estrada Ruiz
María de los Ángeles Gil Sánchez
Maira Melisa Guerra Pulido
Cecilia Aída Hernández Cruz
Sonia Pérez Pérez
Ernesto Ramos Mega

Secretario ejecutivo: Bernardo Núñez Yedra

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL

Partido Acción Nacional: Aníbal Alexandro Cañez Morales, propietario
Daniel Eduardo Martínez Jarero, suplente

Partido Revolucionario Institucional: Enrique Nieto Franzoni, propietario
Cristhian Omar Castillo Triana, suplente

Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México

Partido del Trabajo: Ernesto Villarreal Cantú, propietario
Benjamín Jiménez Melo, suplente

Partido Verde Ecologista de México: Yuri Pavón Romero, propietario
Dafne Rosario Medina Martínez, suplente

Movimiento Ciudadano: Natalia Dahi Barajas Rangel, propietaria
Horacio Salomón Abreu García, suplente

Morena: Carlos Yael Vázquez Méndez, propietario

Somos: Fernando Belaunzarán Méndez, propietario
Luis Ricardo Galguera Bolaños, suplente

Partido PAZ: José Luis Sandoval Canseco, propietario
Joan Sebastián Calva Hernández, suplente

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INVITADOS PERMANENTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Partido Acción Nacional: Ricardo Rubio Torres, propietario
Diego Orlando Garrido López, suplente

Partido Revolucionario Institucional: Tania Nanette Larios Pérez, propietaria

Partido de la Revolución Democrática: Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, propietaria
Pablo Trejo Pérez, suplente

Partido del Trabajo: Ernesto Villarreal Cantú, propietario
Diana Barragán Sánchez, suplente

Partido Verde Ecologista de México: Manuel Talayero Pariente

Movimiento Ciudadano: Royfid Torres González, propietario
Patricia Urriza Arellano, suplente

Morena: Martha Soledad Ávila Ventura, propietaria

Mapas formativos
y repertorios cívicos

Competencias cívicas
y **participación juvenil**
en la **Ciudad de México**

CIUDAD DE MÉXICO • 2026

Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana
Carlos Román Cordourier Real, director ejecutivo

Contenido
Autores: Gustavo A. Urbina Cortés • Sergio A. Bárcena Juárez

Edición
Coordinación: Mauro Sergio Solano Olmedo, coordinador editorial
Supervisión y diseño: Kythzia Cañas Villamar, jefa de Departamento de Diseño y Edición
Formación: José Luis Guerrero Hernández, analista diseñador
Síntesis y corrección de estilo: Andrea Silva Martínez, supervisora de grupo "B"

Primera edición, septiembre de 2026

D.R. © Instituto Electoral de la Ciudad de México
Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines,
Tlalpan, 14386, Ciudad de México

ISBN: 978-607-8605-95-8

www.iecm.mx

Hecho en México
Publicación gratuita, prohibida su venta

Índice

Presentación 9

1. Introducción 12

2. Posicionamiento analítico y justificación del estudio 14

2.1. Síntesis analítica: cuatro tensiones teóricas que estructuran el campo 15

2.1.1. Primera idea clave: las competencias cívicas como constructo multidimensional y situado 15

2.1.2. Segunda idea clave: la estratificación social de las competencias cívicas 16

2.1.3. Tercera idea clave: identidades morales, polarización afectiva y competencias deliberativas 16

2.1.4. Cuarta idea clave: las instituciones educativas como espacios privilegiados, pero desiguales, de formación 17

2.2. Vínculo entre literatura y diseño metodológico: fundamentación de las decisiones analíticas 18

2.2.1. Operacionalización de dimensiones teóricas en instrumentos de medición 19

2.3. Consideraciones metodológicas 23

3. Resultados cuantitativos: brechas en saber cívico y participación de la juventud en la Ciudad de México 26

3.1. Marco analítico 26

3.1.1. Enclaves formativos, desigualdad y cambio cultural 27

3.1.2. Diseño conceptual del instrumento de medición 28

3.2. Hallazgos del componente cuantitativo 29

3.2.1. Caracterización inicial de la muestra 29

3.2.2. Dimensión cognitiva 31
3.2.3. Dimensión actitudinal y de valores 47
3.2.4. Dimensión de habilidades 63
3.2.5. Dimensión participativa 66

4. Resultados cualitativos: mapas formativos y repertorios cívicos de la juventud en la Ciudad de México 84

4.1. De la pregunta general al lugar de la fase cualitativa 84

4.2. Competencias cívicas como entramado situado: puntos de partida empíricos 86

4.2.1. Centralidad ambivalente de la política: Entre el compromiso analítico y la fatiga emocional 86
4.2.2. Percepción de agencia y eficacia política subjetiva: la escala como mediadora del impacto 88
4.2.3. Las instituciones educativas como espacios ambivalentes de socialización política 90

4.3. Identidades morales, polarización afectiva y manejo del disenso 91

4.3.1. La brecha entre declaraciones de apertura y prácticas cotidianas de evitación 91
4.3.2. Polarización afectiva y la construcción del *otro* político 93
4.3.3. Competencias deliberativas observadas en contexto estructurado 94

4.4. Repertorios de participación y desobediencia civil 95

4.4.1. Legitimidad condicionada de la desobediencia civil: criterios normativos en contexto 95
4.4.2. Repertorios de acción propuestos y horizontes de eficacia 97

4.5. Ecosistemas informativos, burbujas ideológicas y competencias de verificación 99

4.5.1. Cartografías del *feed* político: plataformas digitales, creadores de contenido y mediación algorítmica 99
4.5.2. Reglas prácticas de verificación y escepticismo asimétrico 100
4.5.3. Burbujas ideológicas y las modalidades del contacto con el *otro lado* 102

4.6. Bloque hiperpolémico: reglas institucionales, espacios seguros y debido proceso 103

4.6.1. La moción sobre declaraciones ideológicas obligatorias para el profesorado 103
4.6.2. Dilemas sobre criterios, arbitrariedad y confianza institucional 104
4.6.3. Desconfianza institucional y preferencia por soluciones inmediatas 104

4.7. Síntesis analítica y aportes de la fase cualitativa al proyecto...105
4.7.1. Patrones transversales y ejes de tensión ... 105
4.7.2. Aportes específicos para el estudio y para el Instituto Electoral de la Ciudad de México ... 106
4.7.3. Líneas abiertas para análisis posteriores y articulación con la fase cuantitativa ... 108

5. Hallazgos y conclusiones ... 110

5.1. Síntesis de hallazgos principales ... 110
5.1.1. Competencias cívicas como entramado situado y contextualmente activado ... 110
5.1.2. Estratificación social y reproducción de desigualdades cívicas ... 111
5.1.3. Polarización afectiva, identidades morales y erosión de competencias deliberativas ... 111
5.1.4. Instituciones educativas como espacios ambivalentes de socialización política ... 112
5.1.5. Ecosistemas informativos digitales, mediación algorítmica y erosión de la esfera pública ... 113

5.2. Conclusiones teóricas y conceptuales ... 114

5.3. Respuestas a las preguntas de investigación ... 115

6. Recomendaciones institucionales ... 118

6.1. Foros permanentes de deliberación juvenil y desarrollo de competencias dialógicas ... 118
6.2. Programas integrales de alfabetización mediática y verificación de información ... 119
6.3. Intervenciones para el manejo de la polarización afectiva y la construcción de una cultura política dialogante ... 120
6.4. Fortalecimiento institucional, transparencia y demostración de capacidad de respuesta ... 121
6.5. Construcción de alianzas estratégicas multiactorales y evaluación sistemática de impacto ... 122
6.6. Intervenciones focalizadas para reducir las brechas de desigualdad cívica ... 123
6.6.1. Despliegue segmentado de las intervenciones cognitivas y de alfabetización cívica ... 124
6.6.2 Intervenciones diferenciadas sobre autoeficacia, barreras identitarias y cultura democrática del desacuerdo ... 125
6.6.3. Fortalecimiento escalonado de habilidades cívicas y repertorios de participación ... 125

7. Fuentes consultadas ... 127

Presentación

En la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana (CGDHECyCC) impulsamos la elaboración de estudios que nos permitan comprender mejor a la población joven capitalina y su manera de involucrarse en los temas públicos.

El estudio *Mapas formativos y repertorios cívicos: competencias cívicas y participación juvenil en la Ciudad de México* nace de la convicción de abandonar tanto los diagnósticos improvisados como los proyectos diseñados por intuición y, en su lugar, construir políticas públicas basadas en análisis realizados con rigor científico y evidencia empírica.

Las preguntas que motivaron este estudio surgieron de una inquietud profunda sobre la distancia entre nuestro quehacer institucional y la realidad cotidiana de las juventudes. Crear políticas públicas focalizadas nos exige analizar las características de la juventud en la Ciudad de México, a fin de identificar si, como instituciones públicas, estamos respondiendo realmente a los procesos de formación ciudadana con herramientas apropiadas para la era digital.

En el debate público, las juventudes suelen ser objeto de una narrativa simplista y, sobre todo, injusta. Las voces que, desde una supuesta autoridad moral, señalan a las nuevas generaciones de apáticas o desinteresadas parten de prejuicios y de una incapacidad para comprender los contextos de esta población. Estos juicios, además, resultan cómodos porque nos eximen de la responsabilidad de entender las estructuras que condicionan su participación en el ámbito público. El estudio elaborado por los académicos Sergio Arturo Bárcena Juárez y Gustavo A. Urbina Cortés rechaza categóricamente esa visión reduccionista y, por el contrario, busca entender de mejor manera a las generaciones que están iniciando su interacción con los temas públicos y políticos.

En lugar de juzgar, decidimos observar; en lugar de suponer, decidimos escuchar las trayectorias y los contextos específicos de quienes habitan esta ciudad. Así, la primera lección de esta investigación es el reconocimiento de

la pluralidad. No existe *la juventud* como un bloque homogéneo; *las juventudes* en la Ciudad de México son diversas en cuanto a recursos, territorios, condiciones materiales y oportunidades de acceso al espacio público.

Bajo esta premisa, fue vital que la investigación no se limitara a las juventudes escolarizadas. Optar por incluir a personas jóvenes fuera del sistema académico significó una toma de postura ética y democrática, ya que no podemos construir ciudadanía escuchando únicamente a quienes son fáciles de localizar en centros de estudio y universidades. Tenemos la obligación de observar todos los contextos y reconocer que los aprendizajes cívicos también ocurren en espacios informales y, a menudo, invisibilizados.

El mapa que dibuja este estudio es complejo y desmiente la idea de la apatía juvenil. Los datos revelan a una población joven que posee un compromiso genuino con principios democráticos fundamentales, como el respeto a la pluralidad, la tolerancia y el diálogo como la herramienta más importante para la resolución de conflictos.

No obstante, hay una brecha notable entre la adhesión a estos valores y las condiciones reales en las que se ejerce la ciudadanía. Los hallazgos sugieren que las competencias cívicas no son un conjunto estático de conocimientos que se adquieren de una vez y para siempre. Por el contrario, constituyen habilidades vivas que se practican y se fortalecen, o se debilitan ante experiencias concretas.

Si bien la universidad sigue siendo un espacio formativo central, la ciudadanía también se construye en la familia, en el trabajo, en los grupos de pares y, de manera determinante, en los entornos digitales. Estas competencias se afianzan cuando el entorno permite el disenso y la argumentación sin temor a la exclusión, pero también se erosionan cuando la desinformación afecta negativamente el debate o cuando la persona percibe que su intervención no tiene un impacto tangible en la realidad.

La pregunta ya no debe ser por qué las personas jóvenes no se interesan en los procesos e instituciones de la democracia, sino qué tipo de experiencias públicas les estamos ofreciendo y qué barreras estructurales limitan su participación. Uno de los puntos más reveladores del estudio es la transformación radical en los modos de consumo de información pública. Para las juventudes actuales, el dispositivo móvil no es una herramienta más, sino la puerta principal hacia la realidad política y el pensamiento colectivo.

Hoy nos desenvolvemos en un entorno público saturado y acelerado que apela sobre todo a las emociones. Este contexto nos obliga, como autoridad electoral, a replantear la educación cívica desde sus cimientos.

La formación ciudadana actual debe contemplar una alfabetización mediática, digital y territorial. Necesitamos dotar a las personas de herramientas para la lectura crítica, criterios para evaluar la fiabilidad de las fuentes y

capacidades para sostener desacuerdos en un espacio público cada vez más polarizado.

Es obligación de las autoridades electorales preguntarse si sus estrategias están diseñadas para el mundo que realmente existe o para un mundo que únicamente sobrevive en el imaginario colectivo. Esta investigación nos permite repensar programas y metodologías, construir indicadores más finos que midan no sólo el alcance, sino la efectividad de las acciones que buscan crear un aprendizaje cívico significativo, además de diseñar estrategias focalizadas que reconozcan distintas rutas de formación ciudadana en función de contextos heterogéneos.

Finalmente, este informe nos coloca en un lugar más objetivo para formular nuevas preguntas y dejar atrás las simplificaciones. En ese sentido, representa un paso firme hacia una relación con las juventudes basada en el respeto, la precisión y la responsabilidad pública.

Agradezco a las áreas del Instituto que trabajaron en este proyecto y, de manera particular, al Tecnológico de Monterrey, a El Colegio de México y a las personas académicas que hicieron posible este trabajo.

Ernesto Ramos Mega
Consejero electoral y presidente de la CGDHECyCC

1. Introducción

El estudio sobre las competencias cívicas de las personas jóvenes de la Ciudad de México se inscribe en la iniciativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para contar con diagnósticos analíticos y robustos que orienten su labor en materia de educación cívica, construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la participación democrática. En ese sentido, *Mapas formativos y repertorios cívicos: competencias cívicas y participación juvenil en la Ciudad de México* parte de la definición de competencias cívicas adoptada por el propio IECM, entendidas como la articulación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten ejercer derechos y responsabilidades en el marco de una sociedad democrática.

El estudio descansa sobre la premisa de que la calidad de la ciudadanía democrática depende, en gran medida, del desarrollo efectivo de un entramado de competencias cívicas que combine capacidades cognitivas, deliberativas, valorativas y prácticas. El objetivo general es analizar la presencia, el desarrollo y las brechas en las competencias cívicas de las personas de 18 a 24 años en la Ciudad de México, con el propósito de generar evidencia que oriente el diseño de estrategias institucionales de educación cívica que fortalezcan una ciudadanía crítica, informada y activa.

De este objetivo general se desprenden varios específicos, estrechamente vinculados entre sí. En primer lugar, caracterizar los componentes de las competencias cívicas presentes en la población joven capitalina, atendiendo a su dimensión cognitiva, procedimental, valorativa y participativa. En segundo lugar, examinar las brechas sociales, educativas y territoriales asociadas al desarrollo desigual de estas competencias, poniendo especial atención a las diferencias entre tipos de instituciones educativas, trayectorias escolares y situaciones de inclusión o exclusión del sistema educativo formal. En tercer lugar, analizar las prácticas informativas digitales de las personas jóvenes en relación con el pensamiento crítico y con la participación política y cívica. En cuarto lugar, diseñar propuestas de intervención educativa y cívica dirigidas al IECM, orientadas a fortalecer las competencias

cívicas juveniles y a promover su participación informada, crítica y responsable, particularmente en los entornos digitales.

En términos temporales, la investigación se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2025, de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto para el diseño del estudio, levantamiento de encuestas, análisis de información y presentación de resultados. La población de referencia se definió a partir de tres dimensiones: etaria (18 a 24 años), territorial (residencia en la Ciudad de México) y educativa (juventudes no escolarizadas y escolarizadas en educación superior). Esta delimitación permite atender, de manera articulada, a los retos que plantean las desigualdades sociales, educativas y territoriales para el desarrollo de competencias cívicas robustas.

El estudio se organiza en torno a un conjunto de preguntas de investigación que articulan la perspectiva institucional del IECM con el marco analítico elaborado por el equipo de investigación. La interrogante que funciona como hilo conductor puede formularse del siguiente modo: ¿cómo se configuran, distribuyen y ejercen las competencias cívicas entre jóvenes de 18 a 24 años que habitan una ciudad con desigualdad profunda, transitan por instituciones educativas estratificadas y socializan políticamente en ecosistemas digitales tan fragmentados como polarizados?

El diseño metodológico del proyecto es mixto de carácter secuencial, es decir, integra de forma complementaria herramientas cuantitativas e instrumentos cualitativos. El componente cuantitativo consta de un cuestionario estandarizado que recaba información sobre conocimientos cívicos, valoraciones respecto a la democracia y sus instituciones, repertorios de participación, prácticas informativas digitales, confianza interpersonal y trayectorias educativas y laborales.

El componente cualitativo consiste en un dispositivo interpretativo que profundiza en los procesos, significados y experiencias que subyacen a las distribuciones observadas en la encuesta. Mediante grupos focales se exploró cómo las personas jóvenes discuten asuntos públicos potencialmente conflictivos, qué argumentos movilizan, cómo gestionan el disenso, qué recursos afectivos y cognitivos ponen en juego y qué papel atribuyen a sus experiencias formativas y a sus fuentes de información en la configuración de sus posiciones.

Con estos elementos, el informe busca ofrecer al IECM y a otros actores interesados un diagnóstico amplio, analíticamente consistente y orientado a la acción sobre las competencias cívicas de las personas jóvenes de la Ciudad de México, a fin de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía más informada, crítica y distribuida de forma equitativa.

2. Posicionamiento analítico y justificación del estudio

El estudio parte de una premisa compartida por múltiples fuentes de la literatura internacional y latinoamericana: la calidad de la ciudadanía democrática no depende únicamente de la existencia formal de derechos políticos, sino de la formación efectiva de un conjunto articulado de capacidades cognitivas, deliberativas, valorativas y prácticas que hagan posible el ejercicio sustantivo de esos derechos.[1] En el caso específico de las juventudes, estas capacidades no emergen de forma natural o inevitable con la mayoría de edad, sino que se configuran en procesos complejos de socialización política atravesados por múltiples dimensiones de desigualdad social, diferencias en los climas institucionales escolares, variaciones en las experiencias educativas y exposición a ecosistemas informativos que pueden potenciar o limitar su desarrollo.[2]

La propuesta metodológica mixta presentada al IECM responde a esta complejidad mediante un diseño que combina una encuesta representativa con grupos focales. Esta estrategia permite no sólo medir la presencia y distribución de las competencias cívicas, sino también observar y comprender cómo éstas se despliegan, se negocian y se disputan en situaciones concretas de interacción deliberativa.

[1] Gert J. J. Biesta, *Learning democracy in school and society: Education, lifelong learning, and the politics of citizenship,* Rotterdam, Sense Publishers, 2011; Benilde García Cabrero *et al.* (eds.), *Civics and citizenship: Theoretical models and experiences in Latin America*, Rotterdam, Sense Publishers, 2017, en <https://doi.org/10.1007/978-94-6351-068-4>, y Bryony Hoskins y Jan Germen Janmaat, *Education, democracy and inequality: Political engagement and citizenship education in Europe,* Londres, Palgrave Macmillan, 2019, en <https://doi.org/10.1057/978-1-137-48976-0>.

[2] Sarah Gaby, "The civic engagement gap(s): Youth participation and inequality from 1976 to 2009", *Youth & Society,* vol. 49, núm. 7, Sage, 2016, pp. 923-946, en <https://doi.org/10.1177/0044118X16678155>; Daniel Hart y Robert Atkins, "Civic competence in urban youth", *Applied Developmental Science,* vol. 6, núm. 4, 2002, pp. 227-236, en <https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0604_10>, y Joris Melchior Schröder y Michaela Neumayr, "How socio-economic inequality affects individuals' civic engagement: A systematic literature review of empirical findings and theoretical explanations", *Socio-Economic Review,* vol. 21, núm. 1, Oxford Academic, 2023, pp. 665-694, en <https://doi.org/10.1093/ser/mwab058>.

2.1. Síntesis analítica: cuatro tensiones teóricas que estructuran el campo

La literatura revisada converge en la identificación de cuatro ideas clave que orientan el diseño y la interpretación del presente proyecto, pero también revela cuatro tensiones teóricas fundamentales que atraviesan el campo de estudios sobre competencias cívicas. Hacer explícitas estas tensiones contribuye a posicionar el estudio de manera reflexiva y justificar las decisiones metodológicas adoptadas.

2.1.1. Primera idea clave: las competencias cívicas como constructo multidimensional y situado

En la literatura contemporánea hay consenso sobre que las competencias cívicas no pueden reducirse a un solo componente (conocimiento, actitudes o participación), sino que constituyen un entramado multidimensional que articula conocimientos, habilidades, valores y disposiciones participativas.[3]

Tensión asociada: ¿son las competencias cívicas atributos individuales (que las personas "poseen" en diferentes niveles) o configuraciones situadas en contextos relacionales e institucionales específicos (que emergen y se activan en situaciones concretas)? La literatura oscila entre enfoques más psicológicos (que miden las competencias como rasgos relativamente estables mediante cuestionarios) y enfoques más sociológicos o situacionales (que insisten en que las competencias sólo pueden observarse en prácticas concretas). Este estudio adopta una posición intermedia: reconoce que ciertas disposiciones y conocimientos son relativamente estables y pueden medirse mediante encuesta, pero insiste en que su despliegue efectivo depende de contextos institucionales, de las características de los interlocutores y de las demandas específicas de cada situación (de ahí la necesidad de la fase cualitativa).

[3] Robert A. Dahl, "The problem of civic competence", *Journal of Democracy,* vol. 3, núm. 4, The Johns Hopkins University Press, 1992, pp. 45-59, en <https://dx.doi.org/10.1353/jod.1992.0048>; Hart y Atkins, *op. cit.*; Pāvel Jurs, "Forming components of civic competence", *Journal of Teaching and Education,* vol. 3, núm. 3, USN Scientific Journal, 2014, pp. 265-277; García-Cabrero *et al.*, *op. cit.*; Bryony Hoskins *et al.*, *Measuring civic competence in Europe: A composite indicator based on IEA Civic Education Study 1999 for 14 year old in school*, Luxemburgo, European Communities, Institute for the Protection and Security of the Citizen, Centre for Research of Lifelong Learning, 2008, y Bryony Hoskins, Michaela Saisana y Cynthia M. H. Villalba, "Civic competence of youth in Europe: Measuring cross national variation through the creation of a composite indicator", *Social Indicators Research,* vol. 123, Spring Nature, 2015, pp. 431-457, en <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0746-z>.

2.1.2. Segunda idea clave: la estratificación social de las competencias cívicas

El desarrollo de competencias cívicas está fuertemente estratificado por desigualdades sociales, educativas y territoriales, que se traducen en brechas sistemáticas de compromiso cívico.[4] Estas brechas no reflejan diferencias *naturales* en capacidades o interés, sino la distribución desigual de recursos, oportunidades formativas y capital social.

Tensión asociada: ¿las competencias cívicas son principalmente un problema de distribución (acceso desigual a recursos, escuelas de calidad, redes) o también de reconocimiento (algunas formas de participación y algunos saberes cívicos son valorados como *legítimos* mientras otros son deslegitimados)? La literatura sobre desigualdad tiende a enfatizar la primera dimensión (recursos), pero trabajos como el de Urbina Cortés sobre "ficciones democráticas" sugieren que también operan mecanismos simbólicos que deslegitiman ciertas formas de agencia popular.[5] Este estudio atiende, sobre todo, a brechas de distribución (medibles cuantitativamente), pero la fase cualitativa permite captar también dimensiones de reconocimiento o deslegitimación.

2.1.3. Tercera idea clave: identidades morales, polarización afectiva y competencias deliberativas

Las identidades morales y políticas, así como los fenómenos de polarización afectiva, influyen decisivamente en la forma en que las personas discuten, deliberan y se relacionan con quienes piensan distinto.[6] La política contemporánea opera cada vez más en el registro de las identidades colectivas y las emociones asociadas, no sólo en el de las posiciones sobre políticas públicas.

[4] Gaby, *op. cit.*; Schröder y Neumayr, *op. cit.*; Eric M. Uslaner y Mitchell Brown, "Inequality, trust, and civic engagement", *American Politics Research,* vol. 33, núm. 6, Sage, 2005, pp. 868-894, en <https://doi.org/10.1177/1532673X04271903>, y Gustavo Adolfo Urbina Cortés, *Ficciones democráticas: Un estudio sobre desigualdades sociales tornadas en asimetrías políticas,* México, El Colegio de México, 2020.

[5] Cortés Urbina, *op. cit*.

[6] Shanto Iyengar, Gaurav Sood e Yphtach Lelkes, "Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization", *Public Opinion Quarterly,* vol. 76, núm. 3, Oxford Academic, 2012, pp. 405-431, en <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>; Lilliana Mason, *Uncivil agreement: How politics became our identity*, Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 2018; Hyemin Han y Kelsie J. Dawson, "Civic identity consisting of moral and political identity among young adults", *Personality and Individual Differences,* vol. 233, 112895, International Society for the Study of Individual Differences, 2025, en <https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112895>; Hyemin Han, Parissa Jahromi Ballard y Youn-Jeng Choi, "Links between moral identity and political purpose during emerging adulthood", *Journal of Moral Education,* vol. 50, núm. 2, Londres, Taylor & Francis, 2021, pp. 166-184, en <https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1647152>; Andrew Miles y Stephen Vaisey, "Morality and politics: Comparing alternate theories", *Social Science Research,* vol. 53, septiembre de 2015, pp. 252-269, en <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.06.002>, y Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, *The coddling of the American mind: How good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure,* Penguin Random House, 2018.

Tensión asociada: ¿es la polarización afectiva un obstáculo para el ejercicio de competencias cívicas deliberativas (porque dificulta escuchar al otro, reconocer matices, cambiar de opinión) o es una forma legítima de compromiso cívico que moviliza a personas que de otro modo permanecerían apáticas? Algunas personas autoras entienden la polarización como una patología que erosiona la democracia; otras la ven como un síntoma de involucramiento apasionado. Este estudio no asume *a priori* que la polarización sea siempre negativa, pero examina empíricamente si se asocia, y cómo, con limitaciones en competencias deliberativas específicas (escuchar, matizar, cambiar de opinión, distinguir hechos de opiniones).

2.1.4. Cuarta idea clave: las instituciones educativas como espacios privilegiados, pero desiguales, de formación

Las instituciones educativas y los ecosistemas informativos son espacios clave para la formación de competencias cívicas, pero su contribución depende críticamente de climas institucionales, diseños curriculares y oportunidades reales de participación.[7]

Tensión asociada: ¿la educación cívica debe enfocarse en la socialización (transmitir normas, valores y competencias necesarias para participar en el orden democrático existente) o en la subjetivación crítica (crear capacidades de cuestionamiento, imaginar alternativas y agencia transformadora)? Biesta plantea esto como una tensión constitutiva, no como una dicotomía que debe resolverse a favor de un polo.[8] Este estudio reconoce ambas dimensiones: mide las competencias que permiten participar en instituciones democráticas (conocimiento de procedimientos, valoración de derechos, disposición a votar), pero también las competencias críticas (capacidad de cuestionar a las autoridades, valoración de la protesta, reconocimiento de límites de las instituciones).

[7] Biesta, *op. cit*.; Wolfram Schulz *et al.*, *Becoming citizens in a changing world: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 international report,* Ámsterdam, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Springer, 2018, en <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73963-2>; Hoskins y Janmaat, *op. cit*.; Daniela Bramwell, "Systematic review of empirical studies on citizenship education in Latin America 2000 to 2017 and research agenda proposal", *Citizenship, Social and Economics Education,* vol. 19, núm. 2, Sage, 2020, pp. 100-117, en <https://doi.org/10.1177/2047173420922506>; Lee Jerome *et al*., "A systematic literature review of research examining the impact of citizenship education on active citizenship outcomes", *Review of Education,* vol. 12, núm. 2, e3472, British Educational Research Association, 2024, en <https://doi.org/10.1002/rev3.3472>, y Lukianoff y Haidt, *op. cit*.

[8] Biesta, *op. cit*.

2.2. Vínculo entre literatura y diseño metodológico: fundamentación de las decisiones analíticas

La propuesta de investigación presentada al IECM articula una fase cuantitativa y una fase cualitativa (grupos focales con jóvenes de diversas instituciones de educación superior). La opción por un diseño mixto no es sólo pragmática (combinar métodos para triangular), sino conceptualmente necesaria dada la naturaleza de las competencias cívicas.

El cuestionario permite captar, de manera estandarizada y representativa, múltiples dimensiones de las competencias cívicas: conocimientos sobre instituciones y procedimientos democráticos, actitudes hacia la democracia y sus valores, confianza interpersonal e institucional, prácticas de participación (votación, militancia, activismo digital, protesta), consumo informativo y exposición a diversidad de opiniones, así como indicadores de distorsiones cognitivas y polarización afectiva. Esta arquitectura responde directamente a la conceptualización multidimensional de las competencias cívicas de Hoskins[9] y a la definición institucional del IECM basada en Jurs.[10]

La fase cuantitativa permite, además, estimar niveles promedio y distribución de competencias, así como identificar brechas asociadas a atributos sociodemográficos (género, nivel socioeconómico, alcaldía de residencia), educativos (tipo de escuela, área de estudio, semestre) y de socialización política (participación en organizaciones, consumo mediático). Esta estrategia de medición responde a hallazgos sobre la estratificación social de las competencias cívicas documentados por múltiples especialistas.[11]

Sin embargo, como subrayan Biesta, García-Cabrero *et al.* y Jerome *et al.*,[12] las competencias cívicas no se agotan en lo que las personas dicen sobre sus opiniones o prácticas, también se manifiestan en cómo discuten, escuchan, argumentan y se relacionan con quienes piensan distinto. La fase cualitativa fue diseñada precisamente para observar de manera directa, en contextos de interacción controlada, las dinámicas de deliberación, los usos de evidencia, las reacciones ante el desacuerdo y la presencia de distorsiones cognitivas o de polarización afectiva operando en tiempo real.

Los grupos focales contemplan siete sesiones con estudiantes de distintas universidades (públicas y privadas, de alta y baja selectividad), a fin

[9] Hoskins, Saisana y Villalba, *op. cit.,* y Hoskins *et al.*, *op. cit.*
[10] Jurs, *op. cit.*
[11] Gaby, *op. cit.*; Schröder y Neumayr, *op. cit.*; Uslaner y Brown, *op. cit.*, y Urbina, *op. cit.*
[12] Biesta, *op. cit.*; García-Cabrero *et al., op. cit.*; Jerome *et al., op. cit.*

de asegurar la diversidad institucional en el análisis. En cada sesión se discuten temas de alta controversia política y moral (derechos reproductivos, diversidad sexual, migración, seguridad, papel de la religión en el espacio público), se exploran hábitos de consumo informativo mediante ejercicios específicos y se observan repertorios de acción propuestos frente a problemas públicos hipotéticos.

La combinación de ambas fases responde, así, a una lógica de complementariedad y triangulación con amplio respaldo en la literatura: la encuesta ofrece un mapa detallado de niveles y brechas en competencias cívicas declaradas, mientras los grupos focales permiten comprender los mecanismos, significados y dinámicas interaccionales mediante los cuales dichas competencias se despliegan, se negocian y se disputan en situaciones concretas.

2.2.1. Operacionalización de dimensiones teóricas en instrumentos de medición

El cuestionario operacionaliza sistemáticamente las dimensiones de competencias cívicas identificadas en la literatura y especificadas por el IECM. A continuación, se detalla la correspondencia entre dimensiones conceptuales e instrumentación concreta.

2.2.1.1. Primera dimensión: conocimiento cívico

Fundamentación teórica: el conocimiento sobre instituciones, procedimientos democráticos, derechos y responsabilidades constituye un componente fundamental de las competencias cívicas, ampliamente documentado en investigaciones como el International Civic and Citizenship Education Study[13] y en trabajos sobre indicadores compuestos.[14] Sin embargo, como advierte Dahl,[15] el conocimiento cívico no puede evaluarse con estándares irrealmente altos, sino en relación con el "conocimiento suficientemente bueno" para tomar decisiones políticas razonables.

Operacionalización en el cuestionario: se incluyen reactivos sobre las instituciones electorales, procedimientos de participación ciudadana, estructura del Gobierno de la Ciudad de México, derechos fundamentales y mecanismos de exigibilidad. Su diseño busca captar el conocimiento aplicado (no sólo su memorización) mediante preguntas que requieren conectar información con situaciones concretas.

[13] Schulz *et al.*, *op. cit.*
[14] Hoskins, Saisana y Villalba, *op. cit.,* y Hoskins *et al.*, *op. cit.*
[15] Dahl, *op. cit.*

Operacionalización en grupos focales: se observa si las personas utilizan su conocimiento institucional cuando discuten problemas públicos, si pueden identificar qué instituciones son relevantes para distintos temas y si distinguen entre diferentes niveles de gobierno y sus atribuciones.

2.2.1.2. Segunda dimensión: habilidades cívicas y deliberativas

Fundamentación teórica: las habilidades para deliberar, analizar información, evaluar argumentos, distinguir hechos de opiniones, escuchar posiciones contrarias y trabajar colaborativamente son consideradas centrales en los trabajos de Biesta, Hoskins, Janmaat, LeCompte, Jerome, entre otros.[16] Estas habilidades permiten ejercer el conocimiento cívico de manera efectiva en contextos de interacción y decisión colectiva.

Operacionalización en el cuestionario: la batería de preguntas incluye ítems sobre la disposición a debatir con personas que piensan distinto, estrategias para resolver conflictos en discusiones políticas, capacidad autopercibida de escuchar argumentos contrarios sin descalificar, frecuencia con que se busca información antes de formar opiniones y reacción ante el desacuerdo (¿se percibe como amenaza o como oportunidad de aprendizaje?).

Operacionalización en grupos focales: la lista de cotejo utilizada por los observadores registra sistemáticamente si quienes participan distinguen entre hechos y opiniones, solicitan evidencia para afirmaciones, reconocen matices en posiciones ajenas, cambian de opinión ante argumentos sólidos, escuchan sin interrumpir, parafrasean bien posiciones contrarias, construyen a partir de intervenciones previas, identifican áreas de acuerdo parcial y proponen síntesis o compromisos.

2.2.1.3. Tercera dimensión: valores cívicos y disposiciones democráticas

Fundamentación teórica: valores como la tolerancia a la diversidad de opiniones, valoración del diálogo, respeto a los derechos de las minorías, rechazo a la violencia política y valoración de formas legítimas de disenso (protesta, desobediencia civil) son centrales en trabajos sobre polarización afectiva,[17] identidades morales[18] y cultura democrática.[19]

Operacionalización en el cuestionario: el bloque de actitudes y valores examina la tolerancia hacia la expresión de ideas ofensivas, valoración de

[16] Biesta, *op. cit.*; Hoskins y Janmaat, *op. cit.*; Karon LeCompte, Brooke Blevins y Tiffani Riggers-Piehl, "Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data", *The Journal of Social Studies Research,* vol. 44, núm. 1, Sage, 2020, pp. 127-137, en <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.03.002>; Lee Jerome *et al., op. cit.*

[17] Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit.*; Mason, *op. cit*.

[18] Han y Dawson, *op. cit.*; Han, Ballard y Choi, *op. cit*.

[19] García-Cabrero, *op. cit.*

la protesta como forma legítima de participación, percepción del conflicto político (¿se entiende como inevitable y productivo o como dañino y evitable?), orientaciones hacia la cooperación o la confrontación, actitudes hacia la desobediencia civil justificada y disposición a defender derechos de grupos con los que no se está de acuerdo.

Operacionalización en grupos focales: se observan las reacciones que tienen lugar ante posiciones moralmente controversiales, las cuales pueden variar entre si se descalifica o se busca entender, si se reconocen los derechos de quienes opinan distinto, si se justifica la violencia o la censura y si se expresa respeto hacia las personas aun cuando se rechaza sus ideas.

2.2.1.4. Cuarta dimensión: participación y repertorios de acción

Fundamentación teórica: la literatura sobre brechas en el compromiso cívico[20] demuestra que la participación no es homogénea, pues existen múltiples repertorios (voto, militancia partidista, activismo en organizaciones sociales, protestas, activismo digital, voluntariado, boicots, *contacting*) con diferentes barreras de entrada, costos y eficacia relativa. En ese sentido, es importante tener en cuenta esta diversidad, a fin de no reducir la participación sólo a formas institucionalizadas.

Operacionalización en el cuestionario: la sección dedicada a prácticas de participación registra la votación en elecciones recientes; militancia o simpatía partidista; participación en organizaciones estudiantiles, comunitarias o religiosas; asistencia a protestas o manifestaciones; firma de peticiones; activismo digital (compartir contenido político, participar en discusiones en línea); voluntariado; boicots a productos o empresas por razones políticas o éticas, y contacto directo con autoridades o representantes.

Operacionalización en grupos focales: se incluyen ejercicios en los que se presentan problemas públicos hipotéticos (por ejemplo, "el gobierno quiere reducir el presupuesto para universidades públicas" o "en su colonia no hay suficientes servicios de salud") y se pide a las personas participantes proponer acciones. Se registra la diversidad y sofisticación de los repertorios propuestos, si incluyen acciones individuales y colectivas, si consideran estrategias tanto institucionales como no institucionales y si evalúan su viabilidad y eficacia.

2.2.1.5. Quinta dimensión: confianza social e institucional

Fundamentación teórica: especialistas como Uslaner, Brown, Schröder y Neumayr[21] han documentado que la confianza generalizada (la creencia de

[20] Gaby, *op. cit.*; Schröder y Neumayr, *op. cit.*; Urbina, *op. cit*.
[21] Uslaner y Brown, *op. cit.*; Schröder y Neumayr, *op. cit*.

que la mayoría de las personas son de fiar) es un mediador crucial entre desigualdad y participación. Sociedades desiguales tienden a tener menores niveles de confianza, lo que erosiona la cooperación y el compromiso cívico.

Operacionalización en el cuestionario: se consideraron ítems estándar de confianza interpersonal ("¿Diría que la mayoría de las personas son confiables?") y de confianza institucional (en organismos electorales, partidos políticos, congreso, gobierno local, policía, sistema de justicia, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil). Esto permite construir índices que se pueden asociar con el nivel socioeconómico, tipo de escuela y prácticas de participación de las personas encuestadas.

Operacionalización en grupos focales: se analiza si las personas expresan espontáneamente desconfianza hacia instituciones, autoridades u otras personas durante las discusiones, y si esa desconfianza se usa para justificar no participar o para descalificar propuestas de acción colectiva.

2.2.1.6. Sexta dimensión: competencias informacionales y pensamiento crítico

Fundamentación teórica: como destacan García-Cabrero, Hoskins, Janmaat y Jerome,[22] en ecosistemas digitales caracterizados por la desinformación, algoritmos de personalización y cámaras de eco, la capacidad de evaluar fuentes, verificar información, reconocer sesgos y distinguir hechos de opiniones se ha vuelto un componente indispensable de las competencias cívicas. Lukianoff y Haidt[23] añaden la preocupación por distorsiones cognitivas que dificultan el pensamiento crítico.

Operacionalización en el cuestionario: el bloque sobre prácticas informativas profundiza en las fuentes de noticias utilizadas habitualmente, con qué frecuencia se verifica la información antes de compartirla, si hay exposición a perspectivas políticas diversas o sólo a voces afines, si se reconoce estar en cámaras de eco y la presencia de distorsiones cognitivas, esto mediante ítems como "cuando algo me hace sentir muy enojado, generalmente eso significa que es verdad" (razonamiento emocional), "en política, o estás de un lado o del otro, no hay puntos medios" (pensamiento dicotómico), "puedo saber lo que alguien piensa realmente aunque no lo diga" (lectura de mente).

Operacionalización en grupos focales: se llevan a cabo ejercicios específicos en los que se presentan noticias o afirmaciones y se pide a quienes participan que identifiquen si se trata de información verificable o de una opinión, propongan cómo verificarían su veracidad, identifiquen posibles sesgos de la fuente y reflexionen sobre la diversidad u homogeneidad de sus

[22] García Cabrero *et al., op. cit*.; Hoskins y Janmaat, *op. cit*.; Jerome, *op. cit*.
[23] Lukianoff y Haidt, *op. cit*.

propias burbujas informativas. Además, la lista de cotejo de distorsiones cognitivas permite registrar si, durante las discusiones, las personas manifiestan razonamiento emocional, pensamiento dicotómico, sobregeneralización, personalización o lectura de mente.

2.3. Consideraciones metodológicas

Investigar las competencias cívicas de la población joven de la Ciudad de México no sólo requirió utilizar una metodología mixta, también implicó integrar corpus diferenciados en función de los objetivos y las posibilidades que ofrecen tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo. Para transparentar la diferencia de corpus entre los dos componentes de este estudio, presentamos una serie de precisiones con respecto a la forma de categorizar a las personas jóvenes que participaron en esta investigación, de acuerdo con su trayectoria educativa, la institución universitaria a la que, en su caso, pertenecen y su experiencia en múltiples formas de organización comunitaria.

La selección de informantes en la fase cualitativa se diseñó con el propósito de maximizar las posibilidades interpretativas y analíticas del material recabado. Por esta razón, no se optó por una estrategia centrada en instituciones universitarias específicas, sino por una selección que hacía énfasis en los perfiles de los informantes, definidos a partir de condiciones de acceso, trayectorias educativas y posiciones diferenciadas dentro (o fuera) del circuito de educación superior.

Esta decisión metodológica permitió organizar la muestra cualitativa en torno a conglomerados analíticamente relevantes. En particular, se buscó incluir:

a) jóvenes provenientes de instituciones de élite de alto costo, caracterizadas por colegiaturas elevadas y barreras económicas de acceso;
b) estudiantes de instituciones públicas de élite, que, aunque no imponen colegiaturas comparables, mantienen mecanismos muy selectivos de admisión, lo que las convierte también en espacios de acceso restringido;
c) jóvenes inscritos en instituciones de absorción, fundamentalmente privadas y, en menor medida, públicas, que captan a aspirantes rechazados por universidades públicas de élite o que ofrecen alternativas de continuidad educativa en contextos de alta demanda, y

d) personas jóvenes que no forman parte del circuito universitario, cuya inclusión resultó fundamental para ampliar el contraste analítico y evitar una lectura limitada exclusivamente al ámbito de la educación superior.

Al no privilegiar una selección por universidad, fue posible construir un balance robusto de perfiles que responden a estas categorías de interés analítico, sin reducir la indagación a la cultura institucional de unas cuantas escuelas. De este modo, la muestra reunió informantes procedentes de un espectro amplio de instituciones, entre ellas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Tecnológica de México (Unitec), la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad La Salle, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras. Asimismo, en algunos casos se decidió no hacer referencia explícita a la institución de procedencia de ciertas personas informantes, atendiendo a su voluntad y disposición, como parte de los criterios de resguardo ético y confidencialidad del estudio.

Tal estrategia hizo posible captar una mayor diversidad de experiencias, disposiciones y trayectorias juveniles frente a las actitudes y habilidades cívicas estudiadas, favoreciendo una reconstrucción más amplia de los sentidos, prácticas y contrastes que atraviesan a la población de interés

Con respecto a la diferencia entre la parte cuantitativa y la cualitativa, conviene agregar que la fase cualitativa trabajó con un corpus institucional más amplio y contrastado que el de la encuesta. La lógica de los grupos focales no fue replicar exactamente los tres enclaves de la encuesta, más bien buscó incorporar perfiles institucionales contrastantes para observar con mayor finura la heterogeneidad de experiencias formativas, de socialización política y de desarrollo cívico. A ello se sumó la inclusión de juventudes no escolarizadas. Por tanto, la diferencia entre ambas fases obedece a una ampliación deliberada del corpus cualitativo.

Aunque participaron cuatro instituciones concretas en el levantamiento universitario de la fase cuantitativa, éstas fueron organizadas en tres categorías analíticas: la universidad pública de tradición crítica, la universidad privada de élite globalizada y la universidad privada de acceso amplio. La universidad pública de tradición crítica, representada por Ciudad Universitaria de la UNAM, remite a una institución pública de gran escala, abierta, con una larga tradición de debate político y de politización estudiantil. En este caso, el levantamiento pudo realizarse en puntos de afluencia a la salida de los centros de estudio. En la parte cualitativa, las universidades públicas selectivas aparecen asociadas con experiencias de involucramiento en co-

lectivos, paros, asambleas y debates políticos intensos dentro del campus, así como con una ecología formativa donde la universidad funciona a la vez como espacio de aprendizaje político, organización y conflicto.

La segunda categoría corresponde a la universidad privada de élite globalizada, representada por el ITESM. Sus rasgos distintivos remiten a una institución privada selectiva, con acceso más controlado, fuerte infraestructura institucional y una composición estudiantil más favorecida en términos socioeconómicos. A diferencia de los otros enclaves, aquí el levantamiento se realizó mediante una encuesta en línea autoaplicada al interior del aula, con acceso gestionado institucionalmente, lo que refleja un entorno más regulado y con mayor intermediación organizacional. En la parte cualitativa, las instituciones privadas de élite aparecen vinculadas a sectores socioeconómicos privilegiados y a formas de discusión política más abstractas o reflexivas, centradas en desigualdad, privilegio y responsabilidad social, pero con menor densidad de experiencias directas de movilización o confrontación con autoridades.

La tercera categoría de la fase cuantitativa corresponde a la universidad privada de acceso amplio, integrada para fines del levantamiento por la Unitec y la UVM. Sus rasgos distintivos remiten a instituciones privadas de absorción más extendida, con una lógica menos exclusiva de acceso y con trayectorias estudiantiles más heterogéneas. En la sección cualitativa del informe, el perfil equivalente aparece descrito como universidades privadas de absorción orientadas a clases medias y medias-bajas. Esto sugiere que la categoría busca capturar espacios formativos donde la experiencia universitaria se organiza bajo condiciones menos elitizadas, con composiciones sociales más amplias y con modalidades institucionales distintas de las observadas en la universidad privada de élite.

Para la fase cualitativa, la clasificación se amplía a cuatro perfiles institucionales. Allí sí se distingue entre universidades públicas altamente selectivas, universidades públicas de absorción, universidades privadas de élite y universidades privadas de absorción. Las instituciones públicas aparecen asociadas con procesos de admisión competitivos y con experiencias intensas de politización y organización estudiantil. Las privadas de élite se describen como instituciones que atienden a sectores socioeconómicos privilegiados. Las privadas de absorción se asocian a clases medias y medias-bajas. Las públicas de absorción se caracterizan, al menos en la formulación disponible, por recibir a estudiantes con trayectorias educativas más diversas.

3. Resultados cuantitativos: brechas en saber cívico y participación de la juventud en la Ciudad de México

3.1. Marco analítico

Las investigaciones sobre la población joven confirman que, en comparación con generaciones mayores, este grupo etario presenta niveles consistentemente bajos de participación en espacios formales de decisión: votan menos, se afilian menos a partidos, muestran menor disposición a ocupar cargos institucionales o colaborar con estructuras partidistas.[24] Este comportamiento es parte de una tendencia global que sugiere una transformación generacional de los vínculos con la política institucional.[25] En lo que se refiere al contexto mexicano, estudios recientes concuerdan al diagnosticar disminuciones participativas de la población juvenil en las instituciones, lo que refuerza su desapego y desconfianza hacia la política formal. Tal desconfianza se articula con una menor propensión a involucrarse en procesos electorales, lo que agrava el déficit de representación efectiva.[26]

A ello se añade un entorno socioeconómico marcado por la incertidumbre laboral, dificultades de inserción profesional, inestabilidad habitacional y fragmentación social, factores que condicionan la capacidad de las personas jóvenes para proyectar planes de largo plazo y comprometerse con

[24] Gisela Delfino, Maite Beramendi y Elena Zubieta, "Participación social y política en Internet y brecha generacional", *Revista de Psicología*, vol. 37, núm. 1, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019, pp. 195-216, en <https://doi.org/10.18800/psico.201901.007>; Magdelina Kitanova, "Youth political participation in the EU: Evidence from a cross-national analysis", *Journal of Youth Studies,* vol. 23, núm. 7, 2020, pp. 819-836, en <https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1636951>.

[25] Weiyu Zhang, "Political disengagement among youth: A comparison between 2011 and 2020", *Frontiers in Psychology,* vol. 13, Frontiers Media, 2022, pp. 1-10, en <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.809432>.

[26] Silvia Gómez Tagle y José Eduardo García, *La confianza y la participación de la juventud en la democracia,* México, Instituto Nacional Electoral, 2021, en <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/08/confianzayparticipacion.pdf>.

prácticas políticas sostenidas. Asimismo, los nuevos patrones de consumo de información política para esta generación, especialmente en redes sociales, están marcados por la saturación de contenidos, de tal manera que funcionan como cámaras de eco que generan desinformación y construyen algoritmos de polarización.

Las instituciones de educación superior se configuran como enclaves formativos donde tales intercambios se manifiestan de manera diferenciada según el tipo de universidad, el perfil socioeconómico de las personas jóvenes que ingresan, el capital simbólico institucional, su orientación curricular y la posibilidad de contar con estrategias de participación estudiantil. Las universidades de élite, las instituciones públicas de selectividad alta y las universidades de absorción masiva diseñan ecologías formativas distintas, lo cual genera desigualdades en cuanto a experiencia política, capital cultural cívico y redes de sociabilidad.

De ahí que el problema público central se articule en una doble tensión estructural y cultural. Por un lado, la persistente desigualdad en la distribución de recursos materiales, simbólicos e institucionales que habilitan la ciudadanía; por el otro, el cambio profundo de las condiciones de socialización política, mediadas por las tecnologías, culturas digitales y crisis de legitimidad institucional. En este escenario, las juventudes urbanas enfrentan dificultades crecientes para desarrollar conocimiento cívico, sostener valores democráticos, ejercer habilidades deliberativas y activar repertorios de participación sostenibles.

3.1.1. Enclaves formativos, desigualdad y cambio cultural

El análisis que se presenta a continuación incluye tres tipos de espacios formativos —enclaves de élite, instituciones públicas de selectividad alta y universidades de absorción masiva— donde se articulan, con sus especificidades, los efectos de la desigualdad estructural, los climas institucionales y las transformaciones culturales contemporáneas.

Investigaciones académicas de alcance internacional y nacional coinciden en que los entornos educativos producen *habitus* cívicos en términos de *agencia* en los repertorios de participación, en la distribución de capitales culturales y simbólicos, y, de manera más profunda, en la generación de expectativas subjetivas sobre pertenencia y eficacia política. En el caso de la población mexicana joven, las dimensiones digitales de la ciudadanía, la alfabetización mediática, el pensamiento crítico en línea y la interacción en plataformas presentan variaciones sistemáticas por tipo de institución, situación que refuerza la idea de que

los entornos educativos producen perfiles diferenciados de competencia cívica digital.[27]

A esta estratificación institucional se suma un vector transversal: el cambio cultural acelerado que reconfigura los modos de socialización política en la era digital. Más allá de su enclave formativo, las juventudes contemporáneas se encuentran en un ecosistema informativo caracterizado por la saturación, la inmediatez, los algoritmos de personalización y la circulación de contenidos emocionalmente polarizantes.

3.1.2. Diseño conceptual del instrumento de medición

La Encuesta Multidimensional de Competencias Cívicas Juveniles (EMCCJ) constituye un instrumento de medición diseñado exprofeso para capturar con la mayor precisión posible la complejidad multidimensional de esas competencias en la Ciudad de México. La formulación inicial de este instrumento estuvo a cargo de un equipo académico multidisciplinario en sociología y ciencia política, así como especialistas en educación cívica, estudios de juventud y comunicación digital. Estos especialistas sostuvieron diversas sesiones de trabajo con equipos técnicos de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del IECM, con el objetivo de desarrollar un codiseño institucional. Además, la oficina del consejero electoral Ernesto Ramos Mega aportó elementos clave para fortalecer la precisión conceptual del instrumento, asegurar su alineación con los estándares del Instituto y garantizar la utilidad estratégica de los hallazgos para la educación cívica en la ciudad. Por último, el refinamiento del cuestionario contó con la intervención especializada del área técnica de Parametría, empresa responsable del levantamiento en campo.

El proceso completo (académico-institucional-técnico) devino en un instrumento con estructura robusta para medir las cuatro dimensiones sustantivas de la vida cívica concebidas en el proyecto: competencias cognitivas, disposiciones actitudinales, habilidades cívicas y repertorios de participación. Este último dominio incorpora también la acción y la socialización política digital, que han sido documentadas en estudios recientes sobre participación juvenil en entornos educativos y virtuales.[28]

[27] Miguel Francisco Galván Cabello, Alondra Salazar y Julio César Tereucan Angulo, "Nativos/as digitales en México: Evaluación de las propiedades psicométricas de la Escala de Ciudadanía Digital en estudiantes universitarios/as", *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa,* núm. 82, Universidad de las Islas Baleares, Edite, 2022, pp. 119-135, en <https://doi.org/10.21556/edutec.2022.82.2635>.

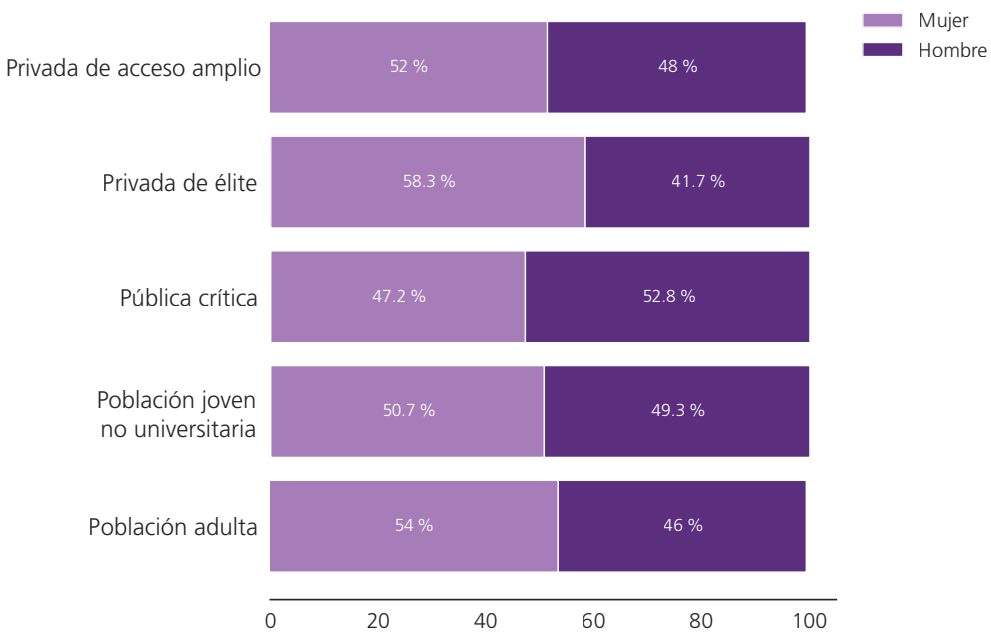
[28] Estefanía Soledad Otero, "Ciudadanía digital y jóvenes. Demandas, formatos y dinámicas participativas en entornos virtuales en escuelas preuniversitarias de la Ciudad de Buenos Aires (2020-2021)", *Espacios en Blanco. Revista de Educación*, vol. 2, núm. 34, Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2024, pp. 129-143, en <https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB34-404>.

3.2. Hallazgos del componente cuantitativo

3.2.1. Caracterización inicial de la muestra

Las variables de sexo, edad y nivel socioeconómico funcionan como punto de partida para interpretaciones posteriores. La composición por sexo de la muestra se mantuvo relativamente uniforme entre los distintos segmentos analizados. En los enclaves universitarios, la proporción de mujeres oscila entre 47.2 (UNAM) y 58.3 % (universidades privadas de élite), sin que estas diferencias hayan alterado de manera sustantiva la estructura general del grupo juvenil. Entre las personas jóvenes no universitarias, la proporción femenina alcanza 50.7 %, en un patrón consistente con el observado en los demás segmentos juveniles.

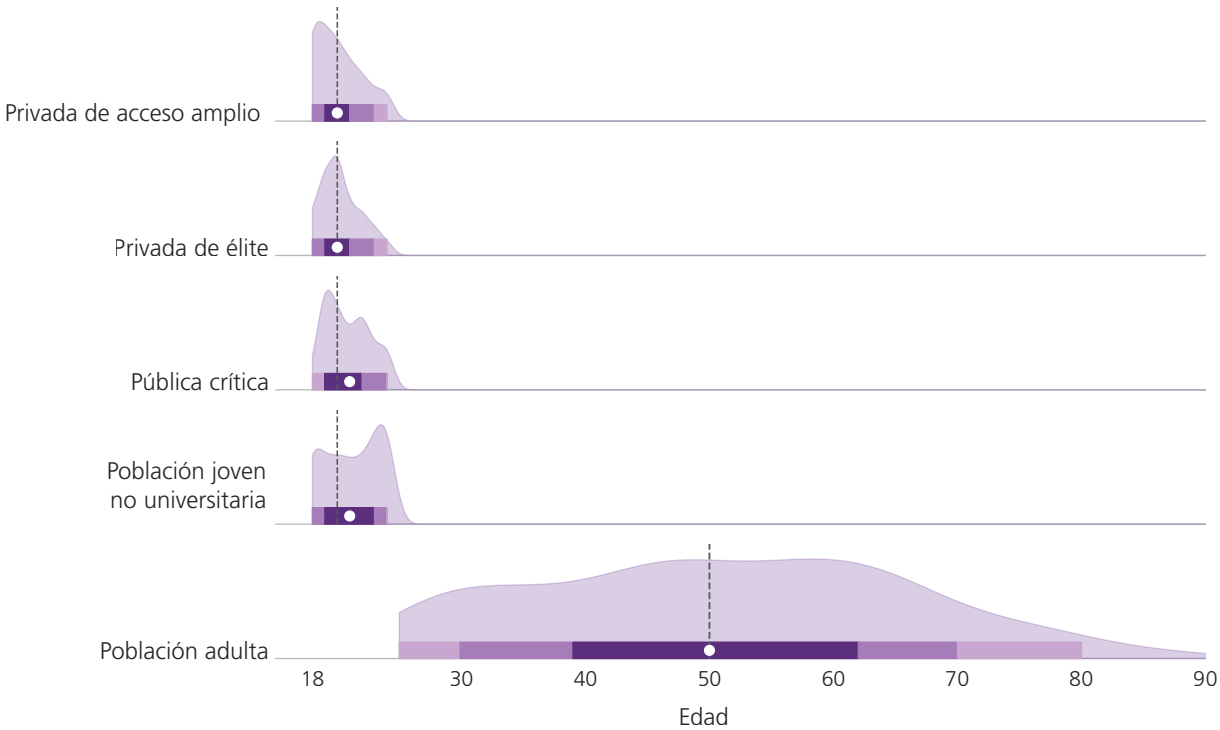
Gráfica 1. Distribución de la muestra por sexo según segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

En cuanto a las estructuras etarias de la muestra analizada, los grupos juveniles se concentran en el rango de 18 a 24 años, con distribuciones compactas, mientras que la población general adulta abarca el intervalo de 25 a 90 años. El siguiente gráfico sintetiza la forma, la posición y la dispersión de cada distribución de los grupos muestreados.

Gráfica 2. Distribución etaria por segmento sociodemográfico



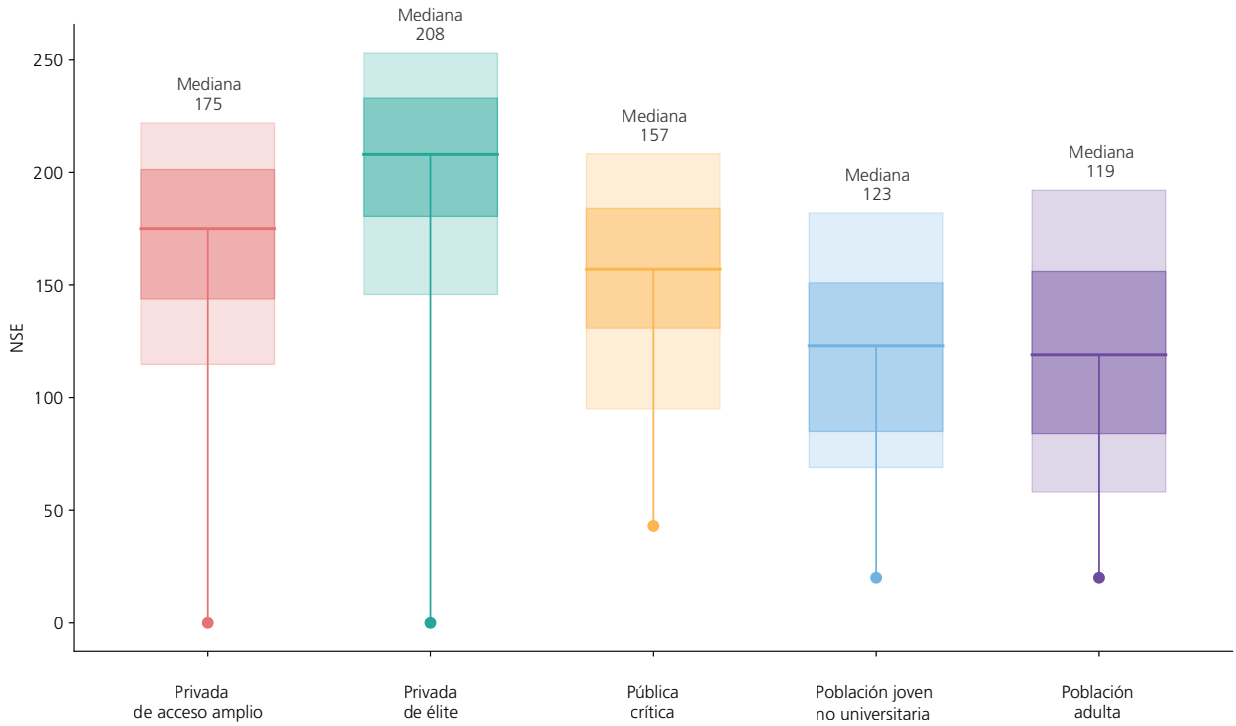
FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La distribución por edad reporta perfiles muy homogéneos entre los grupos juveniles. En los enclaves universitarios, las y los estudiantes de la universidad pública de tradición crítica presentan una mediana de 21 años; en la institución privada de élite, la mediana es de 20, al igual que en las universidades de absorción masiva.

Un importante indicador estructural que organiza de manera decisiva las trayectorias juveniles es el nivel socioeconómico (NSE). Esta medida resume las condiciones materiales y educativas del hogar y, en contextos como el mexicano, funciona como un eje de estratificación particularmente robusto.[29]

[29] La variable de NSE utilizada en este estudio se construye a partir de cuatro componentes estructurales del hogar capturados en el cuestionario: escolaridad del aportante principal, número de baños completos, parque vehicular y una aproximación al número de cuartos destinados a dormir. La puntuación total resulta de sumar los valores asignados a cada categoría, siguiendo la lógica de la regla AMAI 2022/2024.

Gráfica 3. Distribución del NSE por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Los datos evidencian una estratificación socioeconómica nítida que condiciona las oportunidades de acceso a información política, la exposición a entornos escolares exigentes, el contacto con redes cívicas y el desarrollo de competencias ciudadanas, por lo que las comparaciones posteriores deben interpretarse a la luz de estas diferencias de origen.

3.2.2. Dimensión cognitiva

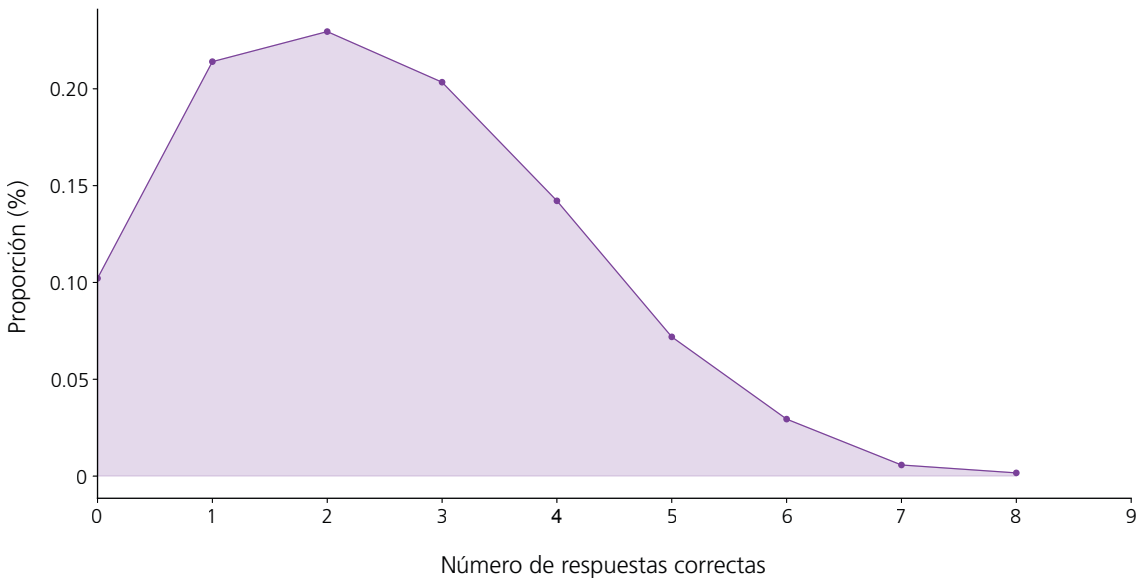
El saber cívico incluye el conocimiento declarativo sobre instituciones, derechos, reglas electorales y procedimientos formales, así como formas más complejas de comprensión aplicada.

3.2.2.1. Conocimiento de instituciones, derechos, reglas y procesos

En la EMCCJ, este tipo de conocimiento se operacionaliza mediante una batería de nueve reactivos de opción múltiple que exploran distintos no-

dos: 1) la función principal del Poder Judicial, 2) el derecho vulnerado ante la prohibición de una manifestación pacífica, 3) la función específica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 4) la duración del mandato de la jefatura de gobierno, 5) el procedimiento de aprobación de una ley federal antes de su promulgación, 6) el umbral mínimo de votación requerido para que un partido mantenga el registro, 7) la asignación de responsabilidades en materia de educación pública en el sistema federal, 8) las facultades del Congreso frente al veto presidencial y 9) el principio constitucional que limita el poder del gobierno sobre las personas. El indicador utilizado para este primer análisis es el conteo de aciertos en estos nueve reactivos.

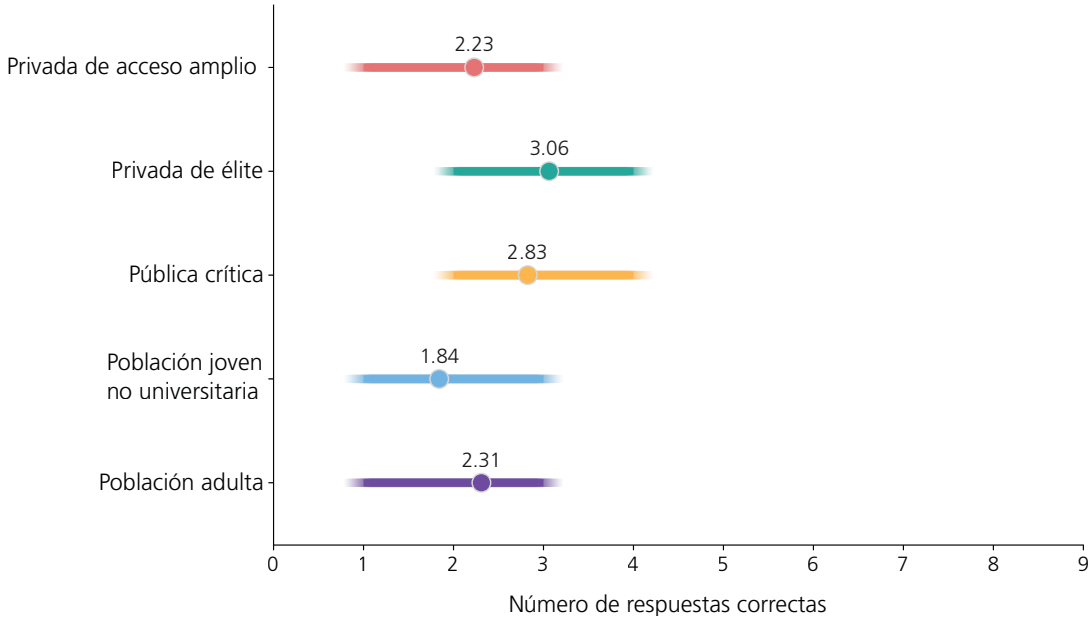
Gráfica 4. Distribución de aciertos en el componente declarativo de la dimensión cognitiva



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La moda y la mediana se ubican en dos aciertos: 23 % de las personas entrevistadas responden correctamente dos de las nueve preguntas; 21.4 % aciertan sólo una y 20.3 % contestan bien tres reactivos. La media es de 2.44 aciertos, lo que significa que, en promedio, las personas responden correctamente entre dos y tres preguntas (menos de 30 % de la batería completa), pero con una concentración importante en el tramo inferior de la distribución. También cabe resaltar que sólo 2.9 % llega a seis, 0.6 % a siete y 0.2 % a ocho aciertos, sin que haya un caso en toda la muestra con las nueve respuestas correctas.

Gráfica 5. Media de conocimiento cívico declarativo por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

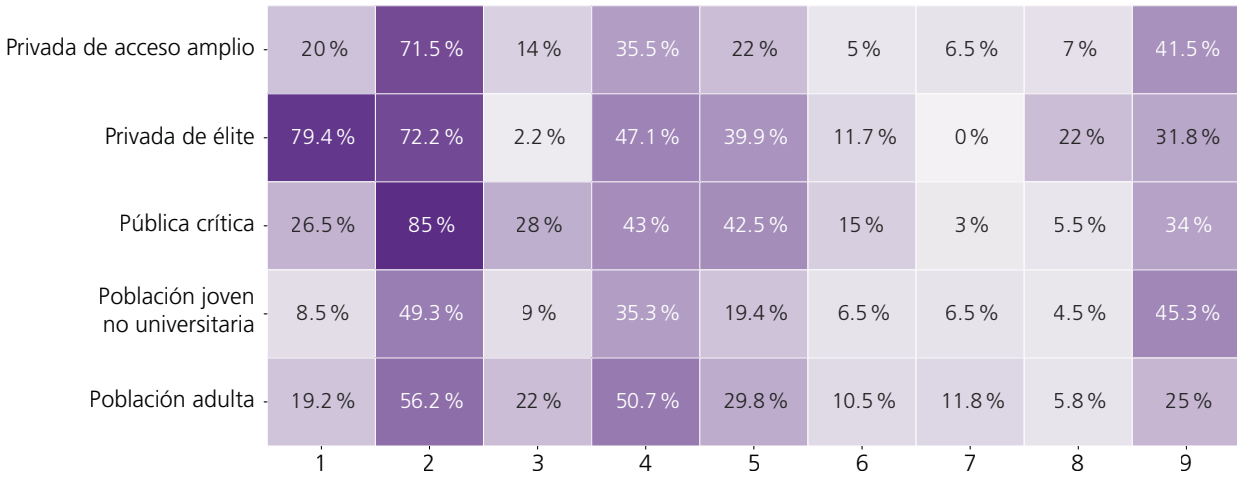
El gráfico anterior muestra el desempeño desagregado en saber cívico declarativo medido nuevamente como el número de aciertos (0 a 9). Cada marcador circular representa la media de aciertos de cada grupo, mientras que la banda horizontal alrededor indica el rango intercuartílico que concentra el 50 % de las personas de ese grupo.

Las calificaciones muestran diferencias importantes cuando se desagregan por segmentos sociodemográficos. El nivel más reducido de conocimientos corresponde a la población joven no universitaria, con una media de 1.84 aciertos. Por encima se ubica la comunidad estudiantil de la universidad privada de acceso amplio, cuya media asciende a 2.23 aciertos, prácticamente indistinguible del promedio observado en la población adulta (2.31).

En la parte (comparativamente) alta de la distribución, aparecen los dos segmentos universitarios con mejor rendimiento. A saber, la universidad pública de tradición crítica, con un promedio de 2.83, y la universidad privada de élite, con una media de 3.06 aciertos.

La gráfica 6 presenta una matriz de porcentajes que muestra, para cada segmento sociodemográfico, la proporción de personas que respondió bien cada uno de los nueve reactivos de saber cívico declarativo. Los valores dentro de las celdas representan el porcentaje de aciertos en cada pregunta, no la suma total ni el desempeño global.

Gráfica 6. Proporción de aciertos por pregunta y segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

El alumnado de la universidad privada de élite concentra los valores más altos en preguntas sobre instituciones y procesos, aunque no mantiene esa ventaja en preguntas sobre principios constitucionales. La población estudiantil de la universidad pública crítica destaca en el reactivo sobre derechos vulnerados, donde supera a todos los demás grupos, también presenta un rendimiento relativamente equilibrado en preguntas de procedimiento. El desempeño en integrantes de la universidad privada de acceso amplio muestra un patrón más irregular, con aciertos altos en derechos vulnerados y en principio constitucional que limita el poder del gobierno sobre las personas, pero bajos niveles de acierto en áreas más institucionales del sistema. La población joven no universitaria concentra sistemáticamente los valores más bajos en casi todos los reactivos, excepto en derechos vulnerados y limitación del poder estatal, donde no caen al nivel mínimo. Por su parte, la población adulta general se ubica siempre en posiciones intermedias, pues nunca lidera los aciertos de alguna pregunta, pero tampoco cae en los niveles mínimos de desempeño.

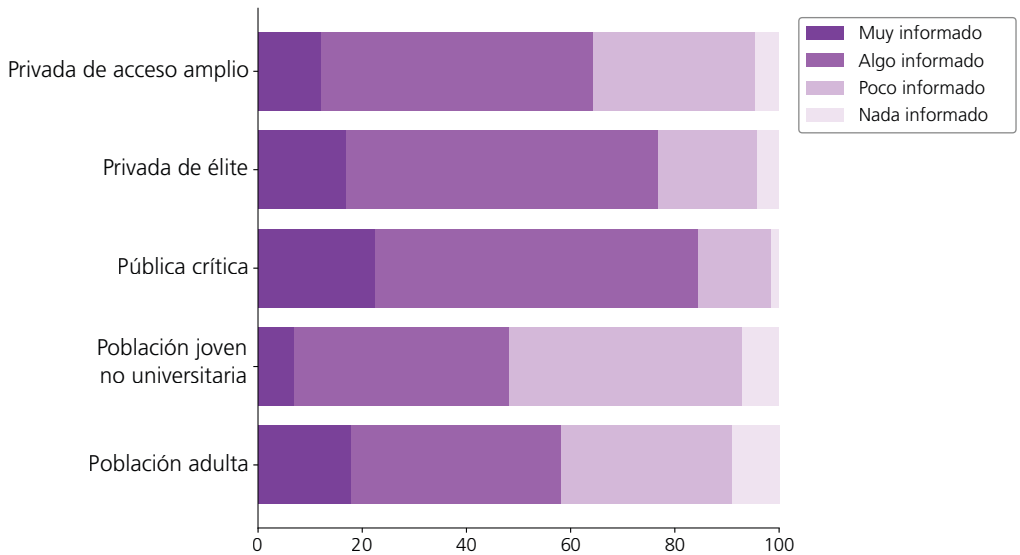
3.2.2.2. Alfabetización mediática y digital

Dentro del saber cívico, la alfabetización mediática y digital constituye la estructura que permite a las personas orientarse en ecosistemas informativos caracterizados por la velocidad, el volumen y la ambigüedad. Los niveles declarados de información política introducen la dimensión subjetiva de hábitos informativos, es decir, cómo se perciben a sí mismas las personas en términos de conocimiento sobre asuntos públicos. Si bien esta autopercepción no siempre coincide con los niveles objetivos de exposición, sí condiciona la

disposición a involucrarse, la confianza para opinar y la valoración crítica de las fuentes.

La gráfica 7 presenta, en forma desagregada, la autopercepción de información política de las personas participantes, pues muestra el resumen analítico de la pregunta "en general, ¿qué tan informado estás sobre política y asuntos públicos?".

Gráfica 7. Niveles declarados de información política por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La autopercepción de información política se concentra en los niveles intermedios de la escala. Entre 50 y 60 % de las personas se ubica en la categoría de algo informadas, mientras que alrededor de 30 y 45 % se describen como poco informadas, dependiendo del grupo. Los dos extremos de la escala aparecen como minoritarios, pues las personas que se autodefinen como muy informadas oscilan entre 7 y 22.5 %, y las que afirman estar nada informadas se mantienen en rangos bajos, de 1.5 a 9 %.[30]

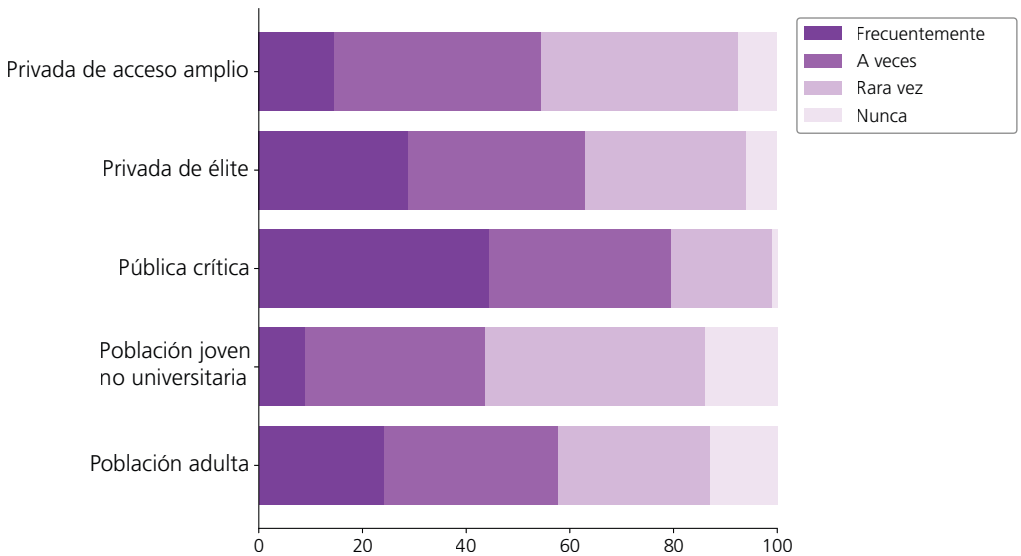
Entre el alumnado de universidades privadas de acceso amplio, 52 % se considera algo informado, y 31 %, poco informado, mientras que sólo 12 % se define como muy informado. En las universidades privadas de élite globalizada, la concentración en los niveles altos es mayor, patrón que se intensifica en la universidad pública de tradición crítica. El contraste es evi-

[30] La tasa de no respuesta como "no sabe" o "no contesta" es irrelevante en términos estadísticos, pues se sitúa entre 0 y 1.8 %, por lo que fue excluida del análisis.

dente con las y los jóvenes no universitarios, quienes tienden a ubicarse en los niveles inferiores.

En la gráfica 8 se presenta la frecuencia con que las personas encuestadas buscan información sobre política y asuntos públicos, desagregada por segmento sociodemográfico. La pregunta expresa en la EMCCJ es "¿Con qué frecuencia buscas información sobre política y asuntos públicos?".

Gráfica 8. Frecuencia de búsqueda de información política por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La categoría a veces es la más común en toda la muestra, mientras que el patrón más intensivo de indagación informativa se registra en la comunidad estudiantil de la universidad pública de tradición crítica, el único segmento en el que la búsqueda frecuente supera a todas las demás categorías, lo que sugiere un hábito informativo sistemático y sostenido.

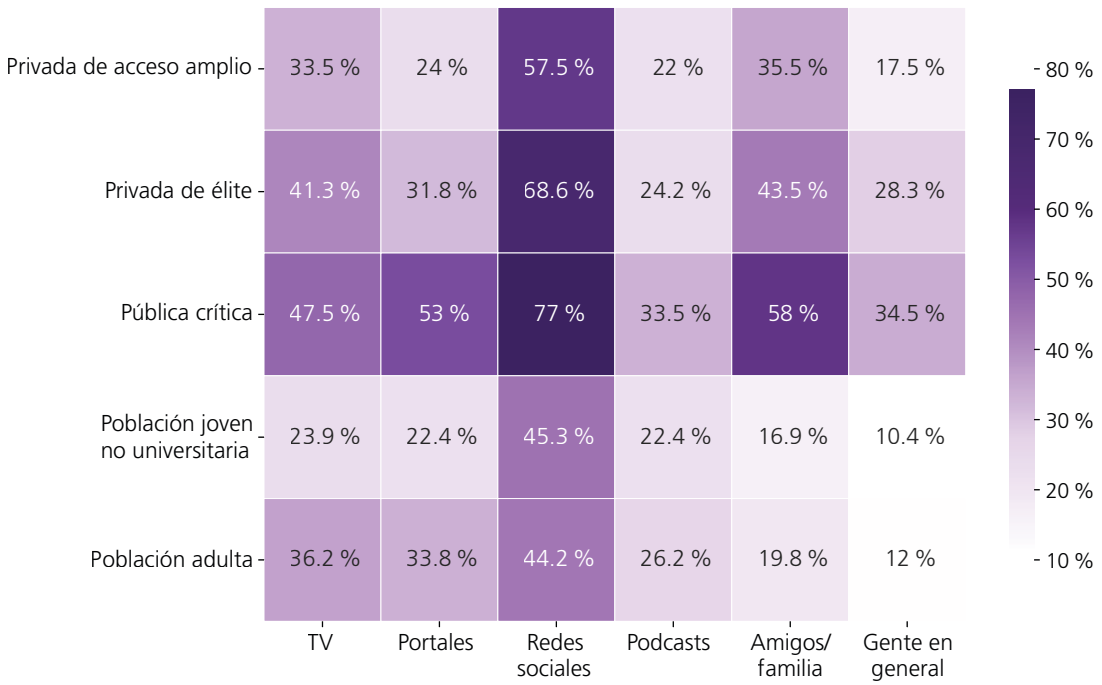
Entre quienes estudian en universidades privadas de élite también se identifica un nivel relativamente alto de búsqueda frecuente (28.77 %), aunque acompañado por porcentajes significativos de búsqueda ocasional y baja exposición. Dentro del conjunto universitario, las universidades privadas de acceso amplio presentan el perfil menos intensivo.

La población adulta se sitúa en una posición intermedia entre la juventud universitaria y la no universitaria, y es precisamente este último grupo en el que se concentran los datos más limitados de exposición informativa de toda la muestra. La población joven no universitaria es el único segmento donde la menor frecuencia supera con claridad a la media y la alta com-

binadas, y se sitúa de manera consistente por debajo no sólo de los distintos segmentos universitarios, sino también de la propia población adulta.

La gráfica 9 presenta un mapa de calor que resume el porcentaje de personas en cada segmento sociodemográfico que reportan una frecuencia alta de consumo informativo, es decir, valores 3 (semanalmente) o 4 (todos los días), en seis tipos de medios: televisión, portales de noticias, redes sociales, pódcast, conversaciones con amigos o familiares y conversaciones con personas en general.

Gráfica 9. Consumo informativo frecuente por tipo de medio y segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

A primera vista se distingue que, entre todos los grupos estudiados, las redes sociales se erigen como el principal canal de acceso a la información política, en tanto que la televisión se ubica como fuente secundaria. Llama la atención que el pódcast aparece como canal emergente, con un uso más intenso entre quienes ya tienen un perfil informativo denso, pero aún lejos de convertirse en un referente generalizado del consumo noticioso.

Los niveles de consumo frecuente son, en conjunto, reducidos, pero se concentran en mayor medida en los segmentos universitarios. De igual manera, en el rubro de las conversaciones con gente en general se identificaron cifras de 34.5 % en la universidad pública crítica, 28.3 % en la privada de

élite y 17.5 % en la privada de acceso amplio, que contrastan con 10.4 % en la población joven no universitaria y 12 % en la adulta. Estos porcentajes perfilan una brecha clara en el uso de interacciones cara a cara como recurso informativo entre, por un lado, quienes están insertos en circuitos educativos universitarios y, por otro, quienes se ubican fuera de ellos.

En la gráfica se aprecia, además, que la muestra de alumnos de universidad pública de tradición crítica es la más intensamente informada y la de perfil más diversificado. Le sigue la universidad privada de élite con un patrón denso, aunque menos homogéneo, en la medida en que ocupa una posición intermedia.

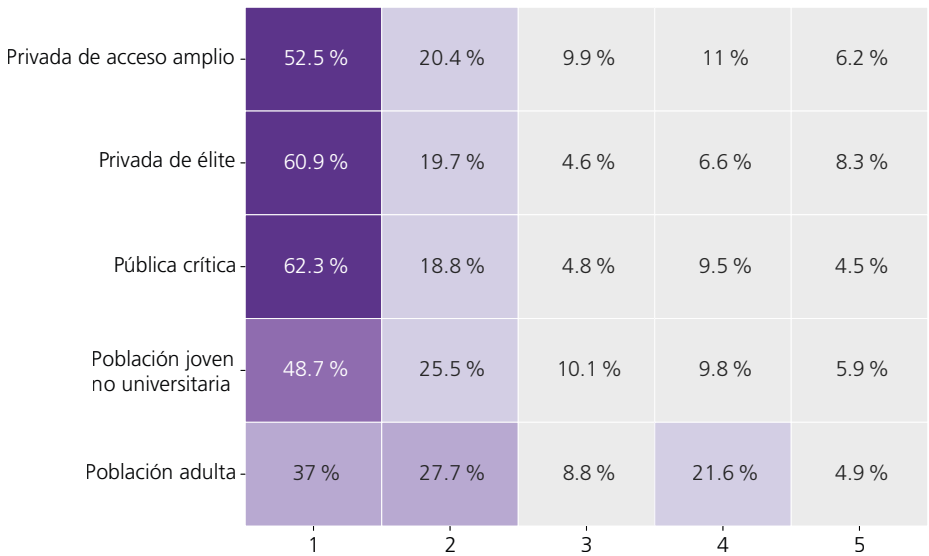
En el extremo inferior del espectro se sitúa la población no universitaria, tanto joven como adulta. En ambos casos, las redes sociales constituyen el canal de acceso a la información política más utilizado, pero operan sin un acompañamiento de otras fuentes formales o interpersonales.

Para evaluar la confianza informativa, se retomó una pregunta de la Encuesta Multidimensional de Competencias Cívicas Juveniles cuyo formato solicitaba a cada persona identificar las dos fuentes en las que más confía para informarse sobre asuntos públicos. Dado que la pregunta ofrecía un conjunto amplio y heterogéneo de opciones, éstas se agruparon en categorías analíticamente coherentes. La clasificación se realizó a partir de la naturaleza del mediador informativo, el tipo de autoridad cognitiva involucrada y el grado de profesionalización periodística o institucional asociado. El resultado es un esquema compuesto por cinco categorías sustantivas: fuentes oficiales, interacción social cercana, medios tradicionales, periodismo profesional digital y redes sociales e *influencers*.

Los valores del mapa corresponden a la proporción de menciones que recibe cada categoría entre las dos fuentes en las que más confía cada persona de cada segmento. Los números del eje horizontal se leen así:

1. Fuentes oficiales, es decir, fuentes gubernamentales como las mañaneras y canales de comunicación institucional directa provenientes de autoridades.
2. Interacción social cercana, como familiares, amigos que estudian política, organizaciones de la sociedad civil y fuentes basadas en vínculos personales o asociativos.
3 Medios tradicionales, como televisión, radio o periódico.
4. Periodismo profesional digital, como portales de noticias especializados y redes sociales de periodistas reconocidos.
5. Redes sociales e *influencers*, entendidos como mediadores individuales que operan principalmente en plataformas sociales, sin marcos institucionales o periodísticos formales.

Gráfica 10. Confianza en fuentes informativas entre segmentos sociodemográficos



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Las fuentes mejor posicionadas en términos de confianza son las fuentes oficiales (número 1 en el eje horizontal). Esta categoría ocupa el primer lugar en todos los segmentos. La concentración es particularmente alta entre quienes pertenecen a la pública crítica con 62.3 %, la privada de élite con 60.9 % y la privada de acceso amplio con 52.5 %. Entre la población joven no universitaria también es la categoría principal, con 48.7 %, aunque su concentración es menor que en los grupos universitarios.

Por su parte, la interacción social cercana (número 2) se posiciona como la segunda fuente de confianza en todos los segmentos. Destaca su importancia entre la población adulta general, con 27.7 %, y entre la juventud universitaria, con 25.5 %. Esto sugiere que, fuera de los segmentos universitarios, las redes personales, familiares, asociativas y de socialización directa tienen un papel más relevante en la configuración de la confianza informativa.

Cabe mencionar que la población adulta general es el segmento que presenta una distribución menos concentrada en una sola categoría. Aunque las fuentes oficiales persisten en el primer lugar, con 37 %, este grupo también manifiesta niveles altos de confianza en la interacción social cercana, con 27.7 %, y en el periodismo profesional digital, con 21.6 %. En contraste, los segmentos universitarios muestran una concentración mucho mayor en las fuentes oficiales y un peso más bajo del periodismo profesional digital, que va de 6.6 % en la privada de élite a 11 % en la privada de acceso amplio.

Asimismo, los medios tradicionales (número 3) tienen un peso bajo en todos los segmentos. Sus valores van de 4.6 % en la privada de élite a 10.1 % en la juventud no universitaria, por lo que la televisión, radio y periódico ocupan una posición secundaria frente a las fuentes oficiales, la interacción social cercana y, en algunos casos, el periodismo profesional digital.

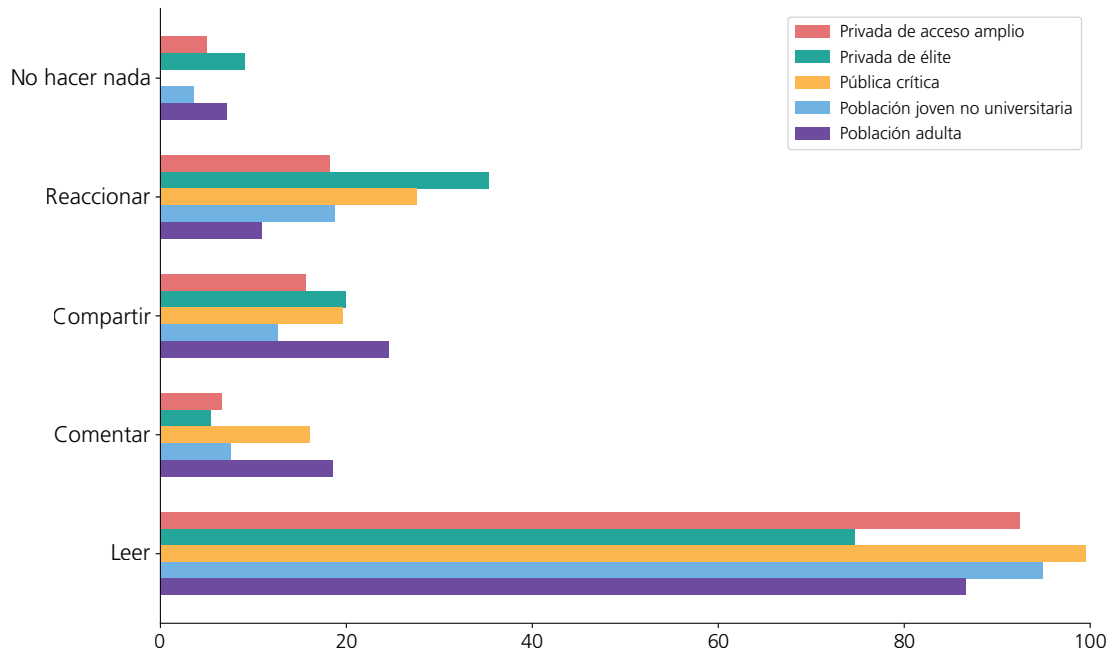
Finalmente, el lugar de las redes sociales e *influencers* (número 5) es marginal en todos los segmentos, pues sus valores se ubican entre 4.5 y 8.3 %. Esto sugiere que, aun cuando estas plataformas puedan tener alta exposición, no constituyen las fuentes de mayor confianza para informarse sobre política y asuntos públicos.

3.2.2.3. Involucramiento informativo y respuesta digital a contenidos políticos

La forma en que los grupos analizados reaccionan en redes sociales ante noticias políticas que les parecen importantes constituye un indicador sensible de su involucramiento informativo y de sus patrones de participación digital. Estas conductas reflejan niveles diferenciados de exposición, expresividad y activación política.

La gráfica 11 se construye a partir de las cinco actividades que las y los informantes declararon llevar a cabo como reacción ante una noticia política importante en redes.

Gráfica 11. Reacciones a contenidos políticos por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Entre el catálogo de actividades digitales reactivas disponibles, la lectura destaca como la práctica más extendida en todos los segmentos. Ello sugiere que la exposición básica a la información política es casi generalizada, con una concentración extrema en el entorno público crítico y una ligera caída en el segmento de élite privada.

Los resultados relacionados con comentar indican que la intervención discursiva abierta se concentra en dos universos sociales distintos. Por un lado, en un segmento adulto donde la trayectoria vital y el uso de redes permiten una articulación más frecuente de la opinión política. Por otro lado, en un entorno formativo explícitamente crítico que favorece la verbalización y discusión de contenidos públicos. Las universidades privadas, en cambio, parecen privilegiar otras formas de relación con la información política que no pasan por el comentario público.

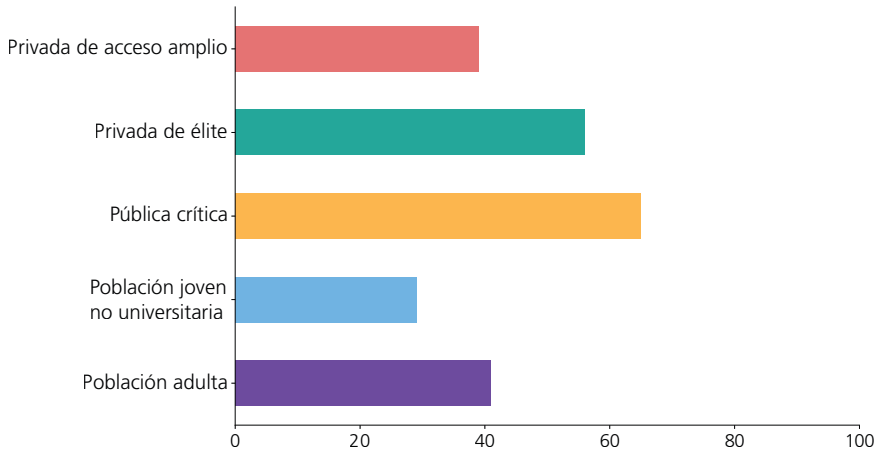
En cuanto a la conducta de compartir, la pauta sugiere que la amplificación del contenido político es más intensa en la población adulta y que, dentro del mundo estudiantil, quienes más redistribuyen información se encuentran en entornos de élite o de formación crítica, mientras que los sectores juveniles no universitarios comparten menos, aun cuando leen en proporciones muy altas.

Las reacciones mediante *likes* o emojis presentan una configuración diferente. La respuesta rápida y de bajo costo expresivo es especialmente intensa en el segmento de élite privada y también relevante en el entorno crítico. Esto sugiere estilos de uso de redes donde la señalización simbólica de aprobación o reacción resulta más común que el comentario extenso.

Por último, si se compara el nivel promedio de actividad en cada grupo, la universidad pública crítica presenta el valor más alto en el conjunto de las cinco conductas, con una media de 32.6 %. Le siguen la población adulta con 29.6 %, la universidad privada de élite con 28.9 % y la privada de acceso amplio con 27.6 %. La población joven no universitaria se ubica muy cerca de esta última cifra con 27.5 %. Esto refuerza la idea de que el entorno público crítico combina una lectura casi universal con una propensión relativamente mayor a transformarla en diferentes tipos de interacción.

A diferencia del consumo ocasional de notas que aparecen en línea, seguir cuentas de noticias o periodistas supone una decisión más estable y, en muchos casos, una forma de delegar la selección de información a actores con cierto grado de profesionalización. Por ello, indagar sobre este hábito entre las personas informantes ofrece una ventana para distinguir entre repertorios informativos más estructurados y otros más fragmentados.

Gráfica 12. Seguimiento de cuentas especializadas por segmento sociodemográfico

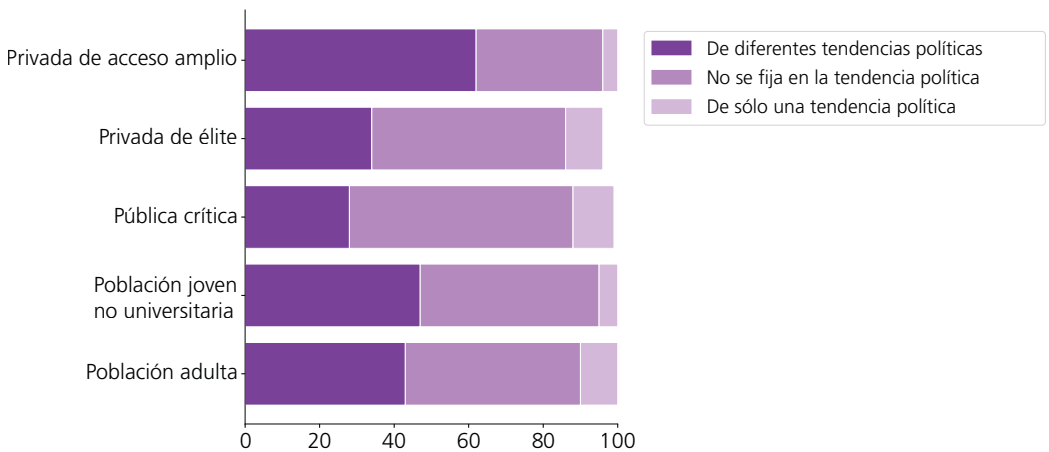


FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Los resultados mostrados en la gráfica apuntan a la articulación de un circuito de consumo informativo más profesionalizado concentrado en los enclaves universitarios con mayor capital académico, mientras que los sectores con trayectorias educativas más frágiles dependen menos de mediadores periodísticos y quedan más expuestos a información dispersa y no verificada.

La circulación de información política en redes sociales ocurre entre las líneas ideológicas de las distintas fuentes que componen ese consumo. En este contexto se inscribe la pregunta de la Encuesta Multidimensional de Competencias Cívicas Juveniles sobre si las cuentas que siguen los grupos analizados son de diferentes tendencias políticas o de una sola, o bien si la cuestión les resulta indistinta.

Gráfica 13. Diversidad ideológica de las fuentes consultadas en redes sociales por segmento sociodemográfico

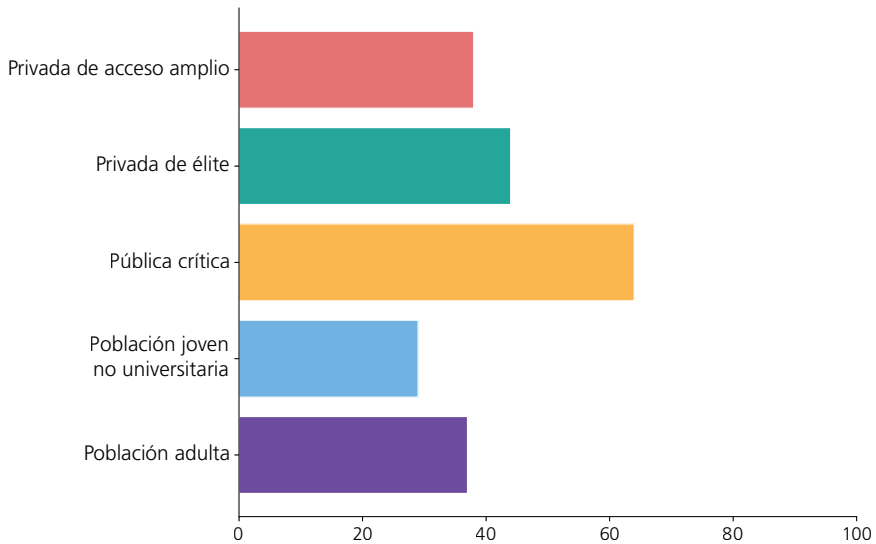


FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

En general, el resultado sugiere la configuración de ambientes informativos que no se estructuran tanto como cámaras de eco conscientes, sino como mezclas de diversidad, indiferencia y, en menor medida, alineamiento unidireccional.

Un interés adyacente de la actual investigación es conocer con qué regularidad se incorporan voces diversas a la práctica cotidiana de búsqueda de información. La exposición esporádica a perspectivas alternativas tiene efectos muy diferentes a la consulta sistemática de medios y cuentas que representan corrientes políticas distintas. La frecuencia con que se recurre a estas fuentes indica hasta qué punto la pluralidad ideológica forma parte del hábito informativo, de ahí que preguntar al respecto permita estimar si la diversidad es un componente estable o un recurso marginal dentro de rutinas informativas dominadas por miradas afines.

Gráfica14. Frecuencia de consulta de fuentes ideológicamente diversas en redes sociales por segmento sociodemográfico



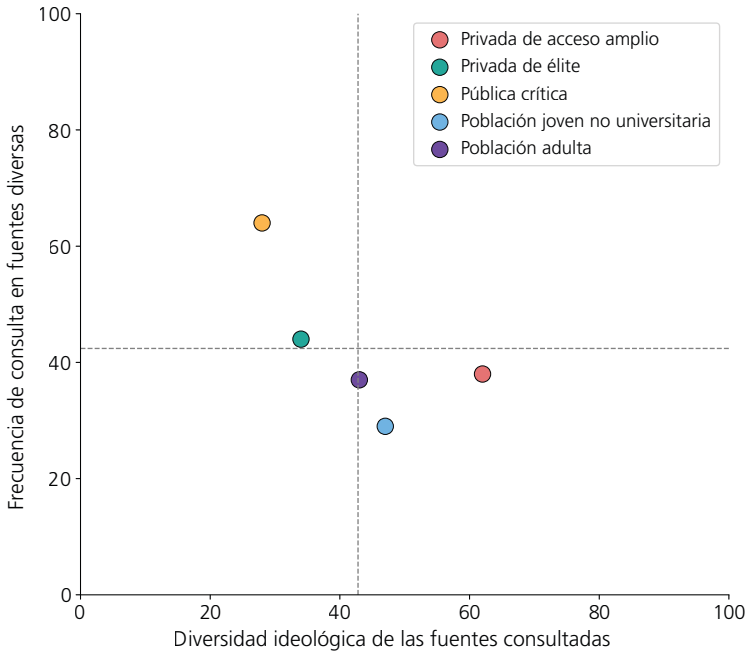
FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La distribución que se observa en la gráfica sugiere que el entorno universitario más politizado y crítico concentra la práctica más consistente de consulta plural, mientras que quienes permanecen fuera de la universidad tienden a incorporar con menor frecuencia fuentes ideológicamente diversas en su consumo informativo político.

El diagrama de dispersión que se despliega a continuación cruza dos dimensiones del comportamiento informativo. El eje horizontal ubica, para cada grupo sociodemográfico, el porcentaje de personas que declara seguir cuentas de diferentes tendencias políticas; en el eje vertical se muestra la

media de quienes afirman consultar esas fuentes diversas al menos a veces o con frecuencia.

Gráfica 15. Diversidad y frecuencia de consulta de fuentes ideológicamente diversas en redes sociales por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Ningún grupo se sitúa en el cuadrante de alta diversidad y frecuencia de consumo informativo en redes. Tomando como referencia las medias generales de ambas dimensiones (alrededor de 43 % en diversidad y 42 % en frecuencia), los puntos se distribuyen en sólo dos cuadrantes: grupos que combinan una diversidad ideológica más amplia con una frecuencia de consulta por debajo del promedio y grupos que consultan con más frecuencia, pero dentro de repertorios menos diversos en las redes sociales.

Dentro del cuadrante de alta diversidad y baja frecuencia se ubican la universidad privada de acceso amplio, la población adulta y las personas jóvenes no universitarias. En estos segmentos una proporción relativamente elevada declara seguir cuentas de distintas tendencias políticas, pero la práctica de consulta de esas fuentes diversas es más esporádica que en el promedio de la muestra. Puede decirse que, en términos de hábito, la pluralidad está presente en el repertorio, pero no se traduce en una exposición frecuente y sostenida.

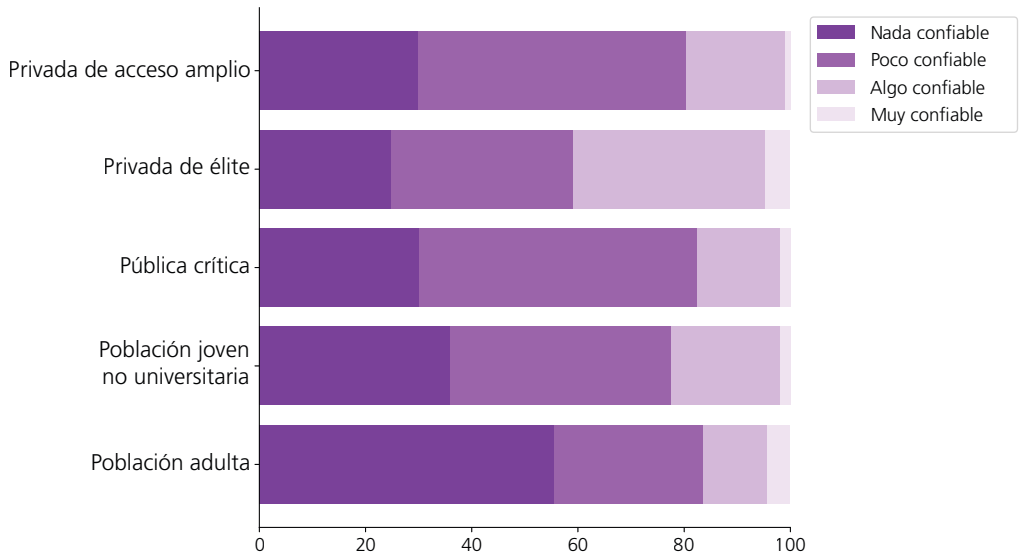
En sentido inverso, las comunidades estudiantiles de la universidad pública de tradición crítica y las universidades privadas de élite se concen-

tran en el cuadrante de baja diversidad y alta frecuencia. En estos grupos, la consulta de fuentes se realiza con mucha mayor regularidad que en el resto, pero parte de una base declarada de diversidad ideológica más acotada. Estos datos ponen de manifiesto un comportamiento donde la intensidad del uso informativo se asocia a repertorios más estrechos en términos ideológicos, mientras que los segmentos con repertorios más plurales tienden a activar esa diversidad con menor frecuencia.

Un elemento clave de la dimensión cognitiva —y al mismo tiempo una forma de cerrar el análisis de esta sección— consiste en evaluar qué tan capaces son las personas de procesar contenidos informativos cuando se enfrentan a mensajes ambiguos, potencialmente engañosos o que requieren verificación adicional.

Para capturar ese componente, la EMCCJ incorpora un microejercicio que consiste en presentar una nota periodística breve, utilizada sólo como estímulo, y solicitar a cada persona evaluar qué tan confiable le parece. Acto seguido, se le pregunta qué haría tras recibirla.

Gráfica 16. Confiabilidad percibida frente a un estímulo noticioso por segmento sociodemográfico



NOTA: Los porcentajes no consideran las respuestas no sabe/no contestó, ya que reportan niveles por debajo de 1 % de la muestra total.

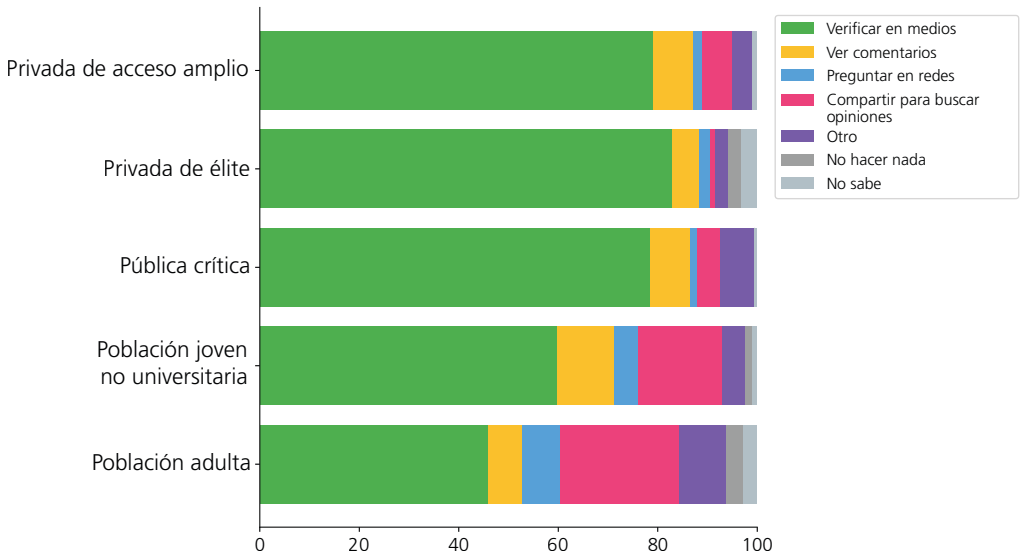
FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La distribución de respuestas revela que en todos los grupos predominan evaluaciones de baja confiabilidad, pero el peso relativo de cada categoría cambia según el contexto institucional y sociodemográfico. Destaca el caso de la población adulta con niveles de desconfianza particularmente elevados.

En conjunto, el ejercicio habla de un panorama cognitivo dominado por la desconfianza, con variaciones sistemáticas entre grupos. Las reacciones más críticas se observan en la población adulta y la población joven no universitaria, las más equilibradas (aunque igual de escépticas) en las universidades públicas críticas y privadas de acceso amplio, y las más abiertas a atribuir confiabilidad relativa se encuentran entre estudiantes de universidades privadas de élite.

La pregunta inmediatamente posterior en la EMCCJ se orienta a observar cómo se traducen esos juicios de confiabilidad en comportamientos concretos de verificación. Las opciones de respuesta abarcan desde prácticas informativas más o menos robustas (como buscar si medios reconocidos reportan lo mismo) hasta conductas más laxas en términos de calidad epistémica, como compartir la nota para obtener opiniones o simplemente observar los comentarios de otros usuarios.

Gráfica 17. Repertorios de verificación informativa por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

En todos los segmentos, la opción mayoritaria es buscar si medios reconocidos reportan lo mismo; incluso entre los grupos con menor apego a instituciones formales, más de la mitad recurre a ese mecanismo. A pesar del escepticismo generalizado, la prensa y los medios *reconocidos* siguen ocupando el centro de la validación de información.

Las comunidades universitarias son el núcleo de esta lógica de verificación institucionalizada. En las universidades privadas de acceso amplio y en las públicas de tradición crítica, casi 8 de cada 10 personas encuestadas dicen que verificarían la nota de esa forma. Si se cruzan estos datos con

la pregunta anterior, donde predominan juicios de poco confiable sobre la nota, pero con una presencia de la categoría algo confiable relativamente mayor de la que hay entre la población joven no universitaria, se configura una actitud de escepticismo estructural con normas más o menos claras.

El caso de la universidad privada de élite refuerza esta lectura. Se trata del grupo que más confía en medios tradicionales como herramienta de verificación y, al mismo tiempo, el que menos utiliza la nota como insumo para la conversación en red. La combinación es llamativa, pues resulta en alumnas y alumnos más dispuestos que otros a conceder algo de confianza, pero a la vez más disciplinados a la hora de cotejar la información con fuentes periodísticas.

En el extremo opuesto, la población adulta es la que menos confía en los medios como primera reacción y uno de los grupos que más descansa en sus vínculos sociales para procesar la información. Si esto se conecta con la batería anterior, donde la población adulta era la más escéptica de todas, aparece una lógica de duda generalizada que se tramita a través de la conversación social y, en una parte no trivial, también mediante parálisis o indecisión frente a qué hacer con la nota.

La población joven no universitaria funciona como una bisagra entre estos dos polos reactivos. Por un lado, predominan quienes dicen que verificarían en medios (59.7 %), pero esa cifra está por debajo de la observada en el ámbito universitario. Por otro lado, muestran el uso más intensivo de herramientas sociales para procesar la información, sin abandonar la esfera digital. Si se cruza esta información con la pregunta anterior, donde su nivel de desconfianza también era muy alto, pero ligeramente menos extremo que el de la población adulta, lo que se ve es una combinación de desconfianza y procesamiento *entre pares*. Es decir, la nota se mira con recelo, pero antes de descartarla o validarla se la somete a la prueba de la conversación y del clima de comentarios en línea.

3.2.3. Dimensión actitudinal y de valores

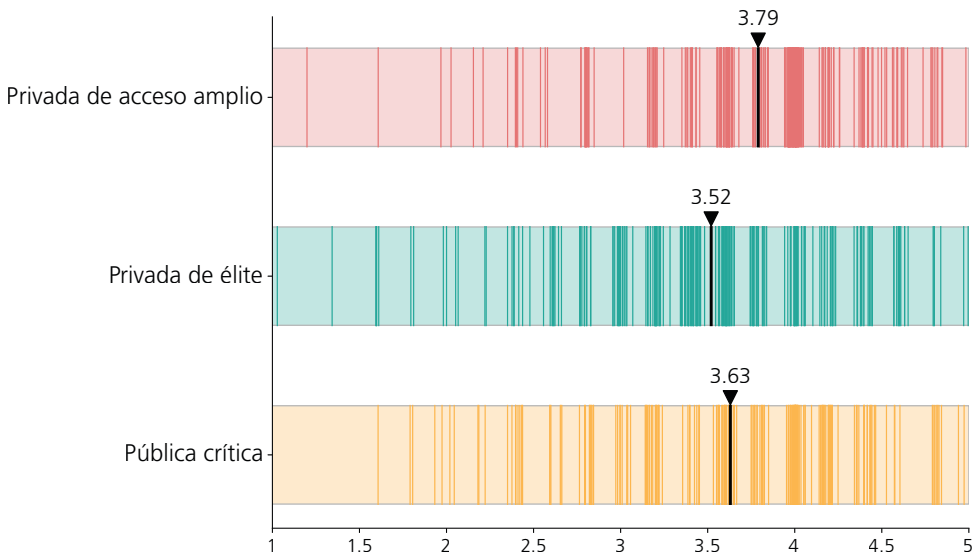
Este componente de la vida cívica se enfoca en aquello que la ciudadanía espera de los actores e instituciones públicas, qué tan dispuesta está a convivir con la diferencia e, incluso, con el conflicto, y qué entiende por una democracia legítima. Para efectos de este estudio, la dimensión actitudinal se organiza en torno a cuatro subcategorías analíticas: la autoeficacia política, la confianza interpersonal e institucional, la tolerancia al disenso y valoración del pluralismo y las orientaciones normativas frente a la democracia, el conflicto y la diversidad.

3.2.3.1. Entorno deliberativo

Como parte de la Encuesta Multidimensional de Competencias Cívicas Juveniles, se diseñó un conjunto de reactivos para captar el clima deliberativo en entornos educativos. Se trata de ítems que preguntan si en las clases: *a)* se fomenta la discusión de temas controversiales; *b)* si el profesorado respeta opiniones impopulares; *c)* si las y los estudiantes pueden expresar libremente sus posiciones políticas, sin temor a consecuencias negativas; *d)* si la institución ofrece oportunidades para actividades cívicas, y *e)* si quienes sostienen ideas minoritarias pueden hacerlo sin recibir ataques.

A partir de los cinco reactivos del módulo se construyó un índice de clima deliberativo, con el promedio de las respuestas recodificado en una escala del 1 al 5, donde los valores más altos indican percepciones más favorables de apertura al debate, respeto al disenso y seguridad para la expresión política en los enclaves.[31]

Gráfica 18. Percepción del clima deliberativo por enclave universitario



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

El índice reporta valores medios de 3.79 en la universidad privada de acceso amplio, 3.63 en la pública de tradición crítica y 3.52 en la privada de élite.

[31] El índice de clima deliberativo se construyó a partir de cinco reactivos tipo Likert recodificados en una escala de 1 a 5 y promediados para cada caso con al menos tres respuestas válidas. Las posibles respuestas a las preguntas (ejemplo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente frase: en mis clases se nos anima a discutir temas controversiales?) son: muy en desacuerdo = 1; en desacuerdo = 2; ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3; de acuerdo = 4; muy de acuerdo = 5. La consistencia interna es aceptable para una escala breve ($\alpha = 0.678$) y todas las correlaciones ítem–total son positivas (0.27-0.53). El análisis factorial exploratorio muestra un factor dominante ($\lambda_1 = 2.25$), lo que respalda su tratamiento como medida unidimensional. El índice presenta una media de 3.64 (DE = 0.73), con valores observados entre 1.2 y 5.0.

En los tres casos los valores se ubican por encima del punto medio teórico de la escala, de modo que no se observa un entorno abiertamente hostil a la discusión política, pero sí diferencias sistemáticas en la intensidad con que se perciben la apertura al disenso, el respeto a opiniones impopulares, la posibilidad de expresar posturas políticas sin sanción y la disponibilidad de espacios para la participación cívica.

El hecho de que la universidad privada de acceso amplio encabece el índice (por encima incluso de la pública crítica) puede interpretarse como el resultado de una composición social más heterogénea, así como de culturas institucionales orientadas a contener, pero también a canalizar, esa diversidad. En la universidad pública de tradición crítica, la puntuación un poco menor es compatible con una vida política estudiantil históricamente más militante, pero también con la presencia de rutinas burocráticas, sobrecarga académica o conflictos gremiales que no necesariamente se experimentan como espacios de deliberación protegida por todo el alumnado.

La media más baja se da en la universidad privada de élite, con una dispersión menor en los casos. Estos entornos suelen generar formas de convivencia homogéneas, en las que las diferencias políticas se expresan de manera más contenida, reguladas por normas implícitas de cordialidad, por la presión de códigos de estatus y por expectativas tempranas de profesionalización.

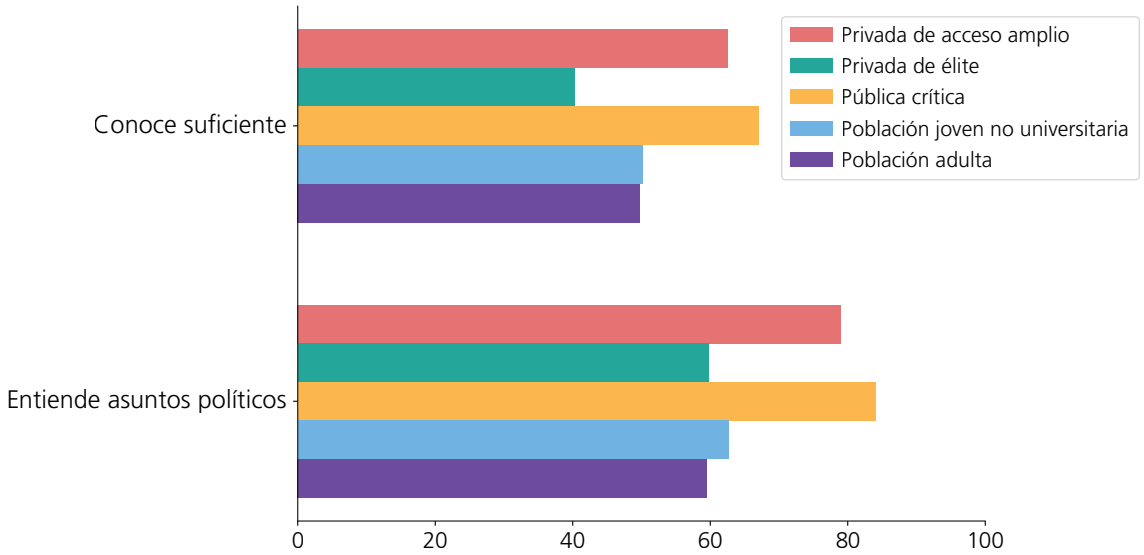
3.2.3.2. Autoeficacia interna

Para el esquema analítico de este estudio, la autoeficacia se entiende mediante dos componentes articulados. La cualidad de interna alude al sentimiento de control personal y agencia, mientras que la autoeficacia externa se vincula a la expectativa de que el entorno institucional responda en alguna medida.

3.2.3.3. Percepción de comprensión política y suficiencia cognitiva

La autoeficacia interna se traduce en una serie de juicios subjetivos sobre la propia capacidad para comprender y manejar la información política. En la EMCCJ esta dimensión se sintetiza en dos reactivos de autoevaluación cognitiva: *a)* entiendo bien los asuntos políticos importantes del país y *b)* tengo suficiente conocimiento para participar en política. En ambos casos, las respuestas se captaron en una escala Likert de cinco categorías ordinales que va de estar "muy en desacuerdo" hasta "muy de acuerdo".

Gráfica 19. Percepción de comprensión y conocimiento político por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

El porcentaje de quienes declaran entender bien los asuntos políticos importantes del país es sistemáticamente mayor que el de quienes afirman tener suficiente conocimiento para participar en política. Esto sugiere que, subjetivamente, los umbrales para afirmar "entiendo lo que pasa" son menos exigentes que los necesarios para sostener "tengo el conocimiento suficiente como para intervenir", de modo que la autoeficacia cognitiva interna se construye en dos niveles, uno laxo (asociado a la familiaridad general con la política) y otro más restringido (ligado a la percepción de competencia para actuar).

Al comparar entre grupos, la matrícula de la universidad pública de tradición crítica destaca por tener la autoeficacia interna más alta. En este grupo, 84 % afirma entender bien los asuntos políticos y 67 % considera contar con suficiente conocimiento para participar. El alumnado de las universidades privadas de acceso amplio se ubica en una posición cercana. Casi 80 % de su estudiantado declara entender bien la política y 62.5 % afirma tener el conocimiento suficiente para participar en ella. El contraste más marcado aparece en las universidades privadas de élite, donde sólo 59.73 % de sus estudiantes afirma entender bien los asuntos políticos, y únicamente 40.27 % sostiene que tiene suficiente conocimiento para participar. En términos de autoeficacia interna, la élite educativa aparece como el enclave más frágil y donde menos estudiantes se sienten seguros de comprender la política, lo que implica un perfil de confianza cognitiva más acotada que en la universidad pública o en las privadas de acceso amplio.

Entre la población joven no universitaria, los niveles de autoeficacia interna se sitúan en una zona intermedia, pues parece tener menos confianza que la población estudiantil de las universidades públicas y las privadas de acceso amplio, aunque no se encuentra desconectada del mundo político. Entre la población adulta general destaca una distribución similar, con 59.54 % que afirma entender bien y 49.75 % que se percibe con conocimiento suficiente.

En síntesis, se tiene que en la parte alta de la autoeficacia interna se sitúan la universidad pública de tradición crítica y las privadas de acceso amplio, donde la mayoría de sus estudiantes combina la sensación de entendimiento con una autopercepción más o menos sólida de suficiencia cognitiva para participar. En el extremo más bajo aparece la universidad privada de élite, con menor proporción de estudiantes que afirma comprender y, sobre todo, con una fracción reducida que se considera suficientemente conocedora como para intervenir en el ámbito político. La población joven no universitaria y la adulta quedan en un nivel intermedio, con brechas más acotadas entre comprensión y suficiencia.

3.2.3.4. Barreras autopercibidas para la participación política

De manera complementaria, se incorporó al análisis un segundo módulo orientado a captar la dimensión *negativa* de la autoeficacia interna, es decir, no sólo si las personas encuestadas se sienten capaces de entender y participar, sino en qué medida perciben que distintos factores las limitan para hacerlo. La batería contenida en la EMCCJ pregunta explícitamente qué tanto diversas condiciones personales y contextuales (13 en total) han limitado una participación política más activa (situación económica, tiempo disponible, redes y contactos, nivel educativo o conocimiento, identidad de género, orientación sexual, color de piel, edad, temor a represalias, experiencias negativas previas, entre otras). Las afirmaciones de la batería se organizaron en cinco bloques que agrupan las limitaciones por tipos de naturaleza similar, numeradas del 1 al 13 para facilitar la lectura de la siguiente manera:

Materiales

1. Limitación económica
2. Falta de tiempo
3. Ausencia de redes o contactos

Cognitivas

4. Déficit de conocimiento político
5. Nivel educativo insuficiente

Identitarias

6. Género como restricción
7. Orientación sexual

8. Color de piel o apariencia física
9. Edad

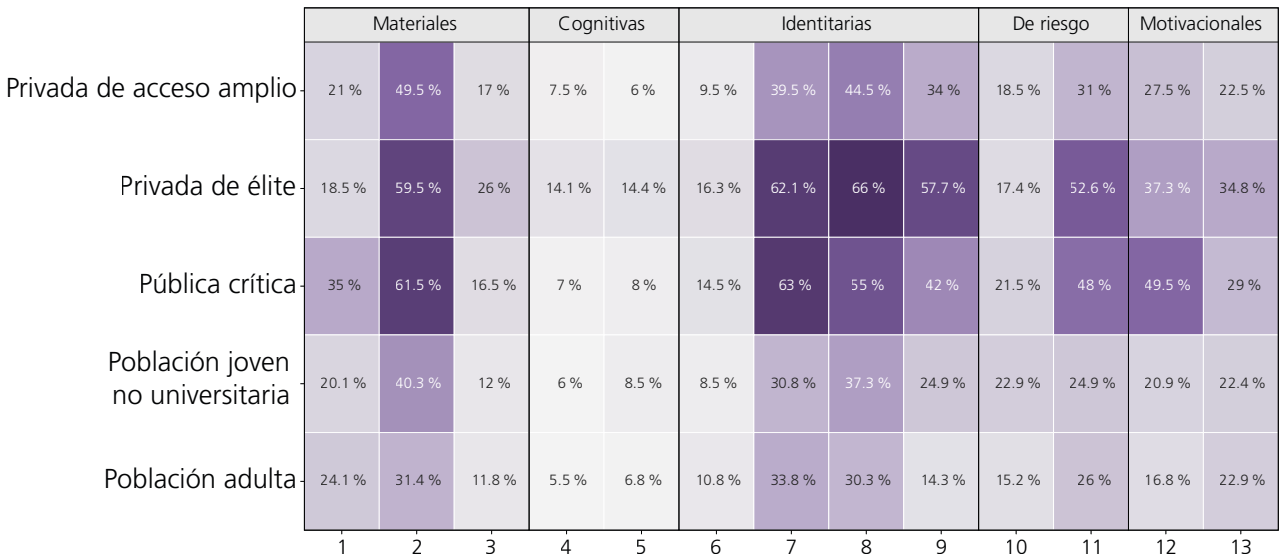
De riesgo (ítems 10-11)

10. Temor a represalias
11. Experiencias negativas previas

Motivacionales

12. Preferencias políticas como freno
13. Falta de interés o motivación

Gráfica 20. Percepción de barreras para la participación política, por segmento sociodemográfico y dimensión de factor



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Las barreras más extendidas se concentran principalmente en los ámbitos material e identitario, con diferencias descriptivas relevantes entre grupos poblacionales. Las limitaciones cognitivas presentan valores más bajos y no aparecen como uno de los núcleos principales de la gráfica. En forma agregada, destacan dos tendencias transversales. Primero, los segmentos universitarios, en especial los de instituciones privadas de élite y los provenientes de espacios públicos con tradición crítica, reportan niveles elevados de barreras identitarias. Es posible deducir que, en sectores con mayor socialización política, las formas de exposición pública, la vigilancia de pares y los códigos normativos de los entornos académicos pueden amplificar la conciencia de atributos personales, como el género, la orientación sexual, la apariencia o la edad. Segundo, la población adulta y las personas jóvenes no universitarias perciben una

menor densidad de barreras expresivas y participativas en casi todas las dimensiones.

Si se examina cada dimensión, las limitaciones materiales muestran variaciones relevantes. La falta de tiempo aparece como la restricción más extendida dentro de este bloque, con cifras particularmente altas en los espacios educativos privados y en la universidad pública crítica. En la privada de élite alcanza 59.5 %, en la pública crítica 61.5 % y en la privada de acceso amplio 49.5 %. La situación económica como limitante opera con particular fuerza en el segmento de universidad pública crítica, con 35 %. La carencia de redes o contactos aparece como un factor de intensidad moderada, aunque más acentuado en la privada de élite, donde alcanza 26 %.

En cuanto a las limitantes cognitivas, los valores son bajos en todos los segmentos. Los ítems de esta dimensión se ubican entre 5.5 y 14.4 %, sin concentraciones altas como las observadas en las dimensiones material, identitaria, de riesgo o motivacional. Los niveles más altos aparecen en el alumnado de la privada de élite, con 14.1 y 14.4 %, seguidos por la universidad pública crítica. Esto permite señalar que las barreras cognitivas existen, pero no constituyen el foco principal de las restricciones autopercibidas para la participación política.

El bloque identitario constituye uno de los núcleos más fuertes de restricciones a la participación política. El alumnado de universidad privada de élite presenta valores altos, con 16.3, 62.1, 66 y 57.7 % en los ítems asociados al género, orientación sexual, apariencia y edad. En la universidad pública crítica se observan patrones semejantes, con 14.5, 63, 55 y 42 %. Estos datos indican que la identidad se percibe como un eje relevante de elaboración subjetiva del riesgo reputacional y social. En cambio, tanto la población joven no universitaria como la adulta reportan cifras más bajas, aunque no marginales, especialmente en los ítems de orientación sexual y apariencia.

En la dimensión de riesgo, el temor a represalias presenta niveles moderados, con valores entre 15.2 y 22.9 %; en cambio, las cifras son altas en las experiencias negativas previas, pues la privada de élite registra 52.6 % en ese ítem, y la universidad pública crítica, 48 %. En ese sentido, el peso de esta dimensión proviene principalmente de las experiencias negativas previas, más que de una percepción generalizada de represalias directas.

Por último, las limitaciones motivacionales presentan diferencias descriptivas relevantes entre grupos. La universidad pública crítica concentra el valor más alto en el ítem asociado a las preferencias políticas como obstáculo, con 49.5 %, y la privada de élite también tiene un nivel elevado, con 37.3 %. En

contraposición, la falta de interés o motivación presenta niveles más homogéneos, con valores entre 22.4 y 34.8 %. Esto pone de manifiesto que el componente motivacional no opera de manera uniforme y que, además, las preferencias políticas parecen tener mayor peso en contextos universitarios politizados, mientras que la falta de interés aparece como una disposición más transversal.

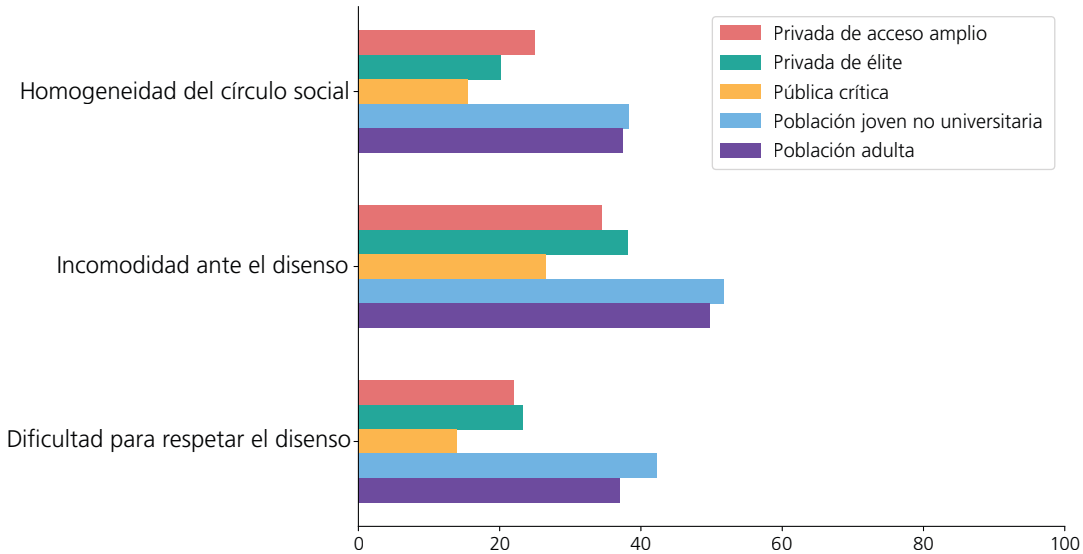
La lectura articulada de estos datos muestra que la mayor carga de limitaciones autopercibidas se concentra en las dimensiones identitaria y material, con focos adicionales en experiencias negativas previas y preferencias políticas dentro de algunos segmentos universitarios. Las barreras cognitivas ocupan una posición secundaria en la gráfica. En conjunto, los resultados sugieren que la participación política depende tanto de los recursos disponibles, por ejemplo, el tiempo y las redes, como de las condiciones de exposición social, vigilancia entre pares e interacción política cotidiana. Los valores más bajos de la población adulta y la juventud no universitaria pueden interpretarse como un mayor distanciamiento respecto del espacio político, en otras palabras, la percepción de sus limitaciones disminuye cuando la participación es menos esperada, cotidiana o integrada al escrutinio social.

3.2.3.5. Disposiciones internas para la interacción democrática

La disposición a convivir con el conflicto, a reconocer la legitimidad de la diferencia y a sostener intercambios respetuosos incluso bajo desacuerdo constituye un núcleo normativo importante para la cultura democrática. La EMCCJ permite observar este plano desde tres ángulos analíticos: el primero corresponde a la tolerancia al disenso y la apertura al pluralismo, el segundo trata las actitudes normativas sobre la libertad de expresión y la protección emocional y el tercero se refiere a la confianza interpersonal e institucional.

La tolerancia al disenso y la apertura al pluralismo captan la disposición subjetiva para convivir con ideas contrarias, gestionar el conflicto político y sostener interacciones respetuosas en contextos de diferencias fuertes. Para estimar la sensibilidad negativa al disenso, se utilizaron tres reactivos de la EMCCJ que capturan distintas formas de incomodidad o cierre frente a la diferencia: *a)* me resulta difícil respetar a personas con ideas políticas muy diferentes a las mías (dificultad para respetar el disenso), *b)* prefiero evitar conversaciones con personas que tienen ideas políticas muy diferentes (incomodidad ante el disenso) y *c)* en mi círculo de amigos buscamos evitar a personas con ideas políticas diferentes a las nuestras (homogeneidad del círculo social).

Gráfica 21. Sensibilidad negativa al disenso por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

A nivel global, los niveles más altos de rechazo al disenso y preferencia por la homogeneidad se concentran en la población joven no universitaria y la adulta, en tanto que los tres enclaves universitarios se ubican sistemáticamente por debajo de estos dos grupos en casi todos los indicadores. Estos datos sugieren que la socialización en espacios educativos con cierto componente deliberativo introduce frenos normativos a las actitudes de cierre, aunque esos frenos no erradican del todo la incomodidad frente a ideas políticas divergentes.

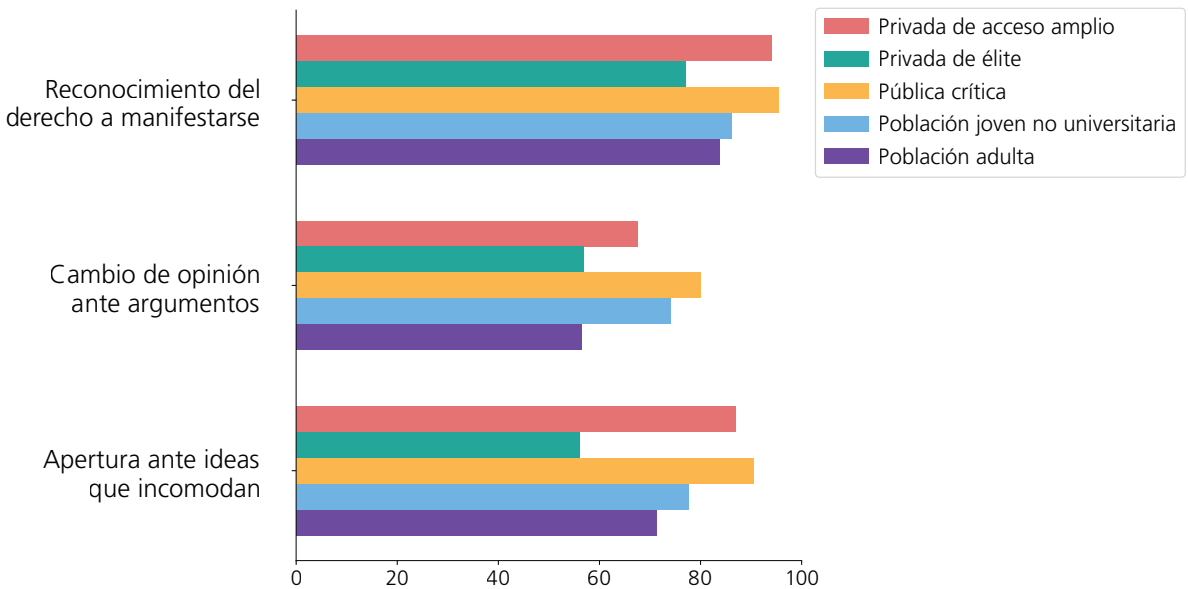
Cabe destacar que mientras 26.5 % del alumnado de la universidad pública crítica declara incomodarse cuando enfrenta desacuerdos fuertes, en las instituciones del sector privado las cifras ascienden a 34.5 % en las de acceso amplio y a 38.1 % en las de élite; sin embargo, estos porcentajes se disparan a 51.7 y 49.8 % en la población joven no universitaria y la adulta, respectivamente. Altos niveles de incomodidad tienden a traducirse en cierre de círculos de confianza y reducción de oportunidades deliberativas. El hecho de que el malestar frente al disenso sea mucho más intenso fuera de los enclaves universitarios refuerza la hipótesis de que la escuela y la universidad amortiguan, aunque sea de forma parcial, la aversión afectiva al conflicto político-discursivo.

La homogeneidad del círculo social (medida a partir del acuerdo con la idea de que el propio entorno de amistades tiende a evitar a quienes piensan distinto) reporta un resultado similar en el caso de los grupos universitarios, aunque con niveles generales algo menores. En contraste, 38.3 % de las per-

sonas jóvenes no universitarias y 37.5 % de la población adulta reconocen la homogeneidad política de sus círculos sociales. Este dato advierte que la segmentación ideológica y la construcción de *burbujas de afinidad* no es un fenómeno privativo de redes digitales, sino una práctica social cotidiana con resonancia en entornos donde el contacto con la diversidad política es más esporádico o, quizá, más costoso de gestionar.

Mientras que la gráfica previa capturaba actitudes de cierre, la siguiente se concentra en las capacidades normativas y cognitivas que facilitan el intercambio democrático. Para medir este componente, la EMCCJ incluye tres afirmaciones que expresan formas positivas de relacionarse con la diferencia: *a)* trato de entender el punto de vista ajeno, incluso cuando me incomoda, *b)* he cambiado de opinión alguna vez después de escuchar ideas distintas y *c)* todas las personas tienen derecho a manifestarse, incluso si no apoyo sus ideas.

Gráfica 22. Disposiciones de apertura democrática ante el desacuerdo por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

El alumnado de la universidad pública crítica se sitúa en un extremo que combina menor cierre con mayor apertura. Este perfil dialoga con los niveles previos más bajos de incomodidad afectiva, de dificultad normativa para reconocer la legitimidad del otro y de homogeneidad en redes sociales. Este acoplamiento indica que los espacios formativos donde se normaliza y se practica el disenso tienden a generar una formación subjetiva con facilidad para sostener diferencias políticas, sin traducirlas en amenaza personal.

En contraste, las personas jóvenes de las universidades privadas de élite reproducen un esquema inverso, con niveles de apertura y disposición al cambio sensiblemente más bajos que los del alumnado de universidad pública. A estas características se suma un reconocimiento del derecho a manifestarse que, aunque mayoritario, no alcanza los altos rangos declarativos de los otros enclaves universitarios. Su afinidad con mayores niveles de incomodidad frente al desacuerdo y con círculos sociales homogéneos apunta a que ciertos capitales educativos no neutralizan de manera automática la preferencia por la estabilidad relacional y la evitación del conflicto discursivo.

El caso de las personas jóvenes no universitarias introduce una tensión relevante en términos analíticos. Este segmento exhibe porcentajes altos en su apertura y disposición a cambiar de opinión, sólo superados por la universidad pública crítica; sin embargo, concentra también los niveles más altos de malestar frente al desacuerdo, de dificultad para respetar a quienes piensan distinto y de redes sociales homogéneas. El contraste entre esos dos planos revela una brecha entre la normatividad declarada y las condiciones prácticas para ejercerla. Esta disociación ayuda a explicar por qué ciertos grupos muestran adhesiones abstractas a la deliberación, pero reducida tolerancia efectiva a la exposición sostenida al conflicto político.

La población adulta comparte con las personas jóvenes no universitarias los altos niveles de malestar y homogeneidad social, pero su perfil normativo es más restringido. Tal combinación permite inferir una estructura donde la estabilidad de las convicciones pesa más que su revisión crítica y el desacuerdo se experimenta con un componente afectivo de amenaza.

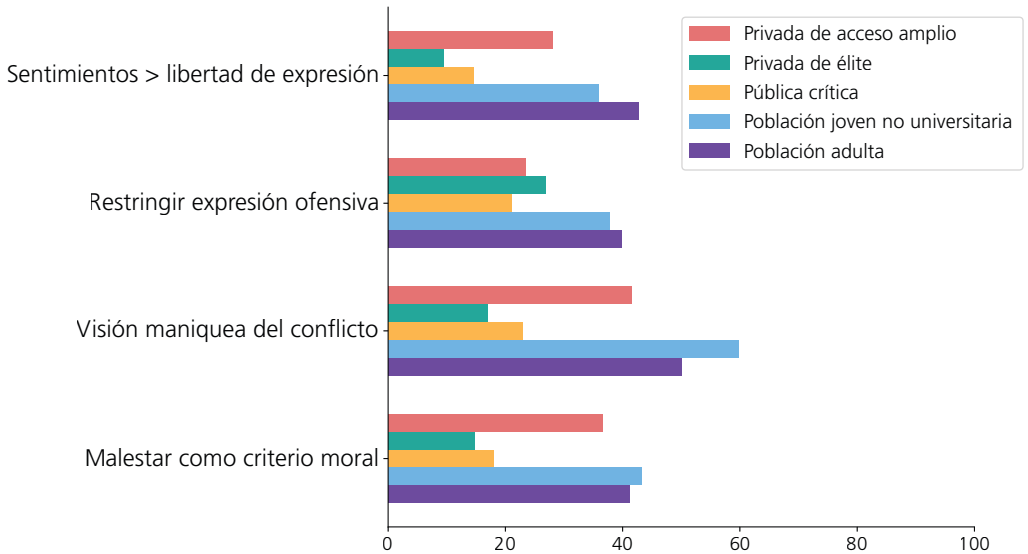
Vistas en su conjunto, las seis dimensiones aquí analizadas muestran que la arquitectura democrática subjetiva no se organiza en bloques independientes. En espacios donde la incomodidad frente al disenso es menor y las redes sociales son más diversas, la apertura, el cuestionamiento de las propias creencias y la validación del derecho a manifestarse tienden a reforzarse mutuamente. Por el contrario, cuando el desacuerdo se percibe como perturbación afectiva y los entornos sociales privilegian la afinidad, la adhesión normativa a la apertura puede coexistir con prácticas cotidianas que reproducen el cierre.

3.2.3.6. Actitudes normativas con respecto a la libertad de expresión y la protección emocional

Este eje distingue entre las visiones que privilegian la apertura irrestricta al intercambio de ideas (incluyendo aquellas que resultan ofensivas o incómodas) y las posiciones que consideran legítimo restringir el discurso para resguardar el bienestar emocional, la convivencia o la seguridad subjeti-

va. Para medir estas disposiciones, se retomaron cuatro afirmaciones de la EMCCJ que exploran distintas formas de proteccionismo afectivo y de legitimación de límites al discurso: *a)* que cuando algo produce incomodidad emocional ello suele ser señal de que está mal, *b)* que en la mayoría de los conflictos sociales es posible distinguir con claridad quiénes son los buenos y quiénes los malos, *c)* que si una opinión resulta ofensiva, la persona no debería poder expresarla públicamente y *d)* que es más importante cuidar los sentimientos de las personas que proteger la libertad de expresión. En la gráfica 23, cada una de estas formulaciones corresponde a las etiquetas sintéticas que resumen su dimensión conceptual: *a)* malestar como criterio moral, *b)* visión maniquea del conflicto, *c)* restringir la expresión ofensiva y *d)* sentimientos > libertad de expresión.

Gráfica 23. Límites subjetivos a la expresión pública por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

En términos generales, los tres enclaves universitarios comparten niveles relativamente bajos de adhesión a posturas que justifican restringir la expresión a partir de la incomodidad emocional, la ofensa percibida o la lectura moral simplificada de los conflictos. En contraste, la población joven no universitaria y la adulta exhiben porcentajes sustancialmente más altos de permisividad a estas actitudes, lo que revela un marco axiológico más proclive a validar restricciones expresivas basadas en malestar subjetivo o en juicios morales tajantes.

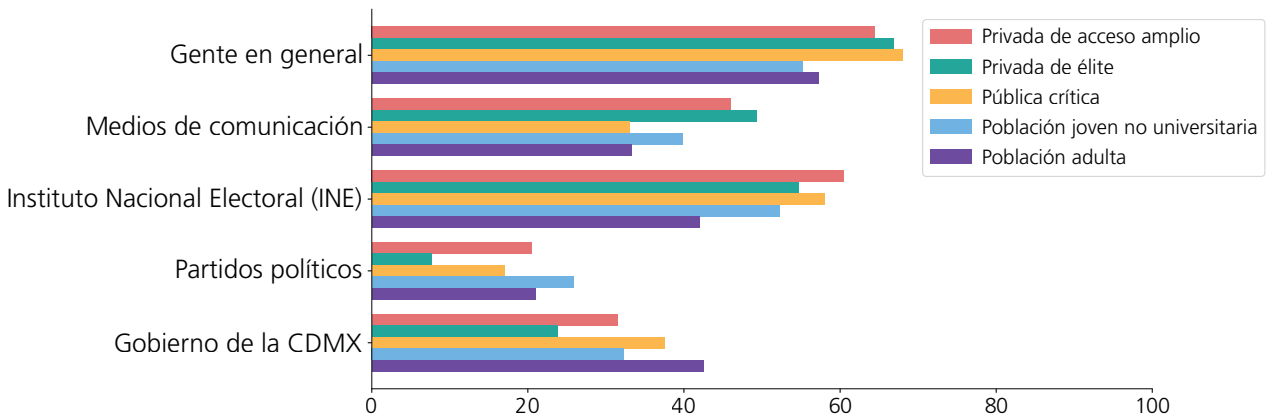
En los espacios donde la incomodidad emocional implica una falta moral, los conflictos se leen en clave binaria y la ofensa justifica limitar lo que otros pueden decir, es más probable que también se priorice el resguardo afectivo

sobre la libertad de expresión. Tanto las personas jóvenes no universitarias como la población adulta se sitúan en el extremo en el que estos criterios tienden a solaparse y reforzarse mutuamente, mientras que los enclaves universitarios muestran una tendencia sistemática a desvincular la experiencia emocional inmediata del juicio normativo sobre lo que puede o no expresarse. Este conjunto de diferencias indica que la experiencia educativa transmite conocimientos a la vez que configura modos de habitar el conflicto y el discurso público, lo cual, en última instancia, define los umbrales subjetivos de la tolerancia frente a voces y posturas que desafían las convicciones propias.

3.2.3.7. Confianza interpersonal e institucional

La confianza interpersonal e institucional constituye la base relacional de la acción colectiva en la medida en que expresa las expectativas que la población joven deposita en otras ciudadanas y ciudadanos, en las autoridades y en los dispositivos institucionales encargados de gestionar el conflicto público. La gráfica 24 se construye a partir de las cinco preguntas de la EMCCJ que evalúan el nivel de confianza en distintos actores institucionales y sociales: *a)* el Gobierno de la Ciudad de México, *b)* los partidos políticos, *c)* el Instituto Nacional Electoral (INE), *d)* los medios de comunicación y *e)* la gente en general. Si bien cada reactivo ofrecía cuatro opciones de respuesta (nada, poco, algo y mucha confianza), para efectos analíticos se recodificaron de manera dicotómica con el fin de concentrarse únicamente en la confianza efectiva. Las categorías "algo" y "mucha confianza" se agruparon como indicador de confianza positiva, mientras que "nada" y "poco" se trataron como ausencia de confianza; las respuestas "no sabe" o "no contesta" fueron excluidas para evitar distorsiones en la distribución porcentual.

Gráfica 24. Confianza declarada en instituciones y actores sociales por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

El dato más consistente es que la confianza en la "gente en general" constituye el punto más alto en todos los segmentos, pues supera de manera sistemática la confianza otorgada a instituciones formales; incluso en los grupos con niveles más bajos, este indicador permanece por encima del resto de las categorías. La mayor cercanía interpersonal y la percepción de que la gente común es más confiable parecen operar como un sustrato normativo compartido, aunque su intensidad varía entre enclaves, destacando los valores especialmente elevados de la universidad pública crítica (68 %) y las privadas de élite (66.8 %).

El Instituto Nacional Electoral ocupa el segundo lugar de confianza en casi todos los grupos, pero con una dispersión que revela diferencias según el capital educativo y la exposición institucional. Los medios de comunicación, por su parte, muestran un comportamiento más fragmentado en el que emerge una pauta que desdobla a los grupos universitarios. Por un lado, el alumnado de élite privada presenta una relación más positiva con los medios, mientras que la población muestra de la universidad pública crítica manifiesta mayor escepticismo, un aspecto coherente con tradiciones políticas de desconfianza estructural hacia los medios.

El Gobierno de la Ciudad de México presenta un comportamiento menos lineal en su evaluación de confianza. La población adulta registra la confianza más alta (42.5 %), seguida por la universidad pública crítica (37.5 %), en tanto que los demás grupos se sitúan alrededor de 31-32 %, con excepción de la privada de élite, donde sólo 23.8 % de su estudiantado le otorga confianza. Este patrón sugiere una mayor afinidad o familiaridad política entre la población adulta y el gobierno local, mientras que los grupos con mayores niveles educativos (especialmente el de élite privada) se muestran más distantes o críticos.

Cabe destacar que los partidos políticos constituyen el punto de mayor consenso negativo en todos los segmentos, pues en ningún grupo superan 26 % de confianza. En conjunto, las instituciones representativas (gobierno local y partidos) se encuentran en posiciones débiles en términos de confianza atribuida, al mismo tiempo que las percibidas como técnicas, neutrales o menos ligadas al conflicto político (como el INE y, en menor medida, los medios) son merecedoras de una confianza más alta y diferenciada según el tipo de trayectoria educativa. En paralelo, la confianza interpersonal funciona como un factor común que compensa la erosión institucional.

3.2.3.8. Autoeficacia externa

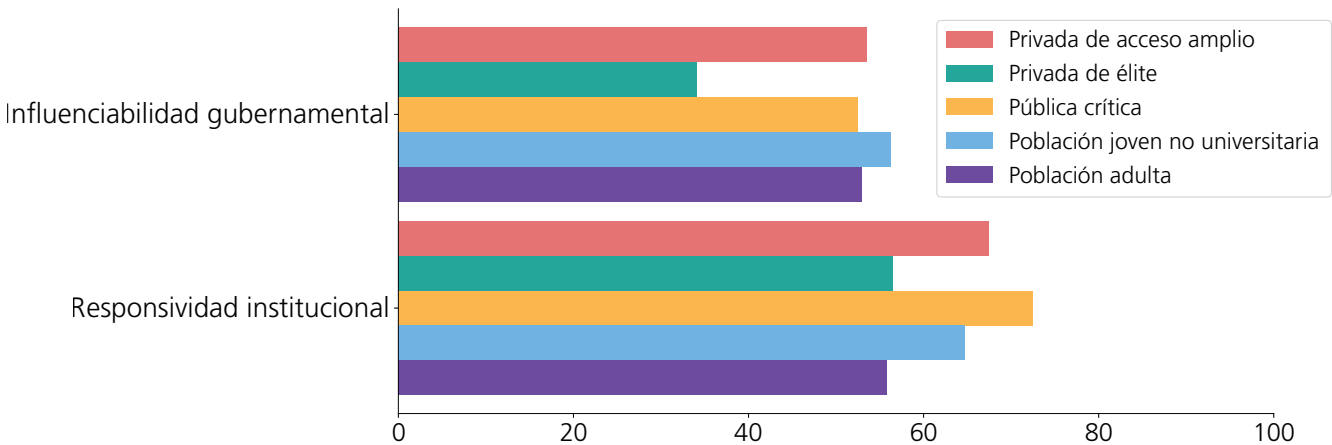
La autoeficacia externa remite a la percepción de que la acción propia puede activar algo fuera de uno mismo, que las autoridades se preocupan por lo que piensa la "gente como yo", que las decisiones de gobierno son sus-

ceptibles a la influencia de la ciudadanía y que el sistema institucional no es completamente sordo frente a la intervención individual.

3.2.3.9. Percepción de agencia y responsividad gubernamental

Para analizar este aspecto se utilizan dos reactivos de la EMCCJ que captan evaluaciones directas sobre la permeabilidad institucional. Uno indaga si se considera que la clase política muestra algún grado de atención hacia personas "como uno", y el otro explora la sensación de influencia subjetiva sobre las decisiones gubernamentales.

Gráfica 25. Percepción de ineficacia en incidencia y responsividad por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

En primera instancia, se observa una prevalencia relativamente alta de la sensación de responsividad institucional limitada en casi todos los grupos. En segunda, hay una variabilidad mayor en la percepción de baja influenciabilidad gubernamental, que introduce matices sobre cómo se experimenta la distancia con el sistema político en distintos enclaves sociales.

Dentro de la dimensión de responsividad, los porcentajes más altos se ubican entre quienes estudian en la universidad pública de tradición crítica (72.5 %) y en las privadas de acceso amplio (67.5 %), seguidos muy de cerca por la población joven no universitaria (64.7 %). Esto sugiere que, en estos entornos, predomina la lectura de que las élites políticas prestan escasa atención a la ciudadanía y que las opiniones de "gente común" difícilmente ingresan en los circuitos de toma de decisión.

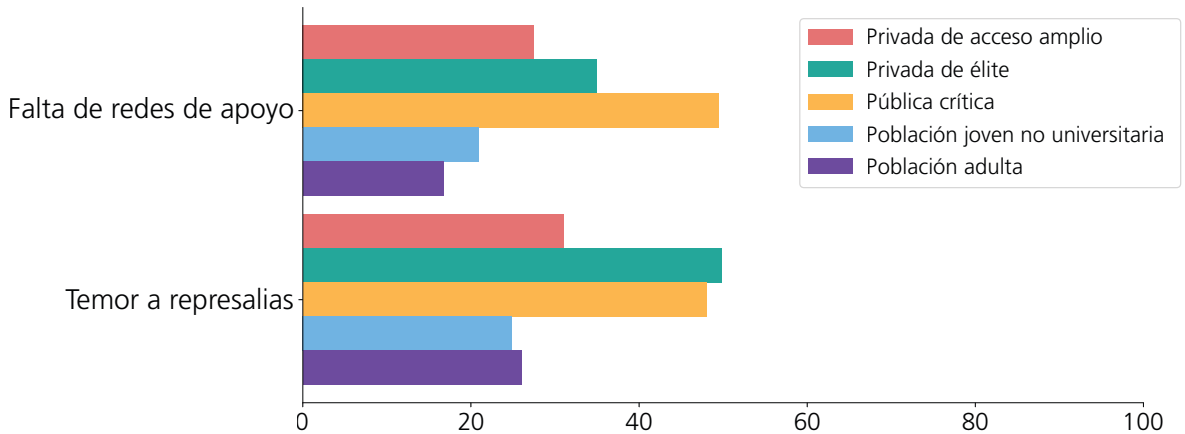
La segunda dimensión (percepción de baja influenciabilidad gubernamental) introduce contrastes más pronunciados al análisis. La población universitaria de élite privada registra el nivel más bajo (34.1 %), lo que la

convierte en el único grupo donde una mayoría no asume que carece completamente de capacidad de incidencia. Aquí parece operar un efecto de la posición social, ya que la pertenencia a espacios con mayor capital cultural y relacional atenúa la percepción de ineficacia política, incluso si persiste la crítica hacia la responsividad institucional.

3.2.3.10. Riesgo percibido y capital relacional como barreras políticas

Un segundo componente de la autoeficacia externa se vincula con las condiciones que rodean y pueden inhibir la acción política, incluso cuando existe capacidad subjetiva para intervenir. En este plano, destacan dos mecanismos estructurales de deshabilitación: *a)* la percepción del riesgo asociado a la participación (particularmente el temor a represalias o consecuencias negativas) y *b)* la evaluación de si se cuenta con redes y contactos suficientes para sostener una práctica política efectiva.

Gráfica 26. Limitantes externas percibidas para la participación política por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Los niveles más altos de temor a represalias por tener una participación política activa se concentran entre estudiantes de la universidad privada de élite (49.8 %) y de la universidad pública crítica (48 %). En estos espacios, la participación política suele tener una presencia cotidiana, adoptada con mayor explicitud y, con ello, una mayor visibilidad pública. La conciencia del costo reputacional, del escrutinio de sus pares y de las posibles consecuencias institucionales o interpersonales tiende a ser mayor, lo que amplifica la percepción de riesgo. Se trata, pues, de entornos donde la politización es más densa y la acción política tiende a ser performativa y sujeta a códigos normativos colectivos; es justo esa densidad

la que puede incrementar la sensación de vulnerabilidad ante un posible conflicto o sanción.

Entre la población joven no universitaria (24.9 %) y la población adulta (26 %), el temor a represalias es sensiblemente menor. Esto no refleja por fuerza un entorno más seguro, sino una posible distancia relativa respecto del campo político. La falta de redes de apoyo es una preocupación constante entre estudiantes de universidad pública crítica (49.5 %) y, en menor medida, de universidad privada de élite (35 %). En ambos casos, la paradoja es similar a la encontrada en el riesgo: los entornos más politizados tienden a generar percepciones más exigentes sobre lo que cuenta como red políticamente útil. En contraste, la población adulta (16.8 %) y la joven no universitaria (20.9 %) reportan los niveles más bajos en el mismo indicador.

Lo anterior adelanta que las barreras externas aumentan conforme la politización del entorno es más intensa, no al revés. Se trata de un hallazgo crucial, pues no son las personas menos involucradas quienes perciben más límites, sino quienes experimentan la política como un espacio cargado de normas internas, expectativas colectivas y mecanismos de escrutinio.

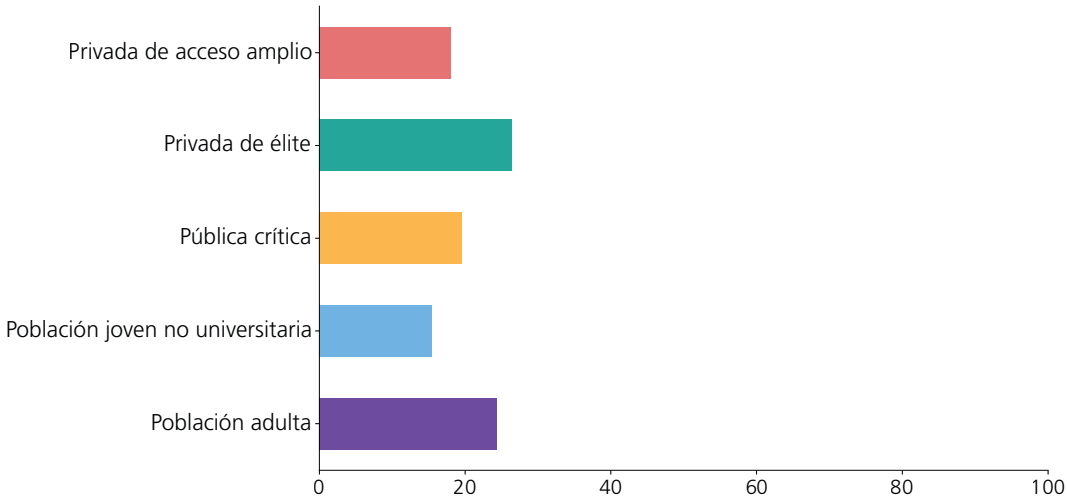
3.2.4. Dimensión de habilidades

El *saber hacer cívico* remite a un repertorio de capacidades prácticas vinculadas a la posibilidad de intervenir en la vida pública de manera mínimamente eficaz. En este segmento el énfasis recae en la autoeficacia declarada, es decir, en la medida en que las personas encuestadas consideran que disponen de las habilidades necesarias para ejecutar tareas básicas de acción cívica y política.

3.2.4.1. Autoeficacia en habilidades cívicas

La medición de las habilidades cívicas se concentra en la capacidad práctica que las personas se atribuyen a sí mismas para actuar políticamente. Para realizar dicha medición, se retoman seis reactivos de la Encuesta Multidimensional de Competencias Cívicas Juveniles, los cuales captan capacidades asociadas al saber hacer cívico, como informarse sobre asuntos públicos, comprender problemas políticos, expresar una postura, dialogar o debatir con otras personas, organizarse colectivamente y participar en acciones orientadas a incidir en el espacio público. Cada una de estas preguntas presenta las mismas categorías de respuesta ordinal: nada capaz, poco capaz, algo capaz, muy capaz y las opciones de no sabe/no contesta.

Gráfica 27. Autoeficacia declarada en habilidades cívicas por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La proporción de personas que se perciben con un repertorio pleno de saber hacer cívico es reducida en todos los segmentos analizados. Incluso entre el estudiantado de las universidades privadas de élite, que encabeza la distribución, menos de una tercera parte de la muestra declara contar con confianza práctica en todas las dimensiones consideradas. Esto implica que las personas que combinan organización, argumentación, expresión pública, contacto con autoridades, diseño de planes de acción y capacidad de escribir a medios constituyen un universo relativamente reducido.

Ahora bien, la cercanía entre la universidad privada de acceso amplio y la universidad pública crítica sugiere que, pese a sus diferencias institucionales y discursivas, ambos contextos presentan niveles similares de autoeficacia acumulada. En cambio, la distancia entre la población joven no universitaria y el alumnado de élite supera los 10 puntos porcentuales. Esta brecha apunta a una distribución desigual de oportunidades para desarrollar repertorios integrales de acción cívica, entendidos como la articulación de capacidades para transitar entre expresión pública, organización colectiva e interlocución institucional.

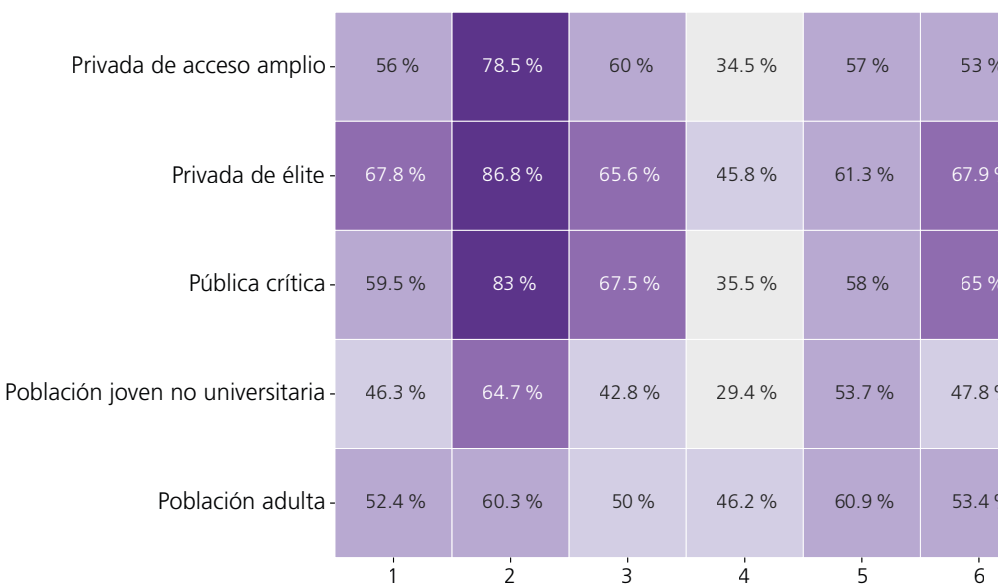
El lugar que ocupa la población adulta, cerca del segmento de privada de élite y por encima de los demás grupos, es consistente con la hipótesis de que la experiencia acumulada a lo largo del ciclo de vida puede compensar parcialmente las desigualdades educativas en la construcción de habilidades cívicas. Esto puede observarse, sobre todo, en tareas que demandan familiaridad con instituciones, resolución de problemas colectivos y contacto con autoridades.

Sin embargo, el hecho de que ningún grupo supere el umbral de 30 % muestra que los repertorios plenos de acción cívica son minoritarios en todos los segmentos. La mayoría puede autopercibirse competente en algunas dimensiones del saber hacer político, pero sólo una proporción reducida declara confianza práctica en el conjunto completo de habilidades consideradas. En términos descriptivos, los datos sugieren una ciudadanía con capacidades parciales, antes que repertorios integrales y ampliamente distribuidos de participación política.

Con el objeto de matizar esta imagen sintética y evitar que el indicador acumulativo oculte matices relevantes, es preciso observar la autoeficacia habilidad por habilidad. El siguiente paso del análisis consiste en desagregar la batería y estimar, para cada habilidad específica, la proporción de personas encuestadas dentro de cada grupo que se consideran algo o muy capaces en su realización.

Cada número en el eje inferior del gráfico corresponde a una capacidad distinta situada dentro del repertorio del saber hacer político: 1) capacidad de organizar una reunión, 2) convencer a otros sobre un tema de interés, 3) expresar opiniones políticas frente a un grupo, 4) contactar a una funcionaria o funcionario público sobre algún tema, 5) elaborar un plan de acción para resolver un problema comunitario y 6) escribir una carta o columna a un medio de comunicación.

Gráfica 28. Autoeficacia declarada en habilidades cívicas por tema y segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Quienes fueron encuestados se asumen, por lo general, como más competentes en registros de expresión interpersonal y argumentativa que en tareas que implican navegar la estructura institucional o asumir un rol de intermediación formal. La capacidad para organizar reuniones, elaborar planes de acción o escribir a medios se sitúa en una zona intermedia; éstas no se perciben como actividades poco realizables, pero tampoco alcanzan el mismo nivel de confianza declarada que la capacidad de persuadir o tomar la palabra ante otros.

Al observar los grupos, se perfila que las comunidades estudiantiles de universidades privadas de élite reportan los niveles más altos de autoeficacia en prácticamente todas las habilidades. Por su parte, el alumnado de universidades privadas de acceso amplio y de públicas críticas aparece en un segundo lugar.

El contraste se agudiza cuando se incorpora a las y los jóvenes no universitarios. Incluso en la habilidad donde todos los grupos se sienten más fuertes (convencer a otros), el valor se ubica cerca de 65 %, muy por debajo de los niveles observados en las universidades privadas y públicas.

La población adulta se ubica en una posición intermedia de la escala. Sus porcentajes son algo menores que los de cohortes universitarias, pero en varios rubros superan a las personas jóvenes no universitarias e incluso se acercan a los grupos estudiantiles de instituciones públicas y privadas de acceso amplio.

La evidencia presentada sobre autoeficacia a lo largo de este apartado revela una forma específica de segmentación de competencias. En términos de agencia, dibuja a una ciudadanía que se percibe fuerte en el registro expresivo y deliberativo, pero poco equipada para operar en el plano de la gestión, la negociación y el uso efectivo de canales institucionales. El hecho de que sólo una minoría logre articular las seis habilidades de manera más o menos consistente sugiere que el ideal normativo de un sujeto cívico plenamente competente está lejos de ser una condición generalizada. Por el contrario, lo que domina el panorama cívico es un repertorio parcial, donde las destrezas se concentran en ciertos tramos del ciclo de acción política y se debilitan en otros.

3.2.5. Dimensión participativa

El actuar cívico marca el momento analítico culminante en que las habilidades, conocimientos y percepciones descritas en segmentos previos se materializan. El objetivo principal de este apartado es describir cómo el conoci-

miento institucional, las disposiciones normativas y la autoeficacia declarada se encarnan en historias concretas de involucramiento en la vida pública.

3.2.5.1. Umbrales etarios de ingreso a la participación política

En la Encuesta Multidimensional de Competencias Cívicas Juveniles, el inicio de la participación política se registra a partir de la pregunta "¿A qué edad comenzaste a participar políticamente?", que admite respuestas numéricas y, de forma explícita, las categorías "Nunca he participado políticamente" y "No contesta". Este reactivo opera como variable escalar que ubica el primer involucramiento en asuntos públicos y, al mismo tiempo, sirve como un filtro que separa a quienes han vivido alguna experiencia política de quienes permanecen al margen por completo.

Tabla 1. Edad de incursión en la participación política por segmento sociodemográfico

	Media	Desviación estándar	Edad mínima registrada	Edad máxima registrada	Porcentaje que reporta su primera participación antes de los 18 años	Porcentaje que reporta nunca haber participado
Privada de acceso amplio	17.92	0.88	14	22	8.88	15.5
Privada de élite	17.78	1.44	10	21	12.98	36.77
Pública crítica	17.7	1.96	10	24	19.34	9
Población joven no universitaria	17.98	1.39	10	23	7.23	15.92
Población adulta	21.13	8.45	14	68	4.75	9.25

FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Entre los cuatro grupos de jóvenes, las medias oscilan en un rango estrecho, entre los 17 y los 18 años, con desviaciones estándar bajas que indican una distribución relativamente compacta, lo cual sugiere que, una vez que alguien cruza el umbral de la participación política, la mayoría de las trayectorias juveniles sitúan ese primer evento en el cierre de la adolescencia o el inicio de la adultez temprana, con muy poca variación entre tipos de universidad o condición de no universitario (cuando se considera sólo a quienes ya han participado de algún evento de esta naturaleza).

Dentro de este bloque juvenil, la universidad pública de tradición crítica concentra el porcentaje más alto de primeras participaciones antes de los 18 años. Por su parte, el estudiantado de las universidades privadas de élite sobresale por la combinación de dos rasgos no perceptibles en otros grupos: por un lado, quienes han participado lo han hecho en edades muy similares al resto de la juventud universitaria, por otro lado, más de un tercio declara no haber participado nunca en política. Esta división no se observa en la universidad pública crítica, donde el porcentaje de "nunca he participado" se queda en 9 %, tampoco en las privadas de acceso amplio, cuyo alumnado no particiaptivo se ubica en torno a 15 %, cerca de las cifras de inactividad política de las personas jóvenes no universitarias.

En el caso de la población adulta, la media de activación política inicial asciende a poco más de 21 años y la desviación estándar se expande de manera marcada, con un rango que se extiende hasta los 68 años. Este contraste sugiere que, aunque la entrada a la acción política pueda tardar más en algunos segmentos de la población adulta, el paso por alguna forma de participación a lo largo del ciclo de vida es más frecuente que en ciertos nichos juveniles.

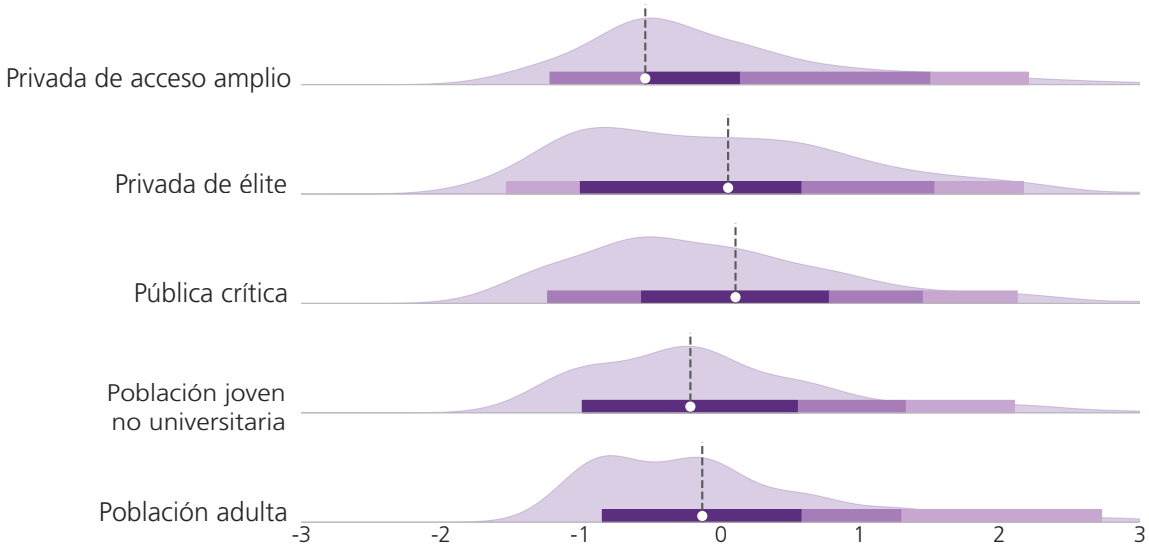
3.2.5.2. Trayectorias organizativas tempranas

Los antecedentes de involucramiento colectivo en etapas iniciales captan el conjunto de experiencias de participación previas a los 15 años que familiarizan a las personas con formas básicas de coordinación colectiva, pertenencia grupal y acción compartida. Más que detallar cada actividad por separado, el objetivo de este subapartado es registrar si, en la infancia y adolescencia temprana, las personas experimentaron oportunidades concretas de incorporarse a entornos organizativos donde se aprende a coordinarse con otros, asumir responsabilidades y participar en dinámicas colectivas básicas.

En la EMCCJ se contempla una batería específica para profundizar en estas trayectorias tempranas mediante preguntas dicotómicas (sí/no). El módulo indaga si las personas jóvenes participaron en diversos espacios formales y semiformales de organización, que abarcan agrupaciones comunitarias y de valores (como grupos de servicio, religiosos o ambientalistas), actividades escolares y recreativas estructuradas (equipos deportivos, cargos escolares, clubes de lectura o grupos de estudio) y colectivos culturales o artísticos.

El índice se estandarizó mediante *z-scores* dentro de cada grupo, convirtiendo la medida en una expresión relativa al contexto de oportunidades de cada subpoblación. Con esta transformación, los valores del índice pueden tomar cualquier número real: valores negativos indican un repertorio menor que el promedio de su grupo, valores cercanos a cero reflejan niveles típicos y valores positivos señalan repertorios relativamente amplios.

Gráfica 29. Distribución del índice de amplitud asociativa temprana por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Como puede observarse, el índice captura un patrón de fuerte asimetría: muchas trayectorias con poca participación temprana y pocas trayectorias con experiencias asociativas muy amplias. En la universidad privada de acceso amplio, la trayectoria típica antes de los 15 años incluye pocas actividades asociativas; además, las personas con experiencias ricas constituyen un subconjunto pequeño de estudiantes. La curva de densidad de la universidad privada de élite presenta un perfil distinto. En este enclave hay más estudiantes que acumulan experiencias diversas antes de los 15 años, y el repertorio típico es más diverso que en la privada de acceso amplio.

En la universidad pública de tradición crítica, la combinación de mediana positiva y rango intercuartílico amplio sugiere que la socialización asociativa antes de los 15 años incluye más de una esfera de participación. En cambio, la población joven no universitaria muestra un comportamiento intermedio, aunque desplazado hacia valores bajos. Esto significa que la mayoría ha tenido pocas experiencias asociativas antes de los 15 años y que las trayectorias muy amplias son excepcionales.

En la población adulta general, la distribución combina un núcleo central relativamente parecido al de los grupos con menor participación temprana con una cola positiva mucho más larga. Una lectura consistente es que, entre las personas adultas, hay una minoría con trayectorias asociativas muy intensas en la infancia y adolescencia, mientras que la mayoría presenta repertorios similares a los de las personas jóvenes no universitarias o a las comunidades estudiantiles de instituciones con menor oferta sistemática de actividades extracurriculares.

El paso analítico posterior consiste en desagregar ese panorama general mostrado por el índice, a fin de observar a detalle las actividades específicas que lo componen. Para cada actividad se calculó, dentro de cada grupo social, el porcentaje de personas que declaró haber participado antes de los 15 años. Cada columna numérica del gráfico corresponde a una actividad concreta, organizada en tres bloques:

Escolar-recreativa (columnas 1-4)

1. Equipos deportivos
2. Cargos escolares de responsabilidad
3. Clubes de lectura o recreación
4. Grupos estudiantiles de materias

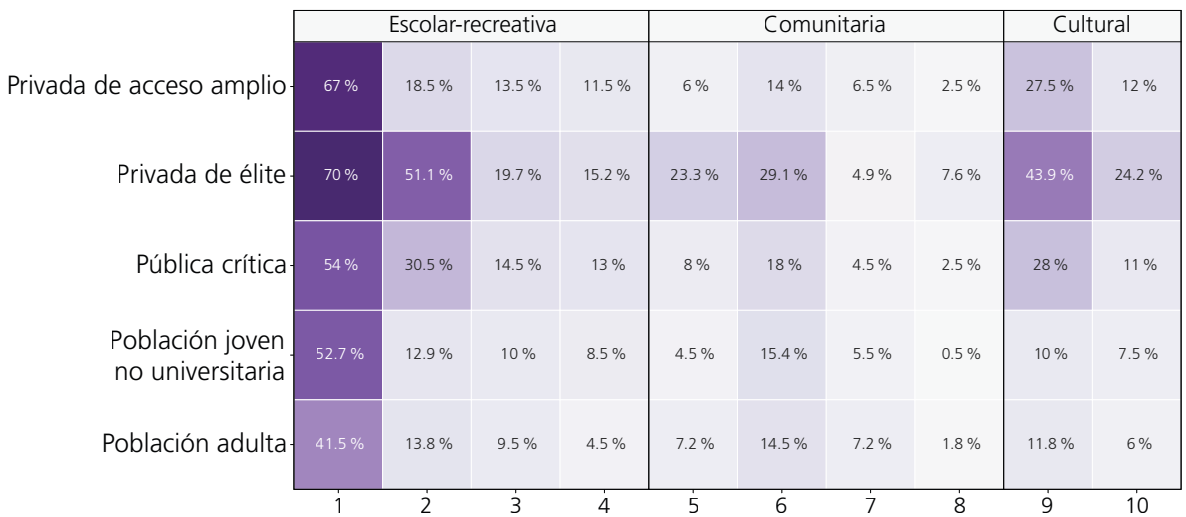
Comunitaria (columnas 5-8)

5. Actividades de ayuda social o comunitaria
6. Grupos religiosos
7. Agrupaciones de tipo *boy scouts*
8. Grupos ambientalistas

Cultural (columnas 9-10)

9. Agrupaciones culturales o artísticas
10. Estudiantinas o grupos de canto

Gráfica 30. Participación asociativa temprana por tipo de actividad y segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

En el mapa anterior, la universidad privada de élite aparece sistemáticamente como el grupo con mayores porcentajes de respuesta afirmativa en

casi todos los ítems, con un promedio general cercano a 29 %. Le siguen las universidades pública crítica y la privada de acceso amplio en un rango intermedio alrededor de 18 %, mientras que las personas no universitarias y la población adulta se sitúan en la franja baja, en torno a 13 y 12 %. Ello indica que la experiencia universitaria, en particular en instituciones de élite, se asocia a trayectorias de participación más densas a lo largo de los primersos años de vida, y que la simple pertenencia a una cohorte joven sin universidad no produce el mismo patrón.

En conjunto, el bloque escolar sugiere una trayectoria de involucramiento estructurado más marcada entre las alumnas y los alumnos de las universidades de élite (con un promedio cercano a 39 %), intermedia en la pública crítica y la privada de acceso amplio (en torno a 28 %) y claramente más limitada entre quienes no tuvieron paso por la universidad y la población adulta (alrededor de 21 y 17 %).

La dimensión comunitaria (columnas 5 a 8) presenta un perfil donde, en general, los porcentajes son más bajos y, salvo en el caso de las escuelas de élite, las diferencias entre grupos son menos pronunciadas. En este rubro, el grupo de escuelas de élite aparece sobreexpuesto a experiencias de *servicio* que suelen formar parte del currículum explícito u oculto de ciertas instituciones. Al observar los cuatro ítems de este conjunto, la dimensión comunitaria muestra una estratificación menos marcada que la escolar, con un promedio general que sólo en el caso de la élite está por arriba de 16 %, mientras que los demás grupos se mantienen en un rango muy semejante, entre 6 y 8 %. Esto sugiere que la acción comunitaria organizada, salvo cuando forma parte de la oferta institucional, no constituye un rasgo distintivo de las trayectorias de la mayoría.

La dimensión cultural (columnas 9 y 10) vuelve a mostrar brechas intergrupales considerables. Cuando se agrupan todas las actividades de la dimensión cultural, la élite alcanza promedios por encima de 34 %, la pública crítica y la privada de acceso amplio se sitúan alrededor de 20 % y los dos grupos sin trayectoria universitaria apenas rozan 9 %. En términos de socialización, esto indica que el acceso a espacios de producción cultural no sólo es más frecuente entre grupos universitarios, sino que constituye un rasgo fuertemente distintivo de las trayectorias de élite.

Viendo la imagen a mayor distancia, la matrícula de unverisidades privadas de élite se ubica en la parte alta del gradiente de actividades; este alumnado combina altos niveles de involucramiento en actividades escolares, comunitarias y culturales, con puntos particularmente fuertes en liderazgo escolar, servicio comunitario institucionalizado y expresiones culturales organizadas. Los otros enclaves universitarios parecen compartir un perfil afín, aunque menos intenso. Sus estudiantes tienen más probabilidad que el resto de haber formado parte de equipos, grupos académicos y colectivos

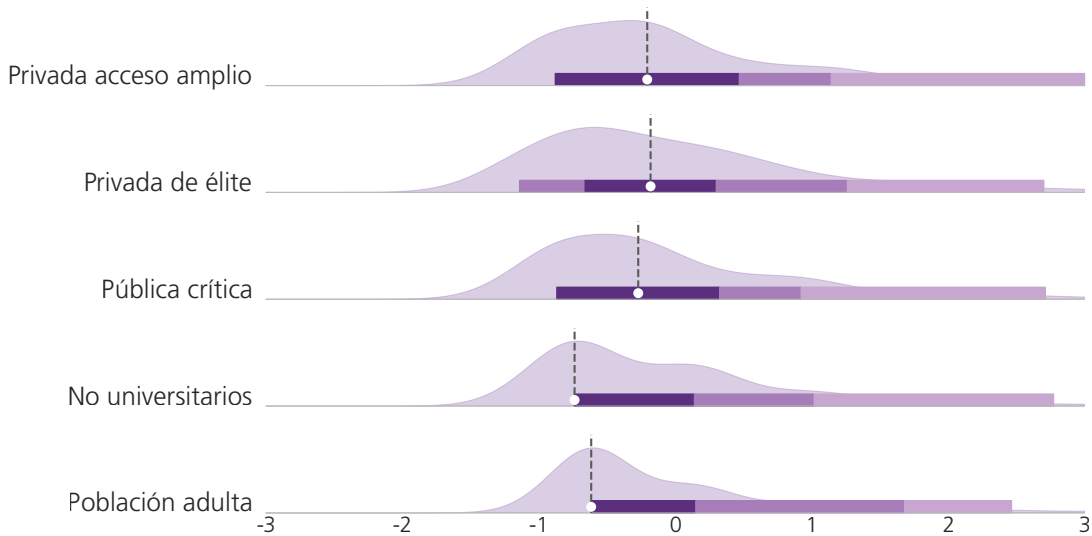
artísticos, pero exhiben niveles más bajos de exposición a experiencias de liderazgo y servicio que los de élite. En el extremo inferior, tanto las y los jóvenes no universitarios como la población adulta muestran trayectorias participativas más escuetas, con valores que rara vez superan 15 %, salvo en el caso del deporte temprano y algunos rasgos de la dimensión religiosa, lo que sugiere un patrón de socialización más ligado a experiencias informales que a experiencias institucionalizadas.

3.2.5.3. Exposición organizativa reciente

En la EMCCJ, hay una batería de ítems dicotómicos que remiten de manera explícita a los últimos 12 para indagar si las y los jóvenes han participado en una variedad de espacios organizados. En primer lugar, la batería incluye de nueva cuenta distintos ámbitos de participación escolar donde caben desde la práctica deportiva formal y los grupos culturales o artísticos hasta asociaciones estudiantiles y clubes de lectura o de fans; en segundo término, espacios comunitarios y de servicio, como actividades de ayuda social, grupos religiosos, iniciativas ecológicas, comités de vigilancia o agrupaciones barriales; en tercer y último lugar, formas más directamente asociadas a la acción colectiva contenciosa, como manifestaciones, protestas, campañas políticas o participación en agrupaciones políticas.

A partir de la batería correspondiente, se construyó un índice que resume la amplitud de la exposición organizativa actual, definido como el recuento de ámbitos en los que cada persona declaró haber participado.

Gráfica 31. Distribución del índice de amplitud asociativa reciente por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

El índice está centrado en cero para cada grupo, de modo que los valores negativos indican repertorios por debajo del promedio del propio segmento. Bajo esa lógica, las medianas negativas en los cinco casos muestran que más de la mitad de las personas (sin importar el segmento) se ubican por debajo del nivel medio de participación de su propio entorno.

Se puede decir que el alumnado universitario se desliza entre la inactividad y la movilización muy moderada en el úlitmo año. La situación es distinta entre los grupos no universitarios en los que lo normal es haber hecho poco o muy poco en materia organizativa en los últimos 12 meses, y el promedio del grupo se sostiene gracias a una minoría relativamente pequeña que acumula muchas actividades.

El siguiente paso de este análisis se apoya en la batería completa de ítems reorganizada en tres conjuntos sustantivos, que permiten comparar con mayor claridad los perfiles de cada grupo. El gráfico correspondiente utiliza sólo las respuestas afirmativas, de tal forma que para cada actividad se calcula, dentro de cada grupo social, el porcentaje de quienes declararon haber participado en esa práctica durante los últimos 12 meses. Las categorías (y sus respectivos números referentes en la gráfica) son:

Escolar-recreativa (columnas 1-5)

1. Deportes
2. Grupos culturales/artísticos
3. Asociaciones estudiantiles
4. Clubes de lectura/recreación
5. Clubes de fans

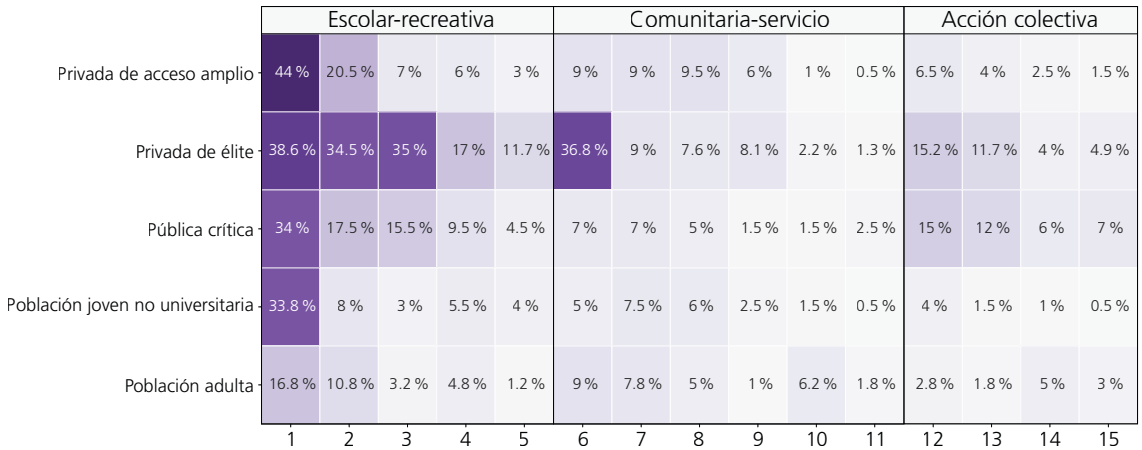
Comunitaria-servicio (columnas 6-11)

6. Ayuda social
7. Grupos religiosos
8. Cuidado animal
9. Ecologistas
10. Comité de vigilancia
11. Agrupaciones barriales

Acción colectiva (columnas 12-15)

12. Manifestaciones/performances
13. Protestas/tomas
14. Campañas políticas/redes
15. Agrupaciones políticas

Gráfica 32. Participación asociativa reciente por tipo de actividad y segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Los datos reportan que en el bloque de actividad escolar-recreativa (columnas 1-5), el deporte organizado (columna 1) es la experiencia más extendida entre todos los grupos. A partir de la columna 2, el mapa empieza a discriminar entre grupos con más intensidad. La matrícula de universidad privada de élite destaca por su participación en grupos culturales/artísticos (34.5 %) y, sobre todo, en asociaciones estudiantiles (35 %), donde duplica o triplica a los demás grupos. Por su parte, el alumnado de escuelas privadas de acceso amplio y instituciones públicas críticas muestra una presencia relevante, pero menor, mientras que las personas jóvenes no universitarias y la población adulta casi desaparecen de estas celdas. Por otro lado, la participación en clubes de lectura y recreación (columna 4) sigue una lógica parecida, pero con niveles generales más bajos.

En el bloque comunitario-servicio (columnas 6-11), la celda más oscura se ubica en la intersección entre la universidad privada de élite y la ayuda social. Este alto valor sugiere que, en el circuito de las universidades de élite, la ayuda social funciona como un componente estructural de la experiencia organizativa reciente, probablemente articulado con la oferta institucional, mientras que en los otros grupos aparece como práctica minoritaria u ocasional.

El segmento analítico denominado de acción colectiva (columnas 12-15) reporta una estratificación marcada. La participación en manifestaciones o performances públicos (columna 12) se concentra claramente en los entornos universitarios. Las campañas políticas y redes (columna 14) así como la pertenencia a agrupaciones políticas (columna 15) replican este tejido. Los focos de color más intenso dentro de esos rubros se ubican

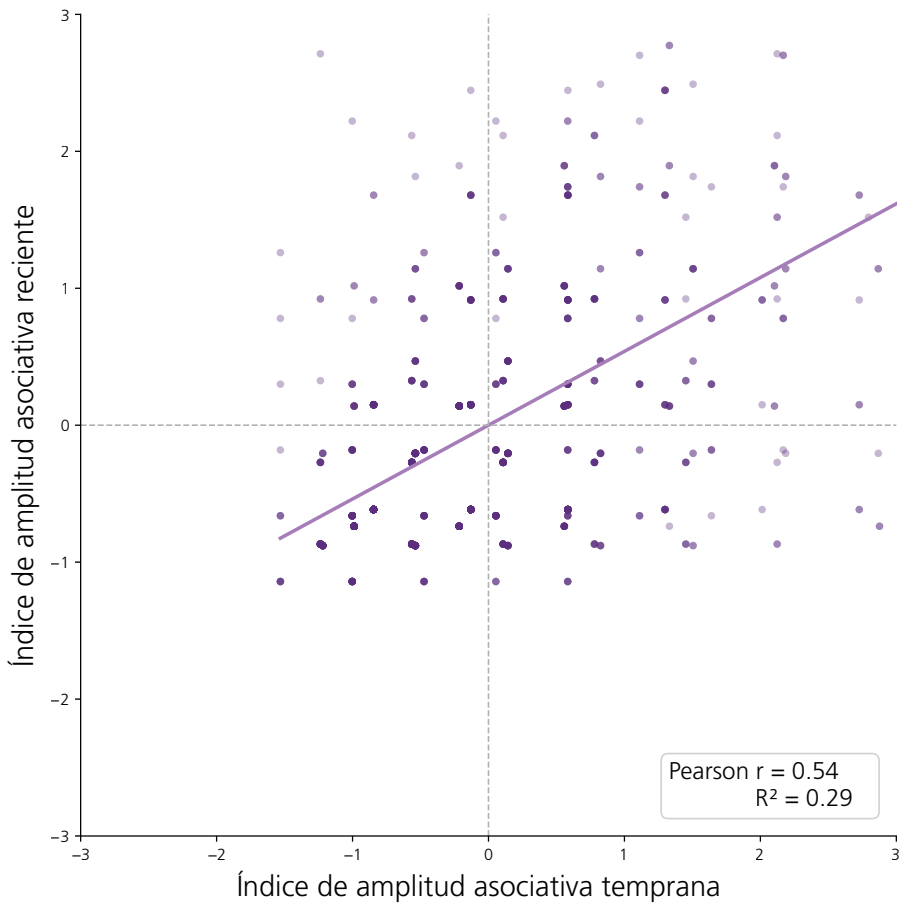
entre alumnas y alumnos de la universidad pública crítica y las privadas de élite, seguidos a distancia por las privadas de acceso amplio, mientras que los otros dos grupos no universitarios (jóvenes y adultos) casi no aparecen. La acción colectiva contenciosa y la militancia política organizada son, así, prácticas que se concentran con fuerza en el campo universitario, sobre todo en los espacios de élite y en la universidad pública crítica; fuera de esos circuitos, la política organizada apunta hacia formas mucho más esporádicas.

Leídos los tres bloques en conjunto se traza un panorama en el cual la experiencia organizativa se articula por capas. En la base (relativamente extendida) se encuentran las actividades deportivas y algunos espacios recreativos escolares. Ahí participan la mayoría de las personas jóvenes, universitarias y no universitarias, con una presencia secundaria de población adulta. La vida universitaria añade capas de organización cultural, asociación estudiantil y ayuda social que son poco accesibles al resto de los grupos. En la cúspide, la acción colectiva contenciosa y la militancia política aparecen como repertorios fuertemente selectivos, casi monopolizados por ciertos segmentos universitarios. Desde esta lógica, el color más intenso del mapa no sólo indica más participación, sino un tipo particular de ecosistema organizativo que combina deporte, cultura, servicio y política en la vida cotidiana de una minoría; frente a ella, amplios sectores juveniles y adultos mantienen formas mucho más acotadas de involucramiento, con escaso acceso a los espacios donde se aprenden y ejercen competencias organizativas de mayor densidad.

Cuando se ponen en diálogo las trayectorias organizativas antes de los 15 años con la participación del último año, sobresale una tensión entre una marcada estratificación social temprana y niveles recientes de asociación bajos a nivel global. Las universidades del sector público y privado de élite concentran a quienes acumularon repertorios más sólidos de participación en su infancia y adolescencia, es decir, el capital organizativo está fuertemente sesgado hacia quienes hoy ocupan entornos escolares.

El índice asociativo de actividades del último año muestra que, ya en la vida reciente, casi todos los grupos se aplanan hacia la baja. El análisis de asociación entre ambos índices permite precisar hasta qué punto esa impronta temprana se proyecta sobre el presente. En términos prácticos, cuanto más amplio es el repertorio de actividades organizadas antes de los 15 años, más probable es que la persona tenga hoy una participación organizativa relativamente alta, como puede observarse en la gráfica 33.

Gráfica 33. Relación entre amplitud asociativa temprana y reciente



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

El contraste más sugerente emerge entre alumnos y alumnas de escuelas privadas de acceso amplio. En la etapa temprana, este grupo se parece más a la población joven no universitaria que a los otros enclaves universitarios, pues comparten medianas negativas, trayectorias cortas, poca exposición sistemática a cargos, clubes o actividades culturales organizadas. Sin embargo, en el último año su comportamiento no se limita a reproducir ese perfil. A pesar de que su mediana asociativa sigue siendo baja, emergen núcleos relevantes de participación reciente en deportes, algunas asociaciones y, en menor medida, en acción colectiva. Dicho de otro modo, la universidad de acceso amplio funciona como espacio de *segunda oportunidad* organizativa para parte de su alumnado. Si bien no corrige de raíz la desigualdad heredada de la infancia, sí es evidente que abre ventanas para que personas jóvenes con biografías asociativas más pobres puedan ampliar en cierta medida su repertorio organizativo en la transición a la adultez.

Las personas jóvenes no universitarias se encuentran en el extremo opuesto, ya que la brecha entre su trayectoria previa a los 15 años y su presente parece más estrecha, pero en un sentido regresivo. Estos jóvenes parten de trayectorias asociativas más bien modestas y el último año consolida esa baja densidad. Sus niveles de participación en actividades escolares-recreativas organizadas caen naturalmente al ya no estar en la escuela, pero el sistema no ofrece equivalentes comunitarios o laborales que los sustituyan.

La población adulta introduce un matiz generacional importante. En la infancia, su perfil se parece al de los grupos con menor participación temprana, pero con una minoría que tuvo trayectorias asociativas muy intensas. En el último año, algo parecido vuelve a ocurrir, pues el patrón típico en esta muestra es de baja participación. Así, más que un *efecto de generación*, lo que se observa son carreras organizativas largas de minorías concretas en medio de una base amplia de baja implicación.

La conclusión apunta, por un lado, a que la socialización asociativa temprana importa. Quienes crecieron en entornos educativos densos en oferta organizativa tienen más probabilidades de seguir encontrando espacios para activarse. En el agregado, tanto antes de los 15 años como en el último año, el sistema produce un patrón parecido con una mayoría de personas que cuenta con repertorios acotados y una minoría que acumula experiencias organizativas diversas. Lo que cambia entre ambas etapas no es tanto la existencia de esa minoría, sino dónde está localizada y qué instituciones le permiten mantenerse activa.

3.2.5.4. Repertorios autodeclarados de acción política

Este bloque registra las acciones políticas que han realizado efectivamente las personas y con qué frecuencia lo han hecho. Se trata, pues, de identificar la realización declarada de actividades que dejan huella en el espacio público, como intervenir en procesos institucionales, participar en espacios colectivos, movilizarse, incidir o comunicar posiciones en distintos entornos.

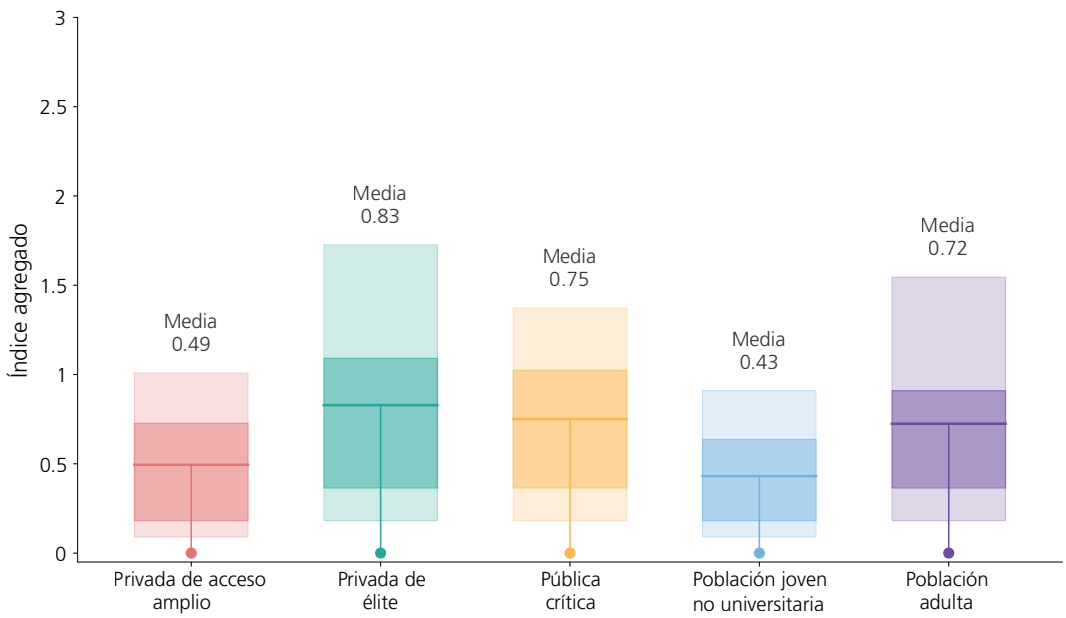
Para medir este componente dimensional, se emplea la batería específica de 11 reactivos incluida en la EMCCJ.

1. ¿Con qué frecuencia has votado en las elecciones?
2. ¿Con qué frecuencia has intentado convencer a otros de votar por algún partido o candidato?
3. ¿Con qué frecuencia has firmado una petición en línea o en papel?
4. ¿Con qué frecuencia has participado en una manifestación o marcha?
5. ¿Con qué frecuencia has hecho un boicot a productos por razones políticas o éticas?

6. ¿Con qué frecuencia has hecho trabajo voluntario para alguna organización?
7. ¿Con qué frecuencia has participado en asociaciones estudiantiles?
8. ¿Con qué frecuencia has participado en organizaciones comunitarias o vecinales?
9. ¿Con qué frecuencia has compartido opiniones políticas en redes sociales?
10. ¿Con qué frecuencia has usado *hashtags* para apoyar causas sociales o políticas?
11. ¿Con qué frecuencia has contactado a políticos o periodistas por redes sociales?

Para hacerlas comparables, todas las respuestas se recodificaron en una escala 0-3, en la que 0 = nunca, 1 = de una a dos veces, 2 = algunas veces y 3 = frecuentemente; mientras que las no respuestas se trataron como valores perdidos.

Gráfica 34. Distribución del índice de repertorios de acción política por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

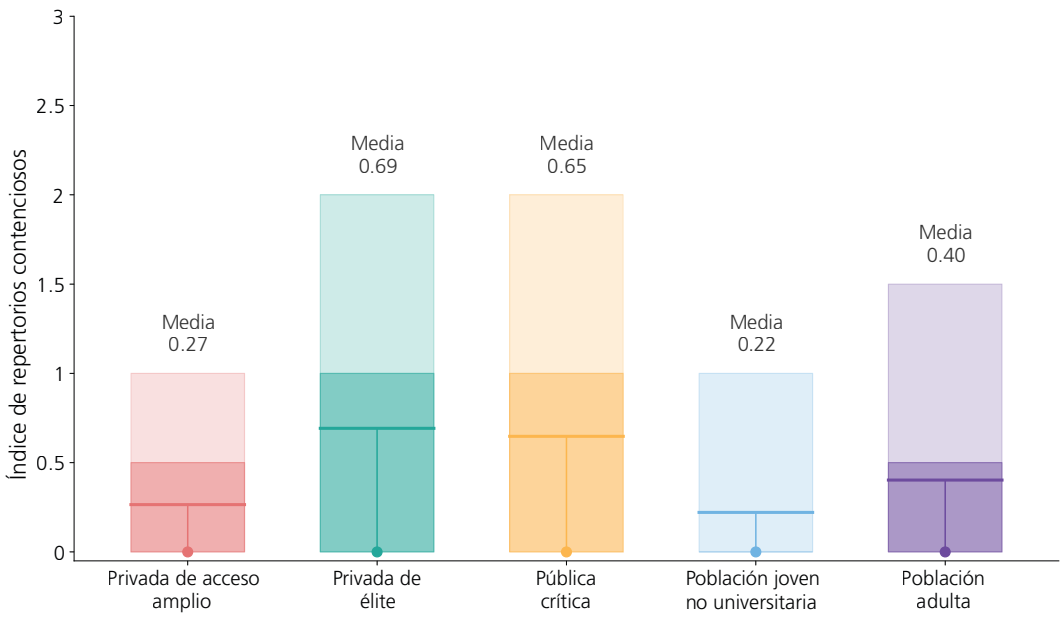
Las medias del índice global se sitúan en niveles relativamente bajos en toda la muestra, lo que indica que, incluso cuando se promedia la experiencia práctica acumulada, los repertorios tienden a ser acotados en la escala de 0 a 3. Los niveles promedio más bajos corresponden a dos grupos: las personas jóvenes no universitarias (0.43) y las comunidades estudiantiles de

instituciones privadas de acceso amplio (0.49). La mayoría de quienes están en estos segmentos se mantienen en valores bajos y sólo una fracción minoritaria se desplaza hacia niveles medios del índice.

En un nivel intermedio aparece el grupo de contraste (población adulta en general), con una media de 0.72. Su intervalo intercuartílico es más amplio que el de los grupos anteriores, lo que implica una mayor dispersión interna.

En la parte (comparativamente) alta del índice se ubican dos grupos: estudiantes de universidad privada de élite y de universidad pública de tradición crítica, con medias de 0.83 y 0.75, respectivamente.

Gráfica 35. Distribución del índice de repertorios contenciosos por segmento sociodemográfico



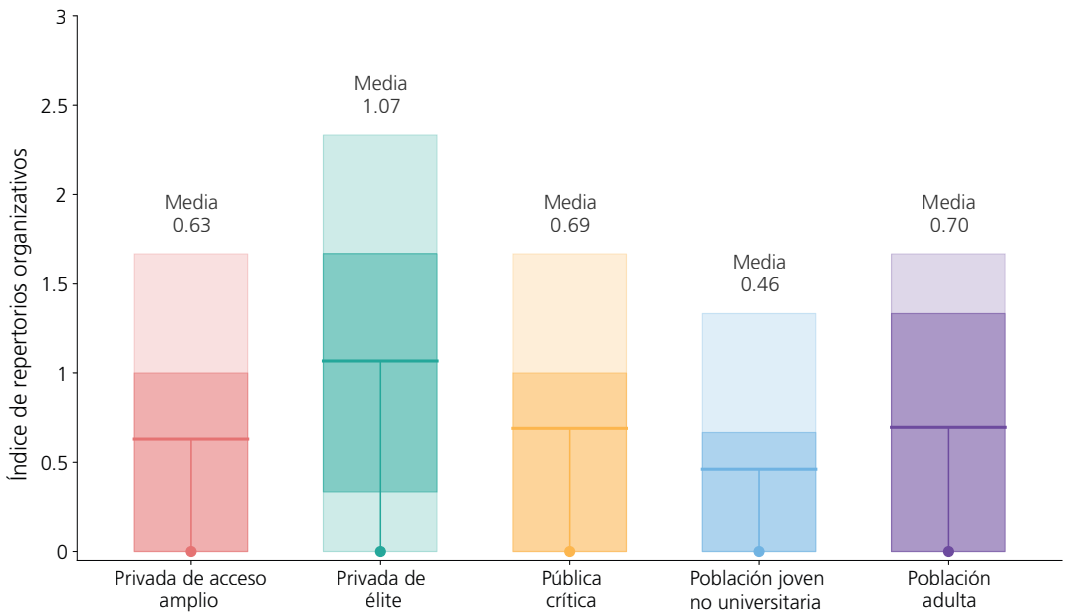
FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Los datos del índice de repertorios contenciosos reportan niveles notablemente bajos en toda la muestra. Incluso al emplear la media (una medida más sensible que la mediana para distribuciones con alta concentración en ceros), se confirma que, en promedio, las experiencias vinculadas con acciones disruptivas, confrontativas o de protesta formalizada son poco frecuentes entre las personas encuestadas. Este bajo punto de partida establece que el activismo contencioso no constituye una práctica extendida, sino más bien excepcional entre la población.

Dentro de ese escenario de baja intensidad, las diferencias entre grupos sugieren que las personas jóvenes no universitarias son las menos activas

(media de 0.22), seguidas por los grupos estudiantiles de universidades privadas de acceso amplio (0.27). Por su parte, el grupo de población adulta general alcanza un nivel medio más elevado (0.40), con una dispersión sustantivamente mayor. Este patrón anticipa la importancia de factores acumulativos (trayectorias vitales, exposición prolongada a conflictos públicos, inserción laboral y comunitaria) que no operan del mismo modo entre los segmentos juveniles. En el extremo superior se ubican dos grupos universitarios con perfiles organizativos más densos, lo cual apunta a que, en estos entornos, coexisten estudiantes con participación reiterada en acciones contenciosas junto con otros con repertorios puntuales o esporádicos, pero en conjunto operan con un piso significativamente más elevado que cualquier otro grupo.

Gráfica 36. Distribución del índice de repertorios organizativos por segmento sociodemográfico



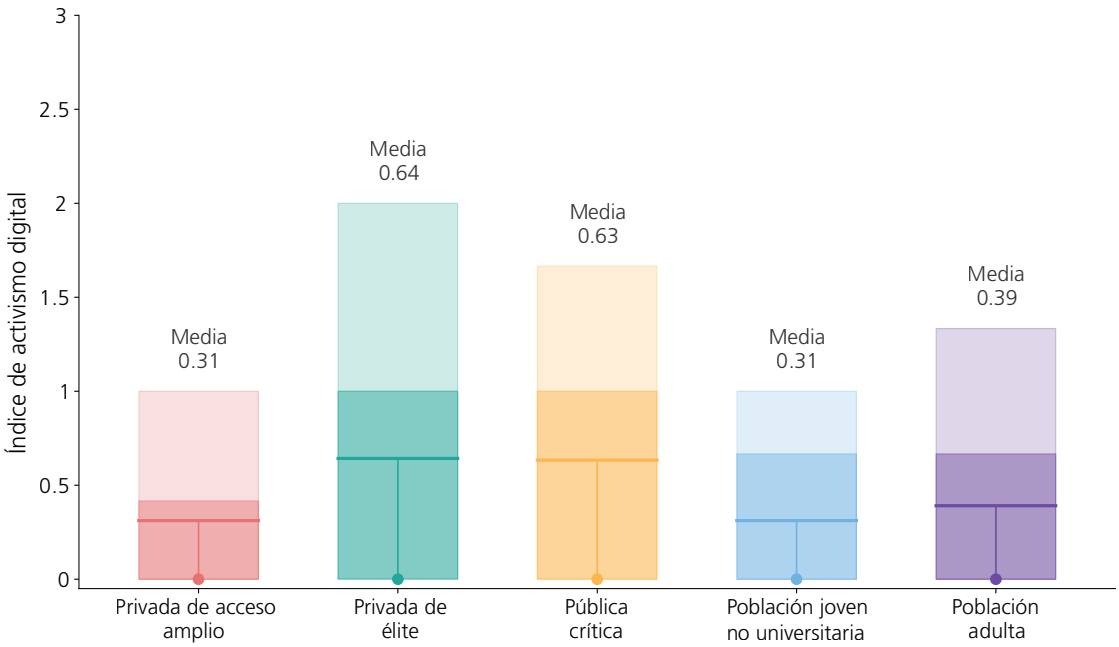
FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Los repertorios organizativos (participación estructurada, membresías, coordinación o actividades colectivas estables) se distribuyen en niveles discretos en la mayor parte de la muestra, pero el promedio más reducido corresponde a la población joven no universitaria (0.46). Posteriormente, emerge un conjunto de grupos con niveles organizativos similares entre sí: la población adulta general (0.70), el alumnado de instituciones privadas de acceso amplio (0.63) y el de universidades públicas críticas (0.69). Aunque sus medias son mayores que las del segmento no universitario, la estructura

interna mantiene heterogeneidad acotada. Esto sugiere un patrón de participación organizativa donde la exposición a estructuras formales no es inusual, pero tampoco constituye el centro de la experiencia política de estos grupos.

El caso más destacado es el de la universidad privada de élite globalizada, con una media claramente superior (1.07), que supera a los segmentos intermedios por una diferencia de 0.35 a 0.40 puntos.

Gráfica 37. Distribución del índice de activismo digital por segmento sociodemográfico



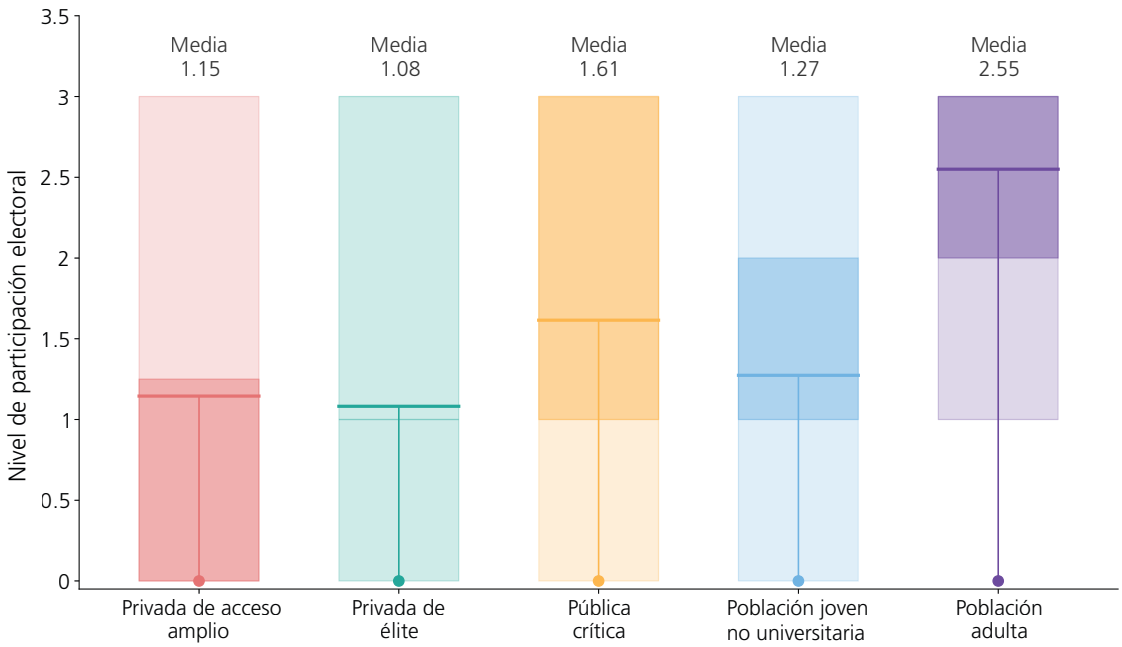
FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

Al observar este índice se revela que las prácticas digitales orientadas a la acción política se encuentran poco extendidas entre los distintos segmentos sociodemográficos considerados. En la parte inferior de la distribución aparecen las personas jóvenes no universitarias (0.31) y el alumnado de universidades privadas de acceso amplio (0.31). Ambos grupos muestran medias casi idénticas y una dispersión relativamente contenida, lo que indica que el activismo digital es escaso y homogéneo en ambos grupos. La mayoría de las personas jóvenes en estos segmentos se mantiene en valores bajos, y aunque existen casos con mayor actividad, éstos no alcanzan a modificar de manera sustantiva el promedio. La población adulta en general exhibe un nivel un poco superior (0.39), pero también dentro de un rango modesto.

En el extremo comparativamente alto de la escala aparecen de nuevo dos grupos estudiantiles: *a)* la universidad privada de élite (0.64) y *b)* la uni-

versidad pública de tradición crítica (0.63). En términos de media, sus niveles de activismo digital son muy similares y claramente superiores al resto de los segmentos. Con estos resultados, se confirma que el activismo digital constituye una práctica minoritaria en la muestra, pero con focos relevantes en los entornos universitarios con mayor capital organizativo o cultural. Incluso los grupos con niveles más altos tienen medias modestas y distribuciones amplias, lo cual sugiere que el activismo digital no es un repertorio consolidado, sino una práctica adoptada por subgrupos específicos dentro de cada segmento.

Gráfica 38. Distribución del nivel de participación electoral por segmento sociodemográfico



FUENTE: Elaboración propia con base en la EMCCJ.

La participación electoral emerge como la práctica política con las medias más altas de toda la batería de repertorios analizados. Esto sugiere que, en contraste con otros repertorios (acaso más exigentes en términos de organización, exposición o agencia política), el acto de votar constituye la forma más extendida, transversal y socialmente normalizada de involucramiento político en la muestra.

El nivel más alto corresponde a la población adulta, con una media de 2.55, muy por encima del resto de los segmentos. Esta diferencia pronunciada indica que, en promedio, las personas adultas han participado en más procesos electorales, lo que puede interpretarse como una mayor familiari-

dad con el sistema político, más estabilidad en sus trayectorias cívicas o mejor interiorización de la participación electoral como una práctica rutinaria. En contraste, todos los grupos jóvenes (universitarios o no) presentan niveles mucho más bajos, lo que refleja una brecha generacional consistente. El voto, como práctica acumulada en el tiempo, se expresa con diferencias marcadas entre cohortes etarias.

Entre los segmentos universitarios, la institución pública de tradición crítica registra la media más alta (1.61), significativamente por encima de las instituciones privadas. En cambio, llama la atención que la universidad privada de élite, que en otros índices aparecía de forma consistente entre los niveles más altos de involucramiento, registra aquí el valor más bajo de todos los segmentos universitarios (1.08). Esta inversión del patrón puede significar que los repertorios electorales no por fuerza siguen la misma lógica que los repertorios contenciosos u organizativos. Las comunidades estudiantiles de universidades de élite parecen acumular menos experiencias electorales, quizá porque sus trayectorias se encuentran menos vinculadas a dinámicas territoriales, o bien porque su repertorio político es más afín a prácticas no orientadas a instituciones nacionales (como activismo transnacional, causas de campus o participación digital). El grupo de universidades privadas de acceso amplio se sitúa en un nivel similar (1.15), lo que indica que, dentro del sector privado, la participación electoral no se distingue sustantivamente. Ambos segmentos exhiben promedios moderados y muy por debajo de la población adulta.

Por último, las personas jóvenes no universitarias presentan una media de 1.27 que, si bien supera la de los segmentos privados, sigue el patrón de estar por debajo del sector público crítico. Su posición intermedia es coherente con patrones generacionales más que institucionales, pues la edad parece ser el determinante principal, mientras que las diferencias por pertenencia universitaria actúan como moderadores adicionales.[32]

El patrón revela que, aun cuando los repertorios juveniles se diversifican hacia prácticas digitales, contenciosas u organizativas, la participación electoral continúa siendo la práctica política que se diferencia con más intensidad por edad y contexto formativo.

[32] La prueba ANOVA muestra diferencias altamente significativas entre los grupos ($F = 136.6$, $p < 0.0001$), lo que confirma que estos contrastes no responden al azar. El tamaño de las diferencias (en especial las que separan a la población adulta del resto de los grupos juveniles) evidencia que la participación electoral es el repertorio más sensible a ciclos vitales, exposición acumulada al sistema político y socialización cívica prolongada.

4. Resultados cualitativos: mapas formativos y repertorios cívicos de la juventud en la Ciudad de México

4.1. De la pregunta general al lugar de la fase cualitativa

El presente proyecto de investigación no busca respuestas simples ni tipologías rígidas consistentes en *jóvenes competentes* versus *jóvenes incompetentes*, sino que se orienta a capturar la complejidad situada de las prácticas cívicas juveniles en contextos urbanos contemporáneos.

El diseño metodológico del proyecto combina un componente cuantitativo-estructurado con uno cualitativo-interpretativo, reconociendo que cada aproximación arroja luces distintas sobre el fenómeno estudiado. La fase cualitativa, conformada por siete grupos focales, busca comprender los procesos y significados que subyacen a las distribuciones observadas en el componente cuantitativo. Su propósito no es únicamente recabar opiniones individuales, sino observar cómo se despliegan las competencias en situaciones de discusión efectiva y deliberación entre pares. Se trata de documentar cuáles recursos cognitivos y afectivos se activan frente al disenso y la polarización, qué papel juegan las experiencias escolares previas en la configuración de repertorios argumentativos y cómo los ecosistemas digitales de información permean y estructuran las formas en que las personas jóvenes se relacionan con lo político.[33]

Los grupos focales se diseñaron como espacios de deliberación estructurada entre pares; se trata de un ejercicio basado en una guía de tópicos y un manual de moderación que organizan la conversación en bloques encadenados. En cada sesión se articularon al menos cinco bloques temáticos concatenados. El primer bloque explora la centralidad de la política en la vida cotidiana y la percepción sobre la propia capacidad de incidir en

[33] Jerome *et al., op. cit.*

asuntos públicos. El segundo aborda los repertorios de participación política y las actitudes hacia la desobediencia civil, introduciendo dilemas normativos que obligan a las personas participantes a justificar sus posiciones frente a distintas modalidades de protesta. El tercero se centra en el ecosistema informativo y en las prácticas de verificación que se despliegan ante contenidos potencialmente engañosos o polémicos. El cuarto ejercita el análisis de contenidos problemáticos, videos editados o noticias falsas, con el objetivo de observar *in situ* cómo se activan el pensamiento crítico y la verificación informacional. Por último, el quinto bloque, denominado hiperpolémico, plantea un dilema normativo intenso sobre reglas institucionales en las universidades, en específico sobre temas como la cancelación de oradores, la sanción a profesoras y profesores por sus opiniones o la exigencia de declaraciones ideológicas en procesos de contratación académica. Estos dilemas de gobernanza educativa que deben balancear principios en tensión son particularmente agudos en instituciones de educación superior que buscan, de manera simultánea, promover la libertad académica, garantizar el pluralismo ideológico y proteger a grupos vulnerados.[34]

En coherencia con la propuesta general del proyecto, el análisis se organiza en torno a cuatro tensiones estructurales que atraviesan el campo de las competencias cívicas y funcionan como ejes analíticos transversales. La primera tensión se refiere al carácter multidimensional y situado de las competencias cívicas, que no pueden reducirse a un rasgo individual estable, sino que se despliegan de manera diferenciada según los contextos institucionales, los vínculos afectivos en juego y las arquitecturas tecnológicas de los espacios de interacción. La segunda señala la estratificación social y formativa que genera una distribución desigual de esas competencias, esto en función de los climas institucionales, las trayectorias educativas y el capital, tanto cultural como económico, de las familias de origen. La tercera explora la relación compleja entre identidades morales fuertemente cargadas, polarización afectiva que estructura la percepción del otro político como amenaza y competencias deliberativas que permiten sostener conversaciones productivas pese al desacuerdo profundo. La cuarta y última tensión examina el papel ambivalente de las instituciones educativas y de los ecosistemas digitales que operan, a la par, como espacios privilegiados de socialización cívica y como entornos desiguales que amplifican brechas preexistentes en el acceso a recursos cognitivos, informativos y participativos. La construcción cargada afectivamente del adversario político como amenaza existencial, más que como oponente legítimo con el que se tienen desacuerdos de fondo, constituye un componente central

[34] Biesta, *op. cit.*

de los procesos de polarización documentados en democracias contemporáneas.[35]

El análisis no busca confirmar hipótesis cerradas ni validar tipologías preestablecidas, sino abrir el campo de comprensión sobre las formas complejas, contradictorias y situadas en que las juventudes universitarias de la Ciudad de México ejercen sus competencias cívicas en un contexto de polarización, desigualdad y transformación digital.

4.2. Competencias cívicas como entramado situado: puntos de partida empíricos

Conceptualizar las competencias cívicas como fenómenos multidimensionales y contextuales dialoga críticamente con los planteamientos fundacionales de Dahl[36] sobre los límites estructurales de la competencia ciudadana, así como con los esfuerzos posteriores de operacionalización empírica desarrollados por Hoskins[37] en contextos europeos.

4.2.1. Centralidad ambivalente de la política: entre el compromiso analítico y la fatiga emocional

Este patrón de involucramiento analítico combinado con fatiga emocional dialoga con hallazgos sobre el agotamiento psicológico en juventudes contemporáneas expuestas a flujos informativos continuos e intensos.

Los ejercicios iniciales realizados con una escala de 0 a 10 en todos los grupos focales muestran una distribución notablemente heterogénea respecto a la afirmación "la política es un tema central en mi vida cotidiana". En cada sesión hubo participantes ubicados en los extremos más bajos de la escala, con valores de uno, dos o tres, junto a otros con valores altos entre siete y nueve e, incluso, algunos casos que alcanzaban el máximo de 10. Esta diversidad aparece de manera recurrente en todos los grupos, pero adopta combinaciones y configuraciones distintas según la institución educativa de procedencia, el perfil disciplinario y las trayectorias previas de participación política de cada persona.

[35] Mason, *op. cit.*; Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit*.
[36] Dahl, *op. cit*.
[37] Hoskins *et al*., *op. cit.*; Hoskins, Saisana y Villalba, *op. cit*.

La concepción de la política como dimensión estructural de la vida es una constante entre quienes se colocan en los valores altos de la escala. Para este segmento, la política no consiste sólo en partidos, campañas electorales o disputas parlamentarias, sino que es el espacio donde se decide sobre la distribución de recursos escasos, las reglas que regulan la convivencia, quiénes tienen voz y quiénes son sistemáticamente excluidos de las decisiones que afectan sus vidas. Destaca el caso de quienes estudian ciencias sociales o disciplinas afines, pues tienden a traducir esa conciencia estructural en un interés analítico explícito. Estas personas jóvenes asumen que comprender sistemas electorales, arreglos institucionales, diseño de políticas públicas o mecanismos de rendición de cuentas forma parte constitutiva de su identidad estudiantil y de su proyecto profesional futuro.

En abierto contraste, quienes se sitúan en la parte baja de la escala, con valores de uno, dos o tres, describen la política como un campo tóxico, desgastante en lo emocional, y como una fuente de conflictos interpersonales que, con frecuencia, ponen en riesgo vínculos significativos. En el grupo 1, una participante que eligió tres explicó de manera muy sintética que "yo honestamente consumo, o sea, consumo noticias, pero no lo suficiente y, o sea, tres, lo básico, no estoy tan adentrada en cuanto a la política". Sin embargo, cuando se profundiza en las narrativas de quienes se ubican en valores bajos, emerge un patrón más complejo que el simple desinterés o la apatía cognitiva. Varias personas señalan que las redes sociodigitales son espacios donde la discusión política deriva con rapidez en insultos, descalificaciones personales y confrontaciones que erosionan la posibilidad de diálogo. Otras mencionan que en la esfera familiar las conversaciones sobre política "se echan a perder" cuando alguien introduce temas partidistas, pues se generan tensiones que pueden prolongarse durante días o, incluso, fracturar relaciones duraderas.

Para este grupo de participantes, mantener cierta distancia respecto a la política no es necesariamente una expresión de ignorancia o de desinterés por los asuntos públicos, sino más bien una forma de autocuidado emocional, una estrategia deliberada para proteger la salud mental en contextos percibidos como abrumadores, polarizados y con frecuencia violentos en términos simbólicos. En distintos momentos de las sesiones, estas personas jóvenes afirmaron que les importa lo que sucede en el país y reconocen que las decisiones políticas afectan sus vidas de manera directa, pero, a la par, declararon que prefieren limitar su exposición a ciertos espacios de discusión porque sienten que el costo emocional es demasiado alto. Uno de los participantes expresó con claridad esta tensión al decir que "mi voz no va a cambiar al país", sugiriendo que su bajo nivel de involucramiento deriva no tanto de una falta de conciencia sobre la importancia de la política, sino de

una percepción de impotencia frente a la magnitud de los problemas y la dificultad para incidir de manera efectiva.

Se identificó también un segmento intermedio que, si bien reconoce la relevancia de la política por sus efectos concretos y tangibles, gestiona su exposición a estos temas de manera selectiva y pragmática. Estas personas suelen ubicarse en valores intermedios de la escala, entre cuatro y seis, y oscilan entre el interés instrumental por conocer información que afecta directamente su vida cotidiana y la fatiga emocional que produce el seguimiento sistemático de la agenda política.

La evidencia cualitativa apunta a que las competencias cívicas se sostienen en entramados complejos de recursos cognitivos disponibles, experiencias en espacios educativos o de militancia, percepciones sobre el riesgo emocional que implican ciertos debates y horizontes de futuro que hacen que la política aparezca como más o menos relevante según los proyectos de vida de cada persona.

Una persona joven puede considerar la política como central en su vida, dedicar tiempo significativo a informarse sobre temas públicos y participar en espacios de movilización estudiantil, pero, al mismo tiempo, elegir retirarse por un tiempo de ciertas conversaciones familiares o determinados espacios en redes sociales para proteger su salud mental y evitar el desgaste que produce la confrontación permanente. Las narrativas recogidas en los grupos focales muestran que muchos y muchas jóvenes son conscientes de esta tensión y la manejan de manera reflexiva, calibrando continuamente en cuáles espacios vale la pena invertir energía cívica y en cuáles es preferible mantener distancia para preservar vínculos significativos o el propio bienestar emocional.

4.2.2. Percepción de agencia y eficacia política subjetiva: la escala como mediadora del impacto

Las respuestas sobre la afirmación "confío en que mi voz y mis acciones pueden incidir en asuntos políticos" tienden a concentrarse en la parte media-alta de la escala, aunque con presencia significativa de valores muy bajos y algunos casos de escepticismo extremo. Para fines del análisis, es relevante que la eficacia política subjetiva, entendida como la creencia en la propia capacidad de influir en decisiones públicas, no se ajuste de forma mecánica a la centralidad que cada persona otorga a la política en su vida cotidiana. Hay participantes que consideran la política un tema absolutamente central, se informan de manera sistemática y dedican tiempo significativo a pensar

sobre los asuntos públicos, pero, al mismo tiempo, relativizan su capacidad de incidencia con expresiones como "me importa, pero siento que poco puedo hacer" o "a nivel individual mi voto o mi opinión no cambian nada". En cambio, hay personas con un interés moderado en la política pero que confían en su agencia en espacios específicos y delimitados, como la organización estudiantil dentro de su universidad, las redes digitales donde pueden viralizar contenidos o su contexto comunitario inmediato.

Dos elementos emergen en las discusiones y matizan de forma constante la percepción de agencia política. El primero refiere a la escala del escenario de acción. Muchas personas jóvenes perciben que su impacto individual es prácticamente nulo o insignificante a nivel nacional; sin embargo, cuando la escala se reduce a ámbitos micro, como la universidad, el barrio, los colectivos estudiantiles específicos o las redes sociales donde tienen seguidores, la sensación de agencia aumenta de manera significativa.

En el grupo 5, por ejemplo, un participante señaló que "obvio que a nivel país yo solo no voy a cambiar nada, pero aquí en la uni sí he visto que cuando nos organizamos sí logramos cosas, como cuando presionamos para que mejoraran las becas o cuando hicimos el paro por lo del profesor". Esta distinción entre escalas de acción no es trivial ni representa una simple concesión pragmática ante la imposibilidad de transformar estructuras nacionales, más bien revela una comprensión sofisticada de que el poder político no se distribuye de manera homogénea en todos los niveles.

El segundo elemento que matiza la percepción de agencia es la desconfianza generalizada en las instituciones formales y en los canales establecidos para procesar demandas ciudadanas. No se trata de un sentimiento abstracto ni irracional, sino basado en experiencias previas de participantes o de personas cercanas que intentaron utilizar canales formales y encontraron respuestas dilatorias, procedimientos opacos o instancias que protegen más a los sectores poderosos que a quienes denuncian abusos o injusticias. La erosión de la confianza en las instituciones encargadas de procesar demandas ciudadanas constituye un desafío fundamental para la gobernabilidad democrática que no puede resolverse sólo mediante estrategias comunicativas, sino que requiere transformaciones efectivas que demuestren capacidad de respuesta.[38]

En clave analítica, el material cualitativo contribuye de manera sustantiva a "llenar de contenido" el indicador cuantitativo de eficacia política que se utiliza en la encuesta del proyecto. La eficacia política subjetiva, vista desde esta perspectiva cualitativa, no es un rasgo psicológico individual que se mide de manera universal, sino una percepción situada que varía según el

[38] Uslaner y Brown, *op. cit*.

tipo de problema, la escala en la que se plantea la acción y el nivel de confianza que se tiene en las instituciones mediadoras que podrían procesar las demandas ciudadanas.

4.2.3. Las instituciones educativas como espacios ambivalentes de socialización política

Aunque el número de grupos focales es acotado por las limitaciones de la investigación cualitativa, el diseño del estudio buscó deliberadamente incorporar instituciones con perfiles contrastantes que permitieran observar la heterogeneidad de experiencias formativas. Se incluyeron universidades públicas con procesos de admisión muy competitivos, universidades públicas de absorción que reciben a estudiantes con trayectorias educativas más diversas, universidades privadas de élite que atienden a sectores socioeconómicos privilegiados y universidades privadas de absorción que se orientan a clases medias y medias-bajas. A esta diversidad institucional se suman diferencias significativas en las trayectorias familiares, laborales y de participación política de quienes participan, lo cual configura un panorama heterogéneo que el análisis cualitativo permite explorar de manera fina.

Participantes provenientes de las instituciones públicas selectivas relataron experiencias previas de involucramiento en colectivos estudiantiles, participación en paros o tomas de instalaciones, asistencia regular a asambleas y exposición a debates políticos intensos dentro del campus. Para estas personas jóvenes, la universidad aparece al mismo tiempo como un espacio de politización donde se aprende a argumentar, a organizarse colectivamente y a ejercer presión sobre autoridades, pero también como un entorno donde las tensiones y conflictos políticos pueden ser abrasivos, generar fracturas entre estudiantes y producir desgaste emocional significativo.

En contraste, en las instituciones privadas de élite la discusión política cotidiana entre pares tiende a tematizar de manera recurrente las desigualdades estructurales, el privilegio de clase y la responsabilidad social que se espera de quienes provienen de sectores favorecidos. En estos contextos, la política aparece como un objeto de reflexión intelectual sofisticada más que como un campo de práctica directa y confrontación material.

Por su parte, en universidades de absorción, tanto públicas como privadas, emergen con más fuerza narrativas sobre trabajo remunerado simultáneo a los estudios, precariedad económica que limita el tiempo disponible para actividades extracurriculares y dificultades para sostener una participación política constante debido a las múltiples responsabilidades que deben balancear. Entre las declaraciones hechas por las personas participantes se

encuentran algunas como "me gustaría participar más, pero trabajo y estudio y apenas me da tiempo para llegar a mi casa" o "las marchas y las asambleas están bien, pero si faltas a clases o al trabajo te afecta directamente". Estas narrativas muestran cómo las desigualdades económicas estructurales condicionan de manera directa la disponibilidad tanto de tiempo como de energía para la participación, y generan una estratificación en el acceso a espacios de socialización política que no depende únicamente de la voluntad o el interés individual. Estas diferencias entre contextos institucionales no se traducen en tipologías rígidas que permitan clasificar a cada universidad en una categoría cerrada, pero sí sugieren de manera consistente que las competencias cívicas observadas en los grupos focales son coproducidas por climas institucionales específicos.

Las sesiones cualitativas permiten ver no sólo qué oportunidades ofrece cada contexto, sino también cómo las y los jóvenes se apropian de esas oportunidades, las resignifican según sus propias trayectorias e intereses o, incluso, en algunos casos las rechazan con fuerza por considerarlas inadecuadas o porque entran en conflicto con otras prioridades vitales. Una participante de una universidad pública selectiva relató, por ejemplo, que "al principio me metí al colectivo feminista y estaba súper emocionada, pero después vi que había mucho rollo interno, muchas peleas, y decidí salirme porque no quería ese ambiente tóxico". Esta narrativa muestra que la mera existencia de espacios de participación no garantiza que las personas jóvenes los vivan como experiencias formativas positivas, y que las dinámicas internas de los colectivos pueden tanto potenciar como inhibir el desarrollo de competencias deliberativas y la voluntad de sostener compromisos políticos duraderos.

4.3. Identidades morales, polarización afectiva y manejo del disenso

4.3.1. La brecha entre declaraciones de apertura y prácticas cotidianas de evitación

Muchas y muchos participantes afirman que conviven con personas de posiciones políticas divergentes con regularidad, que discuten con ellas o al menos dialogan frecuentemente con perspectivas diferentes a las propias en sus espacios cotidianos de socialización. Sin embargo, conforme avanzan las sesiones y se profundiza en las narrativas biográficas concretas, aparece un patrón consistente que revela una brecha significativa entre estas declaracio-

nes de apertura y las prácticas desplegadas en la vida cotidiana para manejar el desacuerdo político.

En las narrativas que emergen de forma espontánea a lo largo de las sesiones reaparecen de manera recurrente escenas muy específicas que muestran cómo el desacuerdo político se vive como una amenaza potencial a vínculos significativos. Se relataron experiencias de cenas familiares que se volvieron tensas o directamente se arruinaron cuando alguien introdujo un tema político divisivo, sobre todo si el tema en cuestión tocaba lealtades partidarias profundas o valores morales con un fuerte arraigo. Otras personas mencionaron chats grupales de amistades en WhatsApp que se fracturaron cuando estalló una discusión sobre temas como el aborto, la seguridad pública o la gestión gubernamental de la pandemia, y que derivaron en bloqueos recíprocos o en silencios prolongados que aún no se han reparado. También se identificaron relatos sobre discusiones en redes sociodigitales que escalaron con rapidez de un desacuerdo inicial sobre un tema específico hasta descalificaciones personales, ataques a la inteligencia o la moral de la otra persona y, por último, rupturas definitivas mediante bloqueos o eliminación de contactos.

Frente a estos costos emocionales y relacionales del desacuerdo político, las personas jóvenes han desarrollado un repertorio sofisticado de estrategias de evitación destinadas a preservar vínculos significativos y proteger su propia salud mental. Estas estrategias incluyen cambiar activamente de tema cuando se percibe que una conversación puede derivar en conflicto; no expresar la propia postura política en ciertos espacios considerados como "campos minados", donde el costo de disentir es demasiado alto; moderar el tono y el lenguaje para "no sonar agresivo" o para "no empezar una pelea", o incluso tomar la decisión de informarse poco sobre ciertos asuntos para no sentir la obligación de tomar una posición que podría generar fricciones con personas por las que se siente aprecio.

Cabe destacar que estas estrategias de evitación no implican por fuerza indiferencia política ni desconexión cognitiva respecto a los asuntos públicos; al contrario, con frecuencia están motivadas por el temor a dañar vínculos que se valoran profundamente. Este contraste marcado entre la disposición declarada a convivir con el desacuerdo y las prácticas cotidianas de evitación constituye uno de los hallazgos más significativos de la fase cualitativa del proyecto.

En los grupos focales aparecen con regularidad prácticas deliberativas sofisticadas que incluyen matizar acuerdos parciales en lugar de sostener posiciones absolutas, reconocer de manera explícita puntos válidos en la argumentación de quien sostiene una postura contraria, solicitar ejemplos concretos para entender mejor el razonamiento del otro o incluso ajustar

parcialmente la propia opinión ante argumentos que se consideran sólidos o contraejemplos que debilitan la posición inicial. Estas prácticas ponen de manifiesto que las competencias deliberativas no están ausentes, pero que su activación depende de manera crítica de las condiciones materiales y normativas del entorno de interacción.

4.3.2. Polarización afectiva y la construcción del *otro* político

A lo largo de las sesiones de grupos focales, el *otro* político se construye como una figura más extrema, dogmática y agresiva de lo que las propias discusiones dentro del grupo muestran de facto. Las etiquetas identitarias que circulan en el lenguaje cotidiano de la población joven, como *conservador, woke, facho, feminista radical, chairo* o *fifí*, funcionan como condensadores de posiciones políticas que rara vez se descomponen en sus elementos constitutivos o se someten a un análisis matizado de sus fundamentos normativos o empíricos.

Esta tensión entre imaginarios dicotómicos de dos bandos claramente opuestos y experiencias más matizadas que escapan a esas categorías rígidas dialoga con el estado del arte sobre polarización afectiva. En ese sentido, la literatura especializada distingue entre polarización ideológica —que refiere a la distancia creciente entre las posiciones programáticas de distintos actores políticos— y polarización afectiva —que alude a la intensificación de sentimientos negativos hacia quienes se identifican con el campo político opuesto, con independencia de la distancia real en términos de políticas específicas—.[39]

Las personas jóvenes que participaron en los grupos focales describen con notable claridad y autorreflexión cómo en las redes sociodigitales la interacción política se organiza, predominantemente, en torno a identidades morales en conflicto. La lógica que estructura estos espacios no es tanto "los que piensan X contra los que piensan Y", sino más bien "los que defienden derechos y dignidad versus los que quieren imponer su moral retrógrada", o "los que aman a México versus los que lo quieren destruir". Los estudios sobre desarrollo moral y político en la adultez emergente sugieren que la articulación entre identidad moral y propósito político constituye un proceso clave de maduración cívica que no es automático ni universal, sino que depende de experiencias formativas específicas y

[39] Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit.*; Mason, *op. cit.*

de contextos institucionales que faciliten la reflexión ética sobre asuntos públicos.[40]

Sin embargo, cuando se sale de las redes sociodigitales estructuradas por el algoritmo y se ingresa a contextos de interacción cara a cara, como la universidad o la familia, esos cortes identitarios rígidos se cruzan inevitablemente con jerarquías de otro orden, con afectos y lealtades previas, así como con vínculos que no se pueden resolver mediante el simple bloqueo de una cuenta o el dejar de seguir a alguien. Es precisamente en estos espacios donde la polarización afectiva se vive como un problema práctico que requiere estrategias activas de evitación, moderación del lenguaje o búsqueda de terrenos comunes que permitan preservar la convivencia pese al desacuerdo profundo.[41]

4.3.3. Competencias deliberativas observadas en un contexto estructurado

En términos de competencias cívicas específicas, las sesiones de grupos focales permiten identificar y documentar al menos tres capacidades deliberativas relevantes que aparecen con regularidad cuando las condiciones del entorno facilitan su despliegue. La primera es la capacidad de formular desacuerdos de manera no insultante ni descalificadora. Incluso en el bloque hiperpolémico —donde se discuten temas muy divisivos, como la exigencia de declaraciones ideológicas a profesores universitarios o la legitimidad de cancelar oradores polémicos—, la mayoría de las intervenciones que cuestionan la postura del otro parten de desacuerdos argumentados en torno a principios, consecuencias prácticas o preocupaciones sobre efectos no intencionales, no recurren a descalificaciones personales en torno a la inteligencia, la moral o las intenciones ocultas del interlocutor.

La segunda capacidad deliberativa observable es el uso recurrente de contraejemplos y casos intermedios, ya sea para problematizar posiciones tajantes o para mostrar que los dilemas normativos son más complejos de lo que una formulación binaria sugiere. Ante afirmaciones categóricas del tipo "siempre es legítimo X" o "nunca se debe hacer Y", varias personas en los grupos introducen ejemplos que complican el panorama y obligan a matizar la posición inicial. Esta evaluación de la legitimidad de la desobediencia civil, que se aleja tanto del apoyo incondicional como del rechazo categórico, muestra una sofisticación normativa.[42]

[40] Han, Ballard y Choi, *op. cit.*; Han y Dawson, *op. cit*.
[41] Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit.*; Mason, *op. cit.*
[42] Gaby, *op. cit*.

La tercera competencia consiste en el reconocimiento explícito de la incertidumbre y la disposición a aceptar en público que no se tiene una posición por completo formada sobre un tema complejo. Esta declaración pública de no tener certeza, lejos de ser una debilidad argumentativa, constituye una disposición epistémica valiosa que permite sostener conversaciones exploratorias antes que confrontaciones donde cada parte sólo busca defender una posición cristalizada.

Estas tres capacidades deliberativas, aunque presentes en las transcripciones de los grupos focales, conviven inevitablemente con sesgos cognitivos bien conocidos en la literatura sobre razonamiento político, como las generalizaciones apresuradas de casos individuales que se elevan de forma indebida a la categoría de patrón general, las atribuciones intencionales de maldad o manipulación al adversario, sin evidencia suficiente que las sustente, y el uso selectivo de evidencia que confirma la propia posición en tanto que se olvidan o minimizan los contraejemplos que la debilitan.

Sin embargo, lo que muestran los grupos focales es que, en condiciones de moderación adecuada, con reglas claras de interacción y dispositivos que ralentizan la discusión para permitir la escucha activa y la reflexión, es posible sostener conversaciones que van más allá del ataque identitario o de la simple reafirmación de posiciones dogmáticas. En términos analíticos, los grupos focales funcionan como un laboratorio social donde se observa la fricción entre identidades morales fuertes que empujan hacia la polarización afectiva y exigen normativas de deliberación democrática para reconocer la legitimidad del desacuerdo y de las razones del otro para sostener posiciones divergentes.[43]

4.4. Repertorios de participación y desobediencia civil

4.4.1. Legitimidad condicionada de la desobediencia civil: criterios normativos en contexto

Las votaciones anónimas realizadas mediante la plataforma Mentimeter sobre la afirmación "La desobediencia civil, en particular los bloqueos de vías públicas, es una forma legítima y eficaz de participación política" registran,

[43] Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit.*; Mason, *op. cit.*

de manera consistente, un apoyo mayoritario en todos los grupos. En la mayoría de las sesiones, entre 60 y 80 % de los y las participantes se pronunciaron a favor de considerar legítima esta forma de acción política, mientras que las posiciones abiertamente en contra son casi inexistentes o en extremo minoritarias. La principal variación se da entre quienes apoyan la desobediencia civil de manera decidida, sin mayor problematización, y quienes se declaran indecisos o condicionan su apoyo a circunstancias específicas que buscan delimitar en la discusión posterior.

La discusión abierta que sigue a las votaciones permite observar que el apoyo mayoritario no es ingenuo ni incondicional, sino que se articula mediante un conjunto de criterios normativos utilizados por las personas jóvenes para evaluar casos concretos y distinguir entre formas legítimas e ilegítimas de desobediencia. Estos criterios no aparecen necesariamente de manera explícita en las formulaciones iniciales, pero emergen de forma robusta cuando se plantean contraejemplos, o bien cuando se pide justificar por qué ciertos casos de desobediencia se consideran aceptables mientras que otros se rechazan o generan incomodidad moral.

El primer criterio que aparece de manera recurrente en todos los grupos se refiere a la afectación a terceras personas que no están involucradas directamente en el conflicto. Hay una preocupación genuina y consistente por los costos que ciertas acciones de protesta imponen a personas que no son responsables del problema que motiva la movilización y que, además, no tienen capacidad de resolverlo. Este razonamiento no rechaza de plano la desobediencia civil, sino que introduce una exigencia normativa de proporcionalidad y discriminación en la selección de blancos de la protesta. Esta preocupación por terceras personas afectadas convive con el reconocimiento de que toda forma de protesta que sea efectiva por fuerza incomoda y produce costos para alguien.

El segundo criterio normativo que estructura las discusiones sobre desobediencia civil refiere a la gradación de repertorios de acción y a la idea de que la protesta disruptiva debería ser un recurso de última instancia tras haber intentado, sin éxito, vías institucionales. Esta postura se expresa casi siempre mediante formulaciones del tipo "primero hay que agotar los canales legales" o "si la institución no te escucha después de que hiciste todo lo que podías hacer por las vías normales, entonces sí es válido bloquear". La lógica subyacente es que la desobediencia civil, justo por romper la legalidad vigente e imponer costos a terceras personas, requiere una justificación moral especialmente fuerte que sólo se alcanza al demostrar de manera fehaciente que las vías institucionales están cerradas, son inoperantes o responden de manera tan lenta que equivale a una negación efectiva de derechos.

En contraposición, varias personas participantes señalaron que en muchos casos esperar a "agotar todas las vías formales" puede ser una trampa que posterga de forma indefinida la acción efectiva, y que permite que las injusticias se consoliden mientras las víctimas esperan con paciencia que instancias burocráticas lentas, capturadas u hostiles procesen sus demandas. Esta tensión entre el valor normativo de la gradación de repertorios y el reconocimiento pragmático de que, en muchos contextos, las vías institucionales son inexistentes o están diseñadas para diluir demandas antes que para procesarlas no se resuelve de manera definitiva en los grupos focales.

El tercer criterio se refiere al perfil de quienes ejercen la desobediencia civil y a qué tan justa se percibe que es la causa de la movilización. Aunque, en principio, muchos participantes declaran que el derecho a la protesta debería ser universal y no depender de quién lo ejerce, en la práctica las mismas personas valoran de manera diferencial la misma táctica dependiendo de quién la protagoniza y contra qué tipo de injusticia se moviliza. Las acciones de desobediencia civil emprendidas por colectivos históricamente vulnerados —como comunidades indígenas despojadas de tierras, víctimas de violencia estatal o grupos que enfrentan discriminación sistemática— tienden a recibir una legitimidad mayor y un escrutinio menos severo que las acciones emprendidas por grupos percibidos como privilegiados o motivados por causas consideradas menos urgentes o de poca solidez moral.

Desde el encuadre analítico del proyecto, este patrón de respuestas sugiere que las personas jóvenes combinan una sensibilidad robusta hacia el derecho a la protesta con un sentido también fuerte de responsabilidad hacia personas potencialmente afectadas por las acciones de desobediencia. Lejos de un rechazo general y categórico a la protesta disruptiva, lo que se observa es una disposición sostenida a situar de manera fina las condiciones de legitimidad, los criterios de proporcionalidad y las estrategias de cuidado que deberían estructurar este repertorio de acción política. El resultado es una postura que combina la defensa principialista del derecho al disenso con una preocupación pragmática por la gobernabilidad cotidiana, así como por la preservación de vínculos de solidaridad social que podrían fracturarse si las tácticas disruptivas se usan de manera indiscriminada o sin consideración por sus efectos sobre la vida diaria de personas vulnerables.

4.4.2 Repertorios de acción propuestos y horizontes de eficacia

Cuando se plantean problemas públicos hipotéticos y se solicita a las personas participantes imaginar qué harían si quisieran modificar una situación

injusta o presionar por un cambio de política pública, los repertorios de acción mencionados con más frecuencia son variados, pero se concentran en formas de participación política que no pasan necesariamente por canales institucionales ni por estructuras partidarias. Los canales formales, como la presentación de quejas ante instancias administrativas, el contacto con representantes electos o la participación en procesos electorales mediante el voto o el trabajo en campañas, son mencionados en menor medida.

Lo que resulta significativo en términos analíticos es que la militancia partidista tiene una presencia muy marginal en el repertorio de acciones políticas disponibles. Cuando aparece, suele estar asociada a experiencias negativas previas o a la percepción generalizada de que los partidos políticos tienden a *adueñarse* de causas genuinas y legítimas para instrumentalizarlas en beneficio de sus intereses electorales, lo que, en el proceso, desvirtúa las demandas originales y subordina las luchas sociales a calendarios y cálculos partidarios.

En contraste marcado con este rechazo a la militancia partidista, las acciones simbólicas y comunicativas mediadas por plataformas digitales se perciben como rápidas, flexibles y capaces de producir presión social de manera casi inmediata, esto mediante la viralización de contenidos que exponen injusticias, documentan abusos o movilizan solidaridad emocional hacia causas específicas. Sin embargo, esta preferencia por acciones digitales convive con el reconocimiento explícito de que su impacto es difícil de medir, que la atención mediática es tan volátil como efímera y que no es claro cómo se traduce un *trending topic* o una campaña exitosa en redes en cambios institucionales duraderos que modifiquen de forma efectiva políticas públicas o prácticas arraigadas.

Se trata de formas de involucramiento político que son intensas mientras duran, pero intermitentes en el tiempo, fuertemente mediadas por coyunturas específicas que capturan la atención colectiva y estructuradas por las *affordances*[44] y las lógicas algorítmicas de los entornos digitales. Estas formas de participación conviven con la desafección hacia instituciones formales y actitudes cínicas respecto a la capacidad de las estructuras políticas tradicionales para procesar demandas ciudadanas de manera efectiva y oportuna. Esta tensión entre los repertorios digitales de fácil acceso y la dificultad para producir un impacto sostenible en ellos constituye uno de los dilemas centrales de la participación juvenil contemporánea en contextos urbanos hiperconectados.

[44] Por *affordances* se entienden las posibilidades de acción que una plataforma habilita, facilita o vuelve más probables gracias a su diseño técnico y sus reglas de uso. En entornos digitales, esto incluye funciones como compartir, comentar, reaccionar, etiquetar, seguir cuentas, usar *hashtags*, viralizar contenidos o recibir recomendaciones algorítmicas. Estas características no determinan por sí mismas la participación política, pero condicionan sus formas, ritmos y alcances.

4.5. Ecosistemas informativos, burbujas ideológicas y competencias de verificación

4.5.1. Cartografías del *feed* político: plataformas digitales, creadores de contenido y mediación algorítmica

El trabajo realizado con el instrumento "Mapa de mi *feed* político" —que cada participante completó antes o durante la sesión de grupo focal— revela una dieta informativa donde predominan de forma abrumadora las plataformas digitales de alta inmediatez como TikTok, X (antes Twitter), Instagram y YouTube. Estas plataformas se complementan con consultas selectivas a medios periodísticos tradicionales en sus versiones digitales, en especial para verificar información que circuló inicialmente en redes, o bien para profundizar en un tema específico. El teléfono móvil se consolida de manera casi exclusiva como el dispositivo principal de acceso a la información política, por lo que relega a la computadora de escritorio o laptop a un papel secundario vinculado, sobre todo, a tareas académicas o laborales. Estas prácticas de verificación, aunque informales y no siempre sistemáticas, constituyen mecanismos emergentes de alfabetización digital que corresponden a competencias cívicas adaptadas a ecosistemas informativos hiperconectados y potencialmente engañosos.[45]

En esta configuración del ecosistema informativo, resulta interesante que los contenidos políticos no constituyan un flujo diferenciado con claridad de otros tipos de contenido, sino que están profundamente imbricados con elementos de humor, entretenimiento y vida cotidiana, así como contenidos de interés personal en áreas como moda, comida, deportes o series de televisión. El descubrimiento de asuntos políticos y públicos relevantes ocurre muchas veces de forma incidental o no planificada, mediante lo que algunas personas participantes describieron como "me salió en el *feed*" o "me lo recomendó el algoritmo". A esto hay que añadir que el movimiento de verificación no es automático ni universal, sino que se activa cuando se percibe que el tema es importante, toca directamente intereses propios o de personas cercanas, hay dudas sobre su veracidad, o bien cuando se avecina una coyuntura crítica, como unas elecciones o una decisión gubernamental que puede afectar la vida cotidiana. Los medios periodísticos tradicionales, tanto nacionales como internacionales, operan entonces como una segunda capa de verificación o profundiza-

[45] Jerome *et al., op. cit.*

ción, pero no como la fuente primaria de exposición a la agenda política del día.

En términos de orientación ideológica, el análisis de los mapas del *feed* político completados por quienes participaron muestra una inclinación predominante hacia posiciones progresistas o de izquierda, lo cual es consistente con patrones generacionales de afinidad con causas de justicia social, derechos de minorías y crítica sistémica, documentados en estudios recientes sobre valores políticos de juventudes urbanas educadas.

El *otro lado* del espectro ideológico, es decir, las voces conservadoras o de derecha, aparecen en el *feed* de los y las jóvenes participantes de manera mucho más limitada y filtrada. Cuando se mencionan fuentes conservadoras, suelen estar representadas por un puñado muy pequeño de referentes mediáticos específicos que son seguidos no por identificación o afinidad ideológica, sino bajo una lógica explícita de monitoreo del adversario, de curiosidad por entender qué argumentos utiliza el otro lado o de desacuerdo informado que busca conocer las posturas conservadoras para poder rebatirlas con fundamento.

4.5.2. Reglas prácticas de verificación y escepticismo asimétrico

Frente a la posibilidad omnipresente de desinformación, bulos o noticias falsas que circulan sobre todo en redes sociodigitales, las personas jóvenes participantes describen un conjunto más o menos consolidado de reglas prácticas que activan cuando sospechan que un contenido podría ser falso o manipulado. La primera regla que aparece de manera recurrente en las discusiones es revisar con cuidado la fecha y el contexto temporal de la nota, video o imagen. Varios participantes relataron experiencias donde descubrieron que un contenido presentado como actual correspondía, en realidad, a un evento de años atrás que había sido reciclado y descontextualizado para generar indignación o confusión en torno a una coyuntura específica.[46]

La segunda regla consiste en identificar la fuente original del contenido y distinguir entre una captura de pantalla sin contexto, un meme de origen incierto y una nota periodística formal con autoría y medio claramente identificables. Se trata de una distinción importante porque la forma del contenido influye en el nivel de escrutinio que recibe.

[46] *Idem*.

La tercera regla implica contrastar la información en, al menos, una segunda fuente que se considere relativamente confiable o que tenga un perfil ideológico diferente a la primera. Esta práctica de triangulación aparece sobre todo cuando el contenido es sorprendente o afirma algo que parece demasiado extremo o conveniente para confirmar las propias creencias. En sintonía con esta idea, la cuarta regla consiste en evitar compartir de inmediato contenidos que "suenan demasiado extremos" o que generan una reacción emocional muy fuerte, sobre todo de indignación o de enojo.

En los ejercicios específicos donde se proyectaron videos potencialmente engañosos o recortados de manera tendenciosa, los grupos mostraron una combinación interesante de escepticismo inicial y curiosidad analítica. Las y los jóvenes participantes buscaron con diligencia señales de manipulación, como ediciones abruptas que pudieran indicar la eliminación de partes importantes del contexto, la ausencia de información clara sobre el origen del video o un tono emocional diseñado para provocar reacciones viscerales más que para informar de manera equilibrada. Durante estos ejercicios también se discutieron las posibles motivaciones políticas o económicas detrás de la producción y circulación de contenidos engañosos, y se reconoció que la desinformación no es siempre accidental, sino que con frecuencia responde a estrategias deliberadas de actores que buscan polarizar, confundir o manipular la opinión pública.

Estas prácticas de verificación muestran que las personas jóvenes, lejos de ser consumidores pasivos o ingenuos de información política, han desarrollado, a partir de la experiencia acumulada, un conjunto de heurísticas para navegar con cierto nivel de efectividad un ecosistema informativo saturado, fragmentado y atravesado por flujos constantes de desinformación. El análisis detallado de las discusiones revela también un sesgo sistemático y robusto que aparece de manera transversal en todos los grupos focales. La verificación tiende a ser más rigurosa, escéptica y sistemática cuando el contenido proviene del *otro lado* ideológico o cuando cuestiona las propias convicciones políticas. Por el contrario, las piezas informativas que están alineadas con las posiciones propias, es decir, que confirman lo que ya se creía, o que provienen de fuentes percibidas como aliadas tienden a recibir un escrutinio menos severo y son más propensas a ser compartidas.

La investigación también identificó que algunas de las personas jóvenes son conscientes del problema, aunque no logren corregirlo en la práctica cotidiana donde las presiones de tiempo, el flujo constante de información y los incentivos emocionales de las plataformas digitales dificultan sostener prácticas de verificación simétricas y desinteresadas.

4.5.3. Burbujas ideológicas y modalidades del contacto con el *otro lado*

La configuración predominante del *feed* político entre quienes participaron revela una burbuja ideológica consistentemente inclinada hacia posiciones progresistas que, si bien no implica una ausencia total de exposición a discursos conservadores, sí configura ese contacto con el *otro lado* de manera muy específica. El consumo de contenido conservador tiende a basarse en pocos referentes mediáticos, los cuales son seguidos bajo lógicas explícitas de monitoreo, contraste o preparación para el debate, más que con afán de formación genuina de opinión mediante la consideración seria de argumentos conservadores.

Este patrón de consumo selectivo y estratégico del otro lado tiene consecuencias en la configuración de competencias deliberativas. Por un lado, muestra que hay interés en, al menos, asomarse a narrativas opositoras y no encerrarse por completo en una cámara de eco. Por otro lado, el hecho de que este contacto con el otro lado ocurra casi siempre en marcos adversariales o polarizados, donde el contenido conservador se consume con la expectativa previa de estar en desacuerdo o de encontrar falacias y manipulaciones, refuerza la percepción de un conflicto binario irreductible del tipo *nosotros versus ellos*.

La burbuja progresista se protege y se refuerza mediante filtros que no son irracionales ni arbitrarios, sino que responden a experiencias previas con contenidos considerados como ofensivos, dañinos o moralmente inaceptables. Sin embargo, al filtrar contenidos conservadores extremos, es inevitable que se reduzca la exposición a posiciones conservadoras moderadas o a argumentos de derecha sofisticados que podrían ser más difíciles de refutar y, por lo tanto, podrían obligar a revisiones más profundas de las propias convicciones.

La literatura revisada en el estado del arte ha demostrado de manera persistente que, en contextos de polarización afectiva intensa, la capacidad de reconocer la posibilidad de que el adversario tenga razones válidas para mantener sus posiciones es uno de los componentes más frágiles y difíciles de sostener de la competencia cívica deliberativa. Las discusiones de los grupos focales confirman plenamente esta fragilidad y muestran cuán difícil resulta para las personas jóvenes mantener una disposición epistémica abierta, en especial cuando los costos emocionales de considerar con seriedad argumentos del otro lado son percibidos como muy altos.

4.6. Bloque hiperpolémico: reglas institucionales, espacios seguros y debido proceso

4.6.1. La moción sobre declaraciones ideológicas obligatorias para el profesorado

En el bloque hiperpolémico —diseñado en específico para introducir un dilema normativo intenso que obligara a las y los jóvenes participantes a enfrentar tensiones reales entre valores políticos importantes—, al menos uno de los grupos focales trabajó con la moción que plantea si la universidad debe exigir a las personas candidatas a profesorado que firmen una declaración formal de compromiso con la justicia social, la diversidad y la inclusión como condición necesaria para su contratación. Esta moción fue formulada con la intención de obligar a balancear principios que muchas personas jóvenes progresistas valoran mucho, como la protección de estudiantes pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, con otros principios de igual importancia, por ejemplo, la libertad académica, el pluralismo ideológico y las garantías del debido proceso.

Las votaciones anónimas realizadas mediante Mentimeter ponen en evidencia una inclinación significativa a favor de algún tipo de filtro o criterio ideológico en los procesos de contratación académica. Aunque la proporción exacta varía entre grupos y depende de cómo se formuló la moción en cada sesión, en general, entre 50 y 60 % de quienes votaron lo hicieron a favor de la medida propuesta; además, un porcentaje adicional considerable se declaró indeciso y muy pocos votaron abiertamente en contra sin matizaciones. Esta distribución de votos ya anticipa que el tema genera incomodidad moral, y que muchas personas no tienen una posición por completo cristalizada, sino que están explorando en tiempo real las implicaciones de distintas alternativas normativas.

La discusión abierta que sigue a la votación permite observar cómo se argumentan y se justifican estas posiciones. Con frecuencia, quienes se pronuncian a favor de exigir declaraciones de compromiso con la justicia social tienden a enfatizar con pasión la responsabilidad de la universidad de proteger a quienes pertenecen a grupos vulnerados y, por lo tanto, enfrentan discriminación sistemática en la sociedad en general. El argumento central es que una persona docente que expresa de forma pública posturas transfóbicas, machistas, racistas u hostiles hacia minorías, aunque lo haga fuera del aula y no incurra en actos explícitos de discriminación en sus clases o en la evaluación de estudiantes, contribuye de todas formas a crear un clima ins-

titucional hostil que afecta el bienestar emocional, el aprovechamiento académico y el sentido de pertenencia de quienes son blanco de esos discursos.

4.6.2. Dilemas sobre criterios, arbitrariedad y confianza institucional

Tanto las voces más escépticas como las que se declararon indecisas durante la votación comprenden la preocupación legítima por proteger a estudiantes vulnerables, pero subrayan con insistencia una serie de riesgos prácticos y normativos asociados a la implementación de filtros ideológicos en la contratación académica. El primero se refiere a la vaguedad y a la posible arbitrariedad de los criterios utilizados para definir qué cuenta exactamente como *compromiso con la justicia social*, o bien qué tipo de expresiones públicas quedarían fuera del umbral de lo aceptable a nivel institucional. La segunda preocupación refiere a la ausencia de mecanismos claros de apelación, así como de garantías robustas de debido proceso, para quienes se sintieran señalados o excluidos por sostener posiciones que consideran legítimas y protegidas por la libertad de expresión.

Estas preocupaciones sobre la arbitrariedad y el debido proceso no son triviales ni responden sólo a un libertarianismo abstracto que defiende la libertad de expresión sin considerar sus efectos sobre grupos vulnerables. Reflejan, más bien, una comprensión sofisticada de que las instituciones no son entidades neutrales ni siempre confiables, y que reglas hechas con buenas intenciones pueden ser capturadas, distorsionadas o utilizadas de maneras no previstas por quienes las diseñaron en un inicio.

4.6.3. Desconfianza institucional y preferencia por soluciones inmediatas

Quienes defienden medidas más drásticas, como la cancelación preventiva de contrataciones o la ruptura de colaboraciones con académicos que sostienen posturas consideradas dañinas, expresan una desconfianza profunda, y fundamentada en la experiencia, con respecto a la aplicación efectiva de protocolos y reglamentos institucionales para atender casos de violencia simbólica, acoso o discriminación. Señalan de manera recurrente que, en la práctica, cuando estudiantes reportan casos de profesores que hacen comentarios discriminatorios, crean ambientes hostiles o ejercen microagresiones sistemáticas contra minorías, las universidades suelen reaccionar tarde, con

extrema cautela, priorizando la protección de la reputación institucional por encima de la protección efectiva de las víctimas.

Esta tensión entre la búsqueda legítima de protección efectiva para grupos vulnerables y el riesgo de instaurar mecanismos arbitrarios que debiliten el pluralismo no se resuelve de manera definitiva en las discusiones de los grupos focales. En su lugar, lo que se observa es un forcejeo genuino entre valores que se reconocen como importantes, pero que entran en conflicto en casos concretos difíciles de resolver. La discusión evidencia una tensión difícil de zanjar mediante fórmulas abstractas: se busca evitar, por un lado, la impunidad de discursos que causan daño real a grupos vulnerables y, por el otro, la instauración de una suerte de inquisición ideológica que sancione opiniones impopulares pero legítimas. Esta tensión condensa varias dimensiones de las competencias cívicas que el proyecto busca comprender: la capacidad de entender principios democráticos complejos y a veces contradictorios, la sensibilidad hacia desigualdades estructurales y experiencias de discriminación, la conciencia sobre efectos no previstos de diseños normativos bien intencionados y la capacidad de imaginar arreglos institucionales complejos que balanceen valores en tensión, sin sacrificar ninguno por completo.

4.7. Síntesis analítica y aportes de la fase cualitativa al proyecto

4.7.1. Patrones transversales y ejes de tensión

El conjunto articulado de los siete grupos focales permite identificar varios patrones robustos y transversales que dialogan con las cuatro tensiones estructurales planteadas en el marco conceptual del proyecto. El primero refiere al carácter situado y multidimensional de las competencias cívicas, que aparecen de manera consistente como entramados complejos donde se combinan y se tensan recursos cognitivos disponibles, emociones, identidades morales, experiencias en instituciones educativas o políticas y arquitecturas de plataformas digitales que estructuran modalidades específicas de acceso a la información e interacción con otros.

El segundo patrón documenta de manera robusta la estratificación social y formativa de las competencias cívicas, fenómeno que se manifiesta en los distintos climas institucionales analizados en la muestra. Algunos contextos ofrecen oportunidades estructurales para el ejercicio y el desarrollo de

prácticas cívicas, en tanto que otros —atravesados por la precariedad material, por estudiantes que deben trabajar de manera simultánea a sus estudios y por experiencias de exclusión simbólica— dificultan la posibilidad de sostener involucramientos políticos duraderos, además de que producen una relación más intermitente, instrumental o episódica con la participación política.

El tercer patrón refiere a la polarización afectiva que condiciona los imaginarios sobre el *otro* político, de tal forma que lo configura como más extremo, dogmático y agresivo de lo que las interacciones efectivas en contextos moderados como los grupos focales efectivamente muestran. Sin embargo, esta polarización afectiva no agota las experiencias de interacción ni elimina del todo las capacidades deliberativas. En contextos específicos donde se establecen reglas explícitas de interacción, se modera la discusión y se ralentiza el ritmo del intercambio a fin de permitir la escucha activa y la reflexión, emergen con recurrencia capacidades para el diálogo que contrastan con las dinámicas aceleradas del algoritmo y las emociones intensificadas de las redes sociodigitales.[47]

El cuarto patrón consiste en la ambivalencia profunda con que las instituciones educativas son vistas como espacios de oportunidad valiosa para el debate, el aprendizaje cívico y el ejercicio de capacidades deliberativas, a la par que como entornos donde las violencias simbólicas, discriminaciones y abusos de poder no siempre son atendidos con la eficacia que se esperaría de instituciones que se presentan como comprometidas con valores de diversidad, inclusión y justicia. Esta ambivalencia alimenta demandas legítimas de protección reforzada para grupos vulnerables, a la vez que genera preferencias por soluciones expeditas —como la cancelación o la ruptura de colaboraciones— que simplifican dilemas institucionales complejos y pueden tener costos no intencionales sobre el pluralismo y las garantías del debido proceso.

4.7.2. Aportes específicos para el estudio y para el Instituto Electoral de la Ciudad de México

En el marco más amplio del proyecto de investigación, la fase cualitativa produjo cuatro contribuciones sustantivas y diferenciadas que complementan los hallazgos de la fase cuantitativa. La primera profundiza en la dimensión deliberativa de las competencias cívicas. Mientras que la encuesta mide esta dimensión mediante ítems que preguntan en abstracto sobre disposiciones a

[47] Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit.*; Mason, *op. cit.*

escuchar al otro, capacidad de cambiar de opinión o valoración del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, los grupos focales permiten observar directamente cómo se despliegan, en una situación real, estas competencias de argumentación, escucha activa y manejo del disenso.

La segunda contribución radica en que los grupos focales documentan a detalle la centralidad de acciones episódicas que se despliegan de manera intensa, pero intermitente; de acciones comunicativas que, mediadas por plataformas digitales, buscan más la viralización y la presión simbólica que la transformación institucional directa, y de formas de participación digital que combinan humor, entretenimiento y análisis político de formas que desafían las categorías tradicionales de involucramiento cívico. Además, la fase cualitativa permite documentar los criterios con los que las personas jóvenes evalúan la legitimidad de repertorios controversiales como la desobediencia civil, lo que muestra que, lejos de un apoyo ingenuo o incondicional a cualquier forma de protesta, hay una deliberación genuina sobre condiciones de legitimidad, proporcionalidad, afectación a terceras personas y gradación de tácticas.

La tercera contribución se refiere a la comprensión densa de los ecosistemas informativos juveniles contemporáneos, a fin de diseñar estrategias de educación cívica y de alfabetización mediática que partan del lugar real desde el cual las juventudes se informan, en lugar de imaginarios normativos sobre cómo deberían informarse. Estos hallazgos ofrecen insumos concretos para diseñar intervenciones educativas, reconociendo tanto las competencias que ya han desarrollado las juventudes como los sesgos sistemáticos que operan de manera no consciente.

La cuarta contribución identifica tensiones institucionales clave que atañen directamente a la gobernanza de espacios educativos y que son relevantes no sólo para universidades sino también para el Instituto Electoral de la Ciudad de México en su búsqueda por promover una participación informada, deliberación pública de calidad y cultura democrática. El bloque hiperpolémico de los grupos focales señala dilemas normativos reales y difíciles de resolver sobre cómo conciliar principios que pueden entrar en tensión: la libertad académica y de expresión, el pluralismo ideológico que requiere tolerar posiciones impopulares, la protección efectiva de grupos históricamente vulnerados que enfrentan discriminación sistemática y las garantías de debido proceso que eviten arbitrariedades y persecución de opiniones minoritarias.

Para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estos hallazgos sugieren líneas de acción específicas que podrían orientar estrategias de educación cívica y de promoción de la cultura democrática entre juventudes universitarias, esto mediante, por ejemplo, el diseño de talleres y espacios

de deliberación estructurada que reproduzcan las condiciones de los grupos focales que permitieron desplegar capacidades deliberativas: reglas claras de interacción, moderación activa que garantice turnos de palabra y que prevenga descalificaciones personales, dispositivos que ralenticen la discusión para permitir la escucha reflexiva y dinámicas que obliguen a parafrasear y reconocer puntos válidos en argumentos con los que se está en desacuerdo. También se sugiere el desarrollo de materiales didácticos sobre alfabetización mediática dirigidos a las plataformas que usan las personas jóvenes, reconociendo que la educación cívica contemporánea no puede ignorar el papel central de TikTok, X, Instagram o de creadores de contenido político-humorístico en la configuración de los ecosistemas informativos juveniles.[48]

Finalmente, los hallazgos invitan a reflexionar sobre cómo fortalecer la confianza en las instituciones formales de participación y de procesamiento de demandas ciudadanas, dado que la información obtenida de los grupos focales indica la preferencia por soluciones expeditas que pueden tener costos no intencionales sobre el pluralismo y la calidad de la deliberación pública. Fortalecer esta confianza no debe limitarse a campañas de comunicación promovidas desde los canales institucionales, más bien se deben buscar transformaciones efectivas que demuestren con hechos la capacidad de las instituciones para responder de manera oportuna, justa y eficaz a la ciudadanía, ya sea en la participación, la denuncia o la exigencia de rendición de cuentas.

4.7.3. Líneas abiertas para análisis posteriores y articulación con la fase cuantitativa

Este documento no agota el potencial que ofrece el rico material empírico recogido en la fase cualitativa del proyecto. Quedan abiertas múltiples líneas de trabajo que podrían desarrollarse en análisis posteriores o en productos derivados de la investigación. Una primera línea consiste en profundizar de manera más sistemática en comparaciones entre tipos de institución educativa, a fin de vincular los patrones observados en los grupos focales con variables específicas de la encuesta cuantitativa, como los índices de clima formativo, la composición socioeconómica de la matrícula o las experiencias declaradas de participación política previa.

Una segunda línea de trabajo consiste en construir minibiografías cívicas a partir de las intervenciones de participantes específicos a lo largo de toda

[48] Alejandro Moreno, *La evolución cultural en México: Cuatro décadas de cambio de valores, 1982-2023* (Los valores de los mexicanos VII), México, Banco Nacional de México, 2025.

la sesión del grupo focal, con el objetivo de mostrar cómo se configuran en casos concretos las trayectorias que van desde el desinterés inicial hasta el activismo sostenido, o desde el involucramiento intenso hasta el desencanto y el retiro. Una tercera línea implica mapear de manera más sistemática las distorsiones cognitivas específicas que aparecen en las deliberaciones y, así, explorar en qué medida estas distorsiones se asocian con el diseño algorítmico de los ecosistemas informativos digitales o si responden a sesgos cognitivos más generales que aparecen en cualquier contexto de razonamiento político. Una cuarta línea de trabajo pendiente consiste en traducir los hallazgos cualitativos en recomendaciones pedagógicas concretas y operativas para el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Entender las competencias cívicas juveniles como un campo de tensiones estructurales en las que se cruzan desigualdades materiales y simbólicas, instituciones que ofrecen oportunidades diferenciadas, identidades morales fuertemente cargadas y tecnologías digitales que median y estructuran la socialización política permite capturar la complejidad irreductible del fenómeno estudiado, sin caer en tipologías simplificadoras ni en diagnósticos normativos que culpabilizan a las juventudes por supuestas deficiencias individuales. Los grupos focales no sólo ilustran estas tensiones de manera vívida mediante narrativas concretas y discusiones situadas, sino que muestran de manera esperanzadora que incluso en contextos de polarización intensa, desconfianza institucional generalizada y ecosistemas digitales que incentivan la confrontación más que el diálogo, las juventudes universitarias de la Ciudad de México cuentan con recursos deliberativos y normativos valiosos que pueden ser fortalecidos.

5. Hallazgos y conclusiones

Esta investigación sobre competencias cívicas en juventudes universitarias de la Ciudad de México ha permitido documentar con rigor tanto las capacidades desplegadas por esta población como las tensiones estructurales que condicionan su desarrollo y ejercicio.

5.1. Síntesis de hallazgos principales

5.1.1. Competencias cívicas como entramado situado y contextualmente activado

El estudio documentó una tensión constitutiva entre las disposiciones declaradas por las juventudes universitarias y sus prácticas efectivas en contextos de interacción política. Cuando se observan sus interacciones concretas en los grupos focales o se exploran sus prácticas cotidianas de consumo informativo y conversación política, emergen patrones sistemáticos de evitación del conflicto, autocensura estratégica, homofilia informativa y dificultades para sostener intercambios deliberativos que no deriven en polarización o confrontación personal.

Esta brecha entre declaraciones normativas y prácticas efectivas no debe interpretarse como hipocresía o como deficiencia moral de las juventudes participantes, sino como evidencia empírica de que las competencias cívicas no son atributos que las personas simplemente poseen o carecen, sino capacidades que se activan o inhiben dependiendo de los contextos, las reglas de interacción, la composición de las personas interlocutoras y las consecuencias anticipadas de la participación.[49] Este hallazgo corrobora los argumentos de Jerome[50] sobre la necesidad de crear infraestructuras institucionales que

[49] Biesta, *op. cit.*
[50] Jerome *et al.*, *op. cit.*

habiliten la deliberación en contextos de alta polarización, y complementa los hallazgos de LeCompte[51] sobre el papel de la educación cívica orientada a la acción en el desarrollo de competencias que sólo se manifiestan cuando existen oportunidades reales de ejercicio.

5.1.2. Estratificación social y reproducción de desigualdades cívicas

La fase cuantitativa del estudio confirmó la existencia de brechas sistemáticas en el desarrollo y ejercicio de competencias cívicas asociadas a variables de origen socioeconómico, tipo de institución universitaria, trayectoria educativa familiar y capital cultural disponible; se trata de hallazgos que se alinean con la extensa literatura sobre la estratificación social del compromiso cívico.[52] Estas brechas se manifestaron con particular claridad en la fase cualitativa, donde las juventudes con más capital cultural mostraron niveles superiores de familiaridad con el vocabulario político especializado, facilidad para identificar falacias argumentativas en intervenciones ajenas, conocimiento de casos históricos o internacionales que permiten contextualizar debates contemporáneos y confianza para intervenir en discusiones sin temor a ser descalificadas. Estas diferencias no reflejan capacidades cognitivas diferenciales, sino la acumulación de trayectorias educativas desiguales y el acceso diferencial tanto a recursos culturales como a experiencias.

Destaca el hallazgo de que las brechas no se limitan a operar en dimensiones cognitivas o de conocimiento, también abarcan dimensiones afectivas y disposicionales que condicionan la confianza subjetiva en la propia capacidad de influencia, lo que la literatura especializada denomina *eficacia política interna*.[53] Esta configuración estructural genera círculos viciosos en los que la desigualdad de recursos se traduce en desigualdad participativa que, a su vez, refuerza la exclusión política de grupos ya marginados.[54]

5.1.3. Polarización afectiva, identidades morales y erosión de competencias deliberativas

Una de las dimensiones más preocupantes documentadas por el estudio corresponde a la intensidad de la polarización afectiva y al papel central

[51] LeCompte, Blevins y Riggers-Piehl, *op. cit*.
[52] Gaby, *op. cit*.; Schröder y Neumayr, *op. cit*.; Uslaner y Brown, *op. cit*.
[53] Schulz *et al., op. cit*.
[54] Schröder y Neumayr, *op. cit.*

de las identidades morales en la configuración de posiciones políticas y en la construcción del otro político. Los resultados muestran que además de discrepar sobre políticas públicas específicas o la evaluación de gobiernos y partidos, las juventudes universitarias construyen identidades colectivas con una fuerte carga emocional en las que la adhesión a ciertas posiciones se vincula con atributos morales fundamentales de bondad, justicia o autenticidad, mientras que las posiciones contrarias se asocian con defectos morales o con mala fe deliberada. Este fenómeno, ampliamente documentado en la literatura norteamericana contemporánea,[55] representa una transformación profunda en la naturaleza del conflicto político que transita de desacuerdos sobre medios o fines hacia incompatibilidades identitarias que operan con lógicas de suma cero. En este contexto, cambiar de opinión no constituye un signo de virtud epistémica que indica disposición a aprender, sino una traición a la propia identidad y a la comunidad moral de pertenencia.

Se documentó, además, que la polarización afectiva no se distribuye de manera uniforme. Las personas jóvenes que consumen grandes cantidades de contenido político en plataformas mediadas por el algoritmo, y que pertenecen a círculos sociales homogéneos en términos ideológicos, presentan niveles más altos de animosidad hacia quienes sostienen posiciones contrarias y de disposición a atribuir mala fe o incompetencia a sus adversarios políticos, así como una menor capacidad para reconocer la legitimidad de argumentos del lado contrario.

5.1.4. Instituciones educativas como espacios ambivalentes de socialización política

Si bien las universidades constituyen espacios privilegiados de socialización política que concentran recursos, ofrecen oportunidades de participación organizada y exponen a las juventudes a diversidad de perspectivas y conocimientos especializados, también reproducen y, en ocasiones, profundizan desigualdades, generan dinámicas de autocensura y transmiten implícitamente normas de evitación del conflicto que limitan el desarrollo de competencias deliberativas robustas.

Resulta paradójico que, en nombre de promover un ambiente inclusivo y respetuoso, algunas instituciones educativas generen climas normativos que privilegian la armonía superficial sobre el desacuerdo productivo, lo que limita

[55] Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit.*; Mason, *op. cit.*

las oportunidades de desarrollar las competencias específicas que requiere la deliberación democrática en contextos de pluralismo profundo. Como argumenta Biesta en su crítica a las concepciones instrumentales de la educación democrática, existe una tensión constitutiva entre socialización y subjetivación que no puede resolverse mediante diseños curriculares técnicos, sino que requiere una reflexión política profunda sobre qué tipo de sujetos democráticos se busca formar.

5.1.5. Ecosistemas informativos digitales, mediación algorítmica y erosión de la esfera pública

El estudio documentó la centralidad de las plataformas sociodigitales en la configuración de los ecosistemas informativos juveniles y confirmó la existencia de dinámicas de segregación informativa que limitan la exposición a perspectivas diversas. Sin embargo, también reveló que los grupos universitarios se encuentran lejos de ser receptores pasivos de contenidos algorítmicos, pues son capaces de desarrollar estrategias activas de navegación, curación y verificación de información. Aunque estas estrategias resultan asimétricas y frecuentemente insuficientes frente a la sofisticación de la desinformación contemporánea, su existencia sugiere que las intervenciones formativas en alfabetización mediática pueden partir de prácticas efectivas ya desplegadas por las propias juventudes, en lugar de asumir una carencia total de competencias.

Cabe destacar el hallazgo de que las juventudes exhiben una conciencia reflexiva sobre sus propias burbujas informativas, pero experimentan dificultades significativas para romperlas. Esta comprensión sin agencia sugiere que el problema no radica sólo en la falta de literacidad crítica, sino en las arquitecturas tecnológicas que estructuran las posibilidades de acción. Las plataformas algorítmicas no son infraestructuras neutrales que se limitan a distribuir contenidos según preferencias preexistentes, sino que activamente configuran qué información resulta accesible, qué voces son amplificadas, qué estilos comunicativos son recompensados con visibilidad y qué tipo de intercambios políticos resultan posibles o rentables. Esta mediación algorítmica de la esfera pública representa una transformación estructural que no puede abordarse sólo mediante intervenciones educativas orientadas a individuos, requiere, a la par, una regulación de infraestructuras tecnológicas y la transformación de modelos de negocio basados en la amplificación de contenidos polarizantes.

5.2. Conclusiones teóricas y conceptuales

Los hallazgos empíricos del estudio permiten formular cinco conclusiones teóricas y conceptuales fundamentales. En primer lugar, el estudio confirma de manera contundente que las competencias cívicas deben conceptualizarse como configuraciones situadas y relacionales, antes que como atributos individuales estables. En términos metodológicos, sugiere que los estudios basados exclusivamente en encuestas que miden disposiciones declaradas pueden sobreestimar o subestimar de forma sistemática las capacidades efectivas de las poblaciones estudiadas, lo que valida e, incluso, exige enfoques mixtos que combinen la medición estandarizada con la observación etnográfica de prácticas situadas.[56] Desde una perspectiva de política pública, implica que las intervenciones orientadas al fortalecimiento de competencias cívicas deben enfocarse tanto en transformar contextos institucionales como en desarrollar capacidades individuales, reconociendo que estas últimas sólo pueden ejercerse cuando existen oportunidades estructurales para su despliegue.[57]

En segundo lugar, la investigación documenta que la estratificación social de las competencias cívicas opera mediante mecanismos más complejos que la simple distribución desigual de recursos materiales o el acceso a la educación formal. Las brechas observadas devienen de la articulación de desigualdades en capital económico, cultural, social, experiencias previas de participación, confianza en instituciones, acceso a redes de información diversificadas y reconocimiento institucional de formas legítimas de participación.

En tercer lugar, el estudio identifica la polarización afectiva y la moralización de la política como fenómenos que operan con lógicas distintas de la polarización ideológica tradicional, y que plantean desafíos específicos para el ejercicio de las competencias deliberativas. La evidencia muestra que las juventudes universitarias contemporáneas no se polarizan principalmente en torno a posiciones sobre políticas públicas específicas o a evaluaciones de desempeño gubernamental, sino en torno a identidades morales colectivas que operan como fuentes fundamentales de sentido, pertenencia y autoestima.[58] Esta conclusión sugiere que para fortalecer las competencias deliberativas en contextos de alta polarización afectiva no basta con desarrollar habilidades técnicas de argumentación o búsqueda de información, es necesario abordar las dimensiones emocionales e identitarias de la parti-

[56] Hoskins y Janmaat, *op. cit*.
[57] LeCompte, Blevins y Riggers-Piehl, *op. cit*.
[58] Han y Dawson, *op. cit.*; Han, Ballard y Choi, *op. cit*.

cipación política mediante estrategias que permitan a las personas sostener intercambios políticos tensos, sin que ello amenace su identidad moral o su pertenencia a comunidades de referencia.

En cuarto lugar, la investigación documenta que los ecosistemas informativos digitales contemporáneos no sólo modifican las fuentes y los formatos mediante los cuales las juventudes acceden a la información política, sino que transforman radicalmente la socialización política, la construcción de identidades colectivas y la formación de la opinión pública.

En quinto lugar, se encontró que las instituciones educativas operan como espacios ambivalentes, ya que habilitan y, a la vez, constriñen el desarrollo de competencias cívicas. Esta ambivalencia significa que el fortalecimiento de estas competencias por parte de las instituciones educativas requiere de transformaciones que, más allá de la incorporación de contenidos curriculares específicos, se dirijan a las culturas institucionales, las pedagogías efectivamente desplegadas y los climas normativos.

5.3. Respuestas a las preguntas de investigación

Esta sección responde de manera sistemática a cada una de las preguntas de investigación a partir de la evidencia empírica documentada, estableciendo conexiones explícitas con la literatura especializada y señalando tanto hallazgos convergentes como hallazgos que tensionan expectativas teóricas previas.

¿Cuáles son los niveles y la distribución de las competencias cívicas en juventudes universitarias de la Ciudad de México?

La fase cuantitativa estableció que las juventudes universitarias de la Ciudad de México presentan niveles de moderados a altos en conocimiento institucional básico y adhesión declarada a valores democráticos fundamentales, pero niveles más bajos y heterogéneos en participación efectiva, exposición a diversidad informativa y disposición a sostener intercambios políticos con personas que piensan distinto.

¿Cómo se manifiestan las desigualdades en el desarrollo y ejercicio de las competencias cívicas?

El ámbito político reproduce desigualdades estructurales más amplias, en especial las económicas, educativas y culturales, lo que corrobora los argumentos de Urbina[59] sobre la traducción de las asimetrías sociales en asi-

[59] Urbina, *op. cit*.

metrías políticas, así como las conclusiones de Schröder y Neumayr[60] sobre la manera en que la desigualdad socioeconómica erosiona el compromiso cívico. Resalta el hallazgo de que las brechas también implican diferencias en el reconocimiento institucional de formas legítimas de participación, lo cual sugiere que la desigualdad opera tanto en la distribución de recursos como en el reconocimiento.

¿Qué papel juegan las identidades morales y la polarización afectiva en la configuración de competencias deliberativas?

Cuando las posiciones políticas operan como marcadores identitarios vinculados con atributos morales, las personas jóvenes desarrollan estrategias sistemáticas de evitación del conflicto, autocensura selectiva y homofilia informativa que limitan las oportunidades de desarrollar habilidades deliberativas robustas. Esta situación coincide con la literatura sobre polarización afectiva que documenta cómo la política contemporánea transita de desacuerdos sobre políticas hacia incompatibilidades identitarias.[61] Sin embargo, el estudio también documentó que cuando se proporcionan estructuras institucionales que desacoplan, así sea por un momento, el desacuerdo político de la amenaza identitaria mediante reglas claras de interacción y moderación activa, las personas jóvenes son capaces de desplegar competencias deliberativas sorprendentemente sofisticadas, de ahí que sea posible concluir que la polarización afectiva no constituye un obstáculo insuperable, sino una condición estructural que puede ser mediada mediante diseños institucionales apropiados.[62]

¿Cómo contribuyen las instituciones educativas al desarrollo de competencias cívicas y qué limitaciones presentan?

La transmisión de conocimientos especializados, la exposición a diversidad de perspectivas, las oportunidades de participación organizada y la generación de espacios de socialización política entre pares son algunas de las contribuciones de las instituciones educativas al desarrollo de las competencias cívicas; sin embargo, también presentan limitaciones que reproducen desigualdades preexistentes, generan climas normativos que privilegian la evitación del conflicto sobre el desacuerdo productivo y alejan los contenidos curriculares de las experiencias efectivas de participación, además de que carecen de pedagogías específicamente orientadas al desarrollo de competencias deliberativas en contextos de alta polarización.

[60] Schröder y Neumayr, *op. cit*.
[61] Iyengar, Sood y Lelkes, *op. cit*.; Mason, *op. cit.*
[62] Jerome *et al*., *op. cit*.

¿Qué características presentan los ecosistemas informativos digitales de las juventudes universitarias y cómo afectan sus competencias cívicas?

Estos ecosistemas se caracterizan por su alta dependencia a las plataformas sociodigitales, personalización algorítmica de contenidos, fragmentación de audiencias y exposición selectiva a fuentes ideológicamente afines. En contraste, también se identificó que las juventudes desarrollan estrategias activas de navegación crítica que incluyen verificación básica de fuentes, triangulación de información y reconocimiento reflexivo de sus propias burbujas ideológicas. Respecto al último punto, resulta interesante el hecho de que las juventudes exhiben conciencia reflexiva sobre sus burbujas informativas, pero experimentan dificultades para romperlas, lo cual deja entrever que el problema no radica sólo en literacidad crítica, sino en arquitecturas tecnológicas que estructuran posibilidades de acción.

Las respuestas a estas preguntas de investigación confirman que las competencias cívicas de la población joven universitaria de la Ciudad de México constituyen un campo atravesado por tensiones estructurales complejas. Su fortalecimiento requiere de intervenciones que operen, simultáneamente, en múltiples dimensiones institucionales, pedagógicas, comunicativas y tecnológicas.

6. Recomendaciones institucionales

Los hallazgos y conclusiones del estudio fundamentan un conjunto de recomendaciones dirigidas al Instituto Electoral de la Ciudad de México que se organizan en seis ejes estratégicos complementarios; cada uno incluye tanto orientaciones generales como especificaciones operativas que permiten su traducción en acciones institucionales concretas.

6.1. Foros permanentes de deliberación juvenil y desarrollo de competencias dialógicas

El IECM puede colaborar con instituciones educativas universitarias para crear una red de foros permanentes de debate y deliberación juvenil que reproduzcan las condiciones que, en el estudio, permitieron activar competencias deliberativas. Estos foros deben estructurarse en torno a reglas claras de interacción que incluyan moderación activa para garantizar turnos de palabra equitativos, prevención explícita de descalificaciones personales o ataques *ad hominem*, dispositivos que ralenticen la velocidad de la discusión para favorecer la escucha reflexiva y dinámicas que obliguen a quienes participan a parafrasear argumentos ajenos antes de rebatirlos. No se trata de restricciones arbitrarias, sino de infraestructuras institucionales que impiden que el desacuerdo político derive, automáticamente, en ruptura de vínculos o en polarización irreversible.

Los foros deben diseñarse para abordar temas que generen desacuerdo profundo entre las personas participantes. La elección del tema deberá consultarse con las propias juventudes a fin de garantizar su relevancia, de igual forma se incluirán cuestiones tanto de política pública como debates morales y normativos sobre los límites de la libertad de expresión, los criterios de justicia distributiva o las tensiones entre seguridad y libertades civiles.

Estos espacios deberán complementarse con talleres sobre habilidades deliberativas que incluyan entrenamiento en técnicas de escucha activa, identificación de falacias argumentativas, distinción entre hechos verificables y opiniones, construcción de argumentos basados en evidencia, reconocimiento de sesgos cognitivos (tanto propios como ajenos) y manejo constructivo del desacuerdo. Se sugiere que los talleres eviten aproximaciones abstractas o descontextualizadas y, en su lugar, partan de casos concretos, así como que incorporen módulos específicos sobre el manejo de las emociones en contextos de deliberación política.

6.2. Programas integrales de alfabetización mediática y verificación de información

Se recomienda el diseño de campañas de alfabetización mediática adaptadas a las plataformas, formatos y personas creadoras de contenido que las juventudes consultan en su consumo informativo cotidiano. Esto implica reconocer que la educación cívica contemporánea no puede ignorar o deslegitimar plataformas como TikTok, Instagram, X o YouTube, tampoco puede limitarse a promover fuentes informativas tradicionales que las juventudes perciben como desconectadas de sus intereses o institucionalmente comprometidas. Las campañas deben desarrollarse en colaboración con creadoras y creadores de contenido político que ya cuentan con audiencias juveniles significativas, con el objetivo de aprovechar sus códigos comunicativos y su credibilidad para transmitir herramientas de verificación y pensamiento crítico. Esta aproximación reconoce que la credibilidad depende tanto del contenido como de la legitimidad percibida de los emisores, en especial en contextos de alta desconfianza institucional.

Los contenidos de alfabetización mediática deben enfocarse en desarrollar, mediante ejercicios prácticos, competencias que incluyan la trazabilidad de fuentes mediante la búsqueda inversa de imágenes y la verificación de autoría; triangulación de información comparando múltiples fuentes con líneas editoriales diversas; identificación de señales de baja credibilidad, como ausencia de autoría identificable o uso de lenguaje emocionalmente cargado sin sustento fáctico; reconocimiento de técnicas de manipulación visual mediante la detección de inconsistencias en imágenes o videos; comprensión de los algoritmos y sus efectos en la configuración de burbujas informativas, y el escepticismo calibrado que distinga entre niveles razonables de duda y teorías conspirativas infundadas.

Se recomienda, además, que las campañas incluyan componentes específicos sobre el funcionamiento de algoritmos y sus efectos en la configuración de burbujas informativas. Las personas jóvenes deben comprender que las plataformas sociodigitales distan de ser ventanas neutrales al mundo, más bien son infraestructuras que seleccionan, jerarquizan y amplifican ciertos contenidos sobre otros en función de criterios de maximización de *engagement,* que no necesariamente coinciden con criterios de calidad informativa o de relevancia cívica.

6.3. Intervenciones para el manejo de la polarización afectiva y la construcción de una cultura política dialogante

Es importante implementar, en colaboración estrecha con partidos políticos, medios de comunicación y plataformas digitales, campañas que transformen la cultura de la comunicación política. Estas campañas deben promover códigos de comunicación política responsable que incluyan el comprometerse con la veracidad factual verificable, evitar descalificaciones personales o la estigmatización de adversarios políticos como enemigos morales, reconocer complejidades y matices en problemas públicos que admiten múltiples aproximaciones legítimas, tener disposición a reconocer errores o modificar posiciones cuando la evidencia así lo justifique y respetar a las instituciones de verificación independiente y a las personas expertas técnicas cuando sus conclusiones resultan políticamente inconvenientes. Se debe interpelar a los partidos políticos para que reconozcan que las estrategias comunicativas basadas en la polarización deliberada, simplificación extrema y apelación sistemática al miedo o a la indignación moral pueden generar ventajas electorales de corto plazo, pero erosionan la calidad de la deliberación pública y generan una desafección política de largo plazo que, eventualmente, amenaza la legitimidad del sistema democrático.

Se recomienda desarrollar materiales pedagógicos que enseñen técnicas específicas de regulación emocional: identificación de elementos estresantes mediante ejercicios de automonitoreo, pausas reflexivas antes de responder a argumentos que generan reacciones viscerales, separación analítica entre el desacuerdo sustantivo y la amenaza identitaria, desarrollo de habilidades de empatía cognitiva que permitan comprender las razones que otras personas pueden tener para sostener posiciones con las que se está en desacuer-

do, y entrenamiento en técnicas de desescalamiento cuando los intercambios políticos comienzan a derivar en confrontación personal.

También se pueden promover narrativas que resalten experiencias exitosas de colaboración política entre actores con diferencias ideológicas profundas, para demostrar que el desacuerdo no necesariamente implica enemistad irreconciliable y que es posible mantener vínculos de respeto y colaboración incluso cuando persisten diferencias sustantivas. Estas narrativas deben seleccionarse con cuidado para no caer en falsas equivalencias que equiparen posiciones morales asimétricas o minimicen diferencias reales, a la par que demuestran la existencia de un pluralismo profundo no condena inevitablemente a sociedades a la fragmentación irreversible o a la guerra civil latente.

6.4. Fortalecimiento institucional, transparencia y demostración de capacidad de respuesta

Para mejorar la confianza de la ciudadanía, el IECM puede fortalecer mecanismos que den cuenta de su capacidad de respuesta efectiva. Esto implica reducir significativamente los tiempos de procesamiento de denuncias ciudadanas mediante el rediseño de procedimientos administrativos; la adopción de sistemas de seguimiento en tiempo real que permitan a la ciudadanía monitorear el estatus de sus solicitudes o quejas; procedimientos de toma de decisiones transparentes mediante la publicación proactiva de criterios de evaluación y de actas de deliberación institucional; comunicación clara y accesible de sus resoluciones institucionales, evitando lenguaje técnico o jurídico incomprensible para personas sin formación especializada; mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía evaluar el desempeño institucional, y canales de retroalimentación que incorporen aprendizajes de casos específicos en mejoras institucionales sistémicas.

Se recomienda establecer consejos consultivos juveniles permanentes que participen efectivamente en el diseño de políticas y programas institucionales, para garantizar que las perspectivas, intereses y lenguajes de la población joven sean incorporados de manera sustantiva en la planificación institucional. Más que operar como mecanismos simbólicos de legitimación, estos consejos deben constituirse como espacios efectivos de deliberación y codecisión que reconozcan a las personas jóvenes como interlocutores competentes capaces de contribuir a la solución de problemas institucionales complejos. La participación en estos consejos debe permitir la representación diversa de distintos perfiles socioeconómicos, tipos institucionales y posi-

ciones políticas, evitando que operen como espacios capturados por élites estudiantiles con mayor capital cultural o social.

6.5. Construcción de alianzas estratégicas multiactorales y evaluación sistemática de impacto

Se recomienda que el Instituto promueva alianzas estratégicas con múltiples actores que incluyan instituciones educativas universitarias públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil especializadas en educación cívica y derechos humanos, creadores de contenido digital con audiencias juveniles significativas, medios de comunicación comprometidos con el periodismo de calidad, plataformas tecnológicas dispuestas a asumir responsabilidad por los efectos de sus algoritmos, institutos de investigación académica capaces de documentar y evaluar intervenciones, y agencias gubernamentales con mandatos complementarios en educación, juventud o desarrollo social.

El vínculo con instituciones educativas universitarias es importante en la medida en que constituyen los espacios privilegiados de socialización política de las y los jóvenes; además, cuentan con infraestructuras, personal especializado y legitimidad institucional que el IECM no puede replicar por sí solo. Las alianzas con universidades deben materializarse en convenios formales que incluyan colaboraciones específicas en diseño curricular, formación de personal docente, desarrollo de materiales pedagógicos, implementación de programas piloto y evaluación sistemática de intervenciones.

Las alianzas con creadores de contenido digital y con plataformas tecnológicas pueden ser especialmente fructíferas dado el papel central que ocupan en la configuración de ecosistemas informativos juveniles. Estas colaboraciones deben negociarse reconociendo las lógicas económicas y profesionales de los actores involucrados, ofreciendo incentivos apropiados y evitando aproximaciones moralistas que desconozcan las realidades materiales del trabajo cultural digital.

Todas las alianzas estratégicas deben incluir evaluaciones robustas para documentar el impacto efectivo de las intervenciones implementadas y ajustar estrategias en función de la evidencia empírica sobre su efectividad. Se recomienda establecer colaboraciones con institutos de investigación académica que cuenten con capacidades metodológicas especializadas para analizar el impacto de las intervenciones educativas o comunicativas.

6.6. Intervenciones focalizadas para reducir las brechas de desigualdad cívica

El IECM podría considerar programas dirigidos a personas jóvenes universitarias en posiciones de desventaja estructural que incluyan becas de participación que compensen costos de oportunidad asociados a involucramiento cívico, tutorías especializadas que les proporcionen el capital cultural y social que no adquieren mediante sus redes familiares o comunitarias, pasantías en instituciones públicas que ofrezcan experiencias directas de participación política, conexión con redes de mentores que refuercen sus aspiraciones de involucramiento público y acceso preferencial a espacios formativos que desarrollen competencias específicas altamente valoradas en el campo político.

Es importante priorizar el trabajo con instituciones educativas enfocadas en poblaciones en desventaja socioeconómica, esto mediante recursos pedagógicos, formación docente especializada y apoyo institucional que compense parcialmente las desigualdades en infraestructura y recursos que caracterizan al sistema educativo mexicano. Se debe procurar evitar las aproximaciones verticales que impongan modelos normativos sin atender a contextos, necesidades y saberes locales. Como argumenta Bramwell[63] en su revisión de educación ciudadana en América Latina, las intervenciones más efectivas son aquellas que reconocen saberes y prácticas cívicas locales antes que aquellas que intentan imponer modelos estandarizados diseñados para contextos distintos.

Las intervenciones focalizadas deben reconocer como formas legítimas de participación política las prácticas de organización comunitaria, defensa de territorios, construcción de redes de apoyo mutuo o resistencia cotidiana frente a abusos de autoridad que constituyen el repertorio político efectivo de muchas juventudes en contextos de exclusión, pero que frecuentemente no son reconocidas como ejercicio de competencias cívicas. El objetivo no consiste en incorporar a las juventudes excluidas en formas institucionales preestablecidas de participación, sino en expandir el reconocimiento institucional de la pluralidad de formas mediante las cuales las juventudes ejercen agencia política en sus contextos específicos.

Las seis líneas estratégicas de recomendaciones presentadas reconocen que las competencias cívicas de las juventudes universitarias no constituyen déficits individuales a ser corregidos mediante instrucción unilateral, más

[63] Bramwell, *op. cit.*

bien son capacidades situadas que emergen en la intersección de trayectorias biográficas, oportunidades institucionales, ecosistemas informativos y cultura política. Su fortalecimiento requiere intervenciones multidimensionales y simultáneas en contextos institucionales, pedagogías específicas, infraestructuras tecnológicas, formas de comunicación política y estructuras de desigualdad.

6.6.1. Despliegue segmentado de las intervenciones cognitivas y de alfabetización cívica

Se recomienda que el Instituto traduzca esta fractura educativa en una estrategia diferenciada de alfabetización cívica que combine contenidos básicos sobre derechos, instituciones y procedimientos con módulos avanzados, orientados a los enclaves con mayor capital educativo. Esto implica diseñar materiales específicos para la población no universitaria, tanto joven como adulta, donde la prioridad sea construir un vocabulario mínimo compartido sobre el sistema político y sus reglas, partiendo de ejemplos concretos y cercanos a sus biografías.

En los enclaves universitarios de élite, públicos críticos y privados de acceso amplio, se recomienda aprovechar el capital educativo disponible para trabajar formas más complejas de alfabetización cívica, centradas en la interpretación crítica de conflictos públicos, el análisis de dilemas institucionales y la evaluación de la calidad democrática de las decisiones colectivas. Entre las juventudes no universitarias y parte de la población adulta, se recomienda priorizar mensajes breves, visuales y narrativos, distribuidos en espacios cotidianos (centros de trabajo, transporte, barrios, espacios recreativos) y en medios de alcance general, reforzando el vínculo entre información cívica y problemas concretos del entorno. En los públicos universitarios, en cambio, puede apostarse por formatos más densos (seminarios, laboratorios de análisis de información, proyectos colaborativos) que activen su mayor disposición a procesar información compleja.

Finalmente, la evidencia sobre tipos de alfabetización cívica indica la presencia de una sensibilidad más o menos extendida para reconocer que ciertas medidas son injustas, pero que no siempre tiene claridad sobre qué derecho se vulnera o qué institución debería intervenir. Se recomienda que los programas de educación cívica incluyan ejercicios explícitos de "traducción" entre intuiciones morales y arquitectura institucional: identificar el derecho implicado, la autoridad competente y las vías de reparación disponibles.

6.6.2. Intervenciones diferenciadas sobre autoeficacia, barreras identitarias y cultura democrática del desacuerdo

Se sugiere diseñar intervenciones escalonadas sobre la autoeficacia que partan de las distintas configuraciones segmentarias. Entre personas jóvenes no universitarias y en segmentos adultos con baja escolaridad, donde la sensación de "no saber lo suficiente" convive con barreras identitarias fuertes, las acciones institucionales deberían centrarse en reforzar la idea de que sus experiencias y saberes son relevantes para la vida pública, con el objetivo de reducir la percepción de que el debate político es un espacio reservado para "expertos" o para quienes dominan códigos académicos.

Se recomienda que los foros de deliberación y los dispositivos pedagógicos impulsados por el IECM incorporen de manera explícita el trabajo sobre normas de hospitalidad discursiva, reconocimiento del adversario y gestión no punitiva del desacuerdo. De igual manera, se podría experimentar con dispositivos de participación de baja exposición (consultas anónimas deliberativas, ejercicios de simulación, metodologías de "voz protegida" en foros juveniles) que permitan a personas con posiciones minoritarias ensayar su participación, sin quedar inmediatamente expuestas a la reacción del entorno.

Por último, las tensiones identificadas en el "saber ser democrático" sugieren que las intervenciones no deben limitarse a informar sobre derechos, sino también trabajar la gramática afectiva del conflicto. Se recomienda que las campañas y programas de formación incluyan casos concretos donde se debata qué significa proteger la libertad de expresión cuando se consideran ofensivos ciertos discursos, qué umbrales justifican restricciones y cómo se procesan institucionalmente esos desacuerdos. De este modo, las competencias normativas se anclan en dilemas reales, no sólo en definiciones abstractas.

6.6.3. Fortalecimiento escalonado de habilidades cívicas y repertorios de participación

Las líneas estratégicas existentes pueden complementarse con un plan escalonado de fortalecimiento de habilidades que identifique los eslabones de la cadena que están más debilitados en cada segmento, a fin de priorizar su desarrollo. Entre el estudiantado de universidades de élite y de la universidad pública crítica, se recomienda enfatizar talleres y clínicas de interlocución vertical: cómo preparar y sostener reuniones con funcionariado, cómo for-

mular peticiones formales, cómo usar mecanismos de participación institucional y de rendición de cuentas.

En las universidades privadas de acceso amplio, se pueden consolidar programas que articulen actividades culturales, deportivas y de ayuda social con experiencias explícitas de formación cívica: proyectos donde el estudiantado aprenda a negociar recursos, dialogar con autoridades locales y diseñar intervenciones comunitarias, de modo que la participación asociativa se convierta en un puente hacia prácticas cívicas más estables.

Se recomienda que el IECM diseñe itinerarios pedagógicos que muestren cómo se combinan, en la práctica, distintas formas de agencia política: desde el seguimiento informativo y la conversación cotidiana hasta la participación electoral, la organización colectiva y el uso estratégico de espacios institucionales. Presentar ejemplos diferenciados por segmento, que reconozcan sus condiciones materiales y sus trayectorias asociativas, puede contribuir a que la ciudadanía pase de repertorios fragmentarios a configuraciones más integrales de acción cívica.

****

Fortalecer las competencias cívicas de las personas jóvenes requiere intervenir en contextos institucionales, pedagogías específicas, infraestructuras tecnológicas, formas de comunicación política y estructuras de desigualdad. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar este proceso de transformación. Emprender este reto le permitirá posicionarse como una institución que, lejos de limitarse a la organización de procesos electorales, contribuye activamente a la construcción de una cultura democrática robusta, inclusiva y capaz de procesar desacuerdos profundos, sin derivar en una fragmentación irreversible o en una erosión de vínculos sociales fundamentales.

7. Fuentes consultadas

Biesta, Gert J. J., *Learning democracy in school and society: Education, lifelong learning, and the politics of citizenship,* Rotterdam, Sense Publishers, 2011.

Bramwell, Daniela, "Systematic review of empirical studies on citizenship education in Latin America 2000 to 2017 and research agenda proposal", *Citizenship, Social and Economics Education,* vol. 19, núm. 2, Sage, 2020, pp. 100-117, en <https://doi.org/10.1177/2047173420922506>.

Dahl, Robert A., "The problem of civic competence", *Journal of Democracy,* vol. 3, núm. 4, The Johns Hopkins University Press, 1992, pp. 45-59, en <https://dx.doi.org/10.1353/jod.1992.0048>.

Delfino, Gisela, Maite Beramendi y Elena Zubieta, "Participación social y política en Internet y brecha generacional", *Revista de Psicología*, vol. 37, núm. 1, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019, pp. 195-216, en <https://doi.org/10.18800/psico.201901.007>.

Gaby, Sarah, "The civic engagement gap(s): Youth participation and inequality from 1976 to 2009", *Youth & Society,* vol. 49, núm. 7, Sage, 2016, pp. 923-946, en <https://doi.org/10.1177/0044118X16678155>.

Galván Cabello, Miguel Francisco, Alondra Salazar y Julio César Tereucan Angulo, "Nativos/as digitales en México: Evaluación de las propiedades psicométricas de la Escala de Ciudadanía Digital en estudiantes universitarios/as", *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa,* núm. 82, Universidad de las Islas Baleares, Edite, 2022, pp. 119-135, en <https://doi.org/10.21556/edutec.2022.82.2635>.

García-Cabrero, Benilde *et al.* (eds.), *Civics and citizenship: Theoretical models and experiences in Latin America*, Rotterdam, Sense Publishers, 2017, en <https://doi.org/10.1007/978-94-6351-068-4>.

Gómez Tagle, Silvia y José Eduardo García, *La confianza y la participación de la juventud en la democracia,* México, Instituto Nacional Electoral, 2021, en <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/08/confianzayparticipacion.pdf>.

Han, Hyemin y Kelsie J. Dawson, "Civic identity consisting of moral and political identity among young adults", *Personality and Individual Differences,* vol. 233, 112895, International Society for the Study of Individual Differences, 2025, en <https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112895>.

Han, Hyemin, Parissa Jahromi Ballard y Youn-Jeng Choi, "Links between moral identity and political purpose during emerging adulthood", *Journal of Moral Education,* vol. 50, núm. 2, Londres, Taylor & Francis, 2021, pp. 166-184, en <https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1647152>.

Hart, Daniel y Robert Atkins, "Civic competence in urban youth", *Applied Developmental Science,* vol. 6, núm. 4, 2002, pp. 227-236, en <https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0604_10>.

Hoskins, Bryony y Jan Germen Janmaat, *Education, democracy and inequality: Political engagement and citizenship education in Europe,* Londres, Palgrave Macmillan, 2019, en <https://doi.org/10.1057/978-1-137-48976-0>.

Hoskins, Bryony, Michaela Saisana y Cynthia M. H. Villalba, "Civic competence of youth in Europe: Measuring cross national variation through the creation of a composite indicator", *Social Indicators Research,* vol. 123, Spring Nature, 2015, pp. 431-457, en <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0746-z>.

Hoskins, Bryony *et al*., *Measuring civic competence in Europe: A composite indicator based on IEA Civic Education Study 1999 for 14 year old in school*, Luxemburgo, European Communities, Institute for the Protection and Security of the Citizen, Centre for Research of Lifelong Learning, 2008.

Iyengar, Shanto, Gaurav Sood y Yphtach Lelkes, "Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization", *Public Opinion Quarterly,* vol. 76, núm. 3, Oxford Academic, 2012, pp. 405-431, en <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>.

Jerome, Lee *et al*., "A systematic literature review of research examining the impact of citizenship education on active citizenship outcomes", *Review of Education,* vol. 12, núm. 2, e3472, British Educational Research Association, 2024, en <https://doi.org/10.1002/rev3.3472>.

Jurs, Pāvel, "Forming components of civic competence", *Journal of Teaching and Education,* vol. 3, núm. 3, USN Scientific Journal, 2014, pp. 265-277.

Kitanova, Magdelina, "Youth political participation in the EU: Evidence from a cross-national analysis", *Journal of Youth Studies,* vol. 23, núm. 7, 2020, pp. 819-836, en <https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1636951>.

LeCompte, Karon, Brooke Blevins y Tiffani Riggers-Piehl, "Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data", *The Journal of Social Studies Research,* vol. 44, núm. 1, Sage, 2020, pp. 127-137, en <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.03.002>.

Lukianoff, Greg y Jonathan Haidt, *The coddling of the American mind: How good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure,* Penguin Random House, 2018.

Mason, Lilliana, *Uncivil agreement: How politics became our identity*, Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 2018.

Miles, Andrew y Stephen Vaisey, "Morality and politics: Comparing alternate theories", *Social Science Research,* vol. 53, septiembre de 2015, pp. 252-269, en <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.06.002>.

Moreno, Alejandro, *La evolución cultural en México: Cuatro décadas de cambio de valores, 1982-2023* (Los valores de los mexicanos VII), México, Banco Nacional de México, 2025.

Otero, Estefanía Soledad, "Ciudadanía digital y jóvenes. Demandas, formatos y dinámicas participativas en entornos virtuales en escuelas preuniversitarias de la Ciudad de Buenos Aires (2020-2021)", *Espacios en Blanco. Revista de Educación*, vol. 2, núm. 34, Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2024, pp. 129-143, en <https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB34-404>.

Schröder, Joris Melchior y Michaela Neumayr, "How socio-economic inequality affects individuals' civic engagement: A systematic literature review of empirical findings and theoretical explanations", *Socio-Economic Review,* vol. 21, núm. 1, Oxford Academic, 2023, pp. 665-694, en <https://doi.org/10.1093/ser/mwab058>.

Schulz, Wolfram *et al.*, *Becoming citizens in a changing world: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 international report,* Ámsterdam, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Springer, 2018, en <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73963-2>.

Urbina Cortés, Gustavo Adolfo, *Ficciones democráticas: Un estudio sobre desigualdades sociales tornadas en asimetrías políticas,* México, El Colegio de México, 2020.

Uslaner, Eric M. y Mitchell Brown, "Inequality, trust, and civic engagement", *American Politics Research,* vol. 33, núm. 6, Sage, 2005, pp. 868-894, en <https://doi.org/10.1177/1532673X04271903>.

Zhang, Weiyu, "Political disengagement among youth: A comparison between 2011 and 2020", *Frontiers in Psychology,* vol. 13, Frontiers Media, 2022, pp. 1-10, en <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.809432>.

Mapas formativos y repertorios cívicos: competencias cívicas y participación juvenil en la Ciudad de México. Versión ejecutiva se terminó en septiembre de 2026. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Andrea Silva Martínez, supervisora de grupo "B". Se utilizaron las fuentes tipográficas Frutiger LT Std y Montserrat.

Instituto Electoral de la Ciudad de México
Huizaches 25, Rancho Los Colorines,
Tlalpan, 14386, Ciudad de México
Teléfono: 55 5483 3800
www.iecm.mx

@iecm
InstitutoElectoralCM
InstitutoElectoralDF
@ie_cm
@iecmoficial